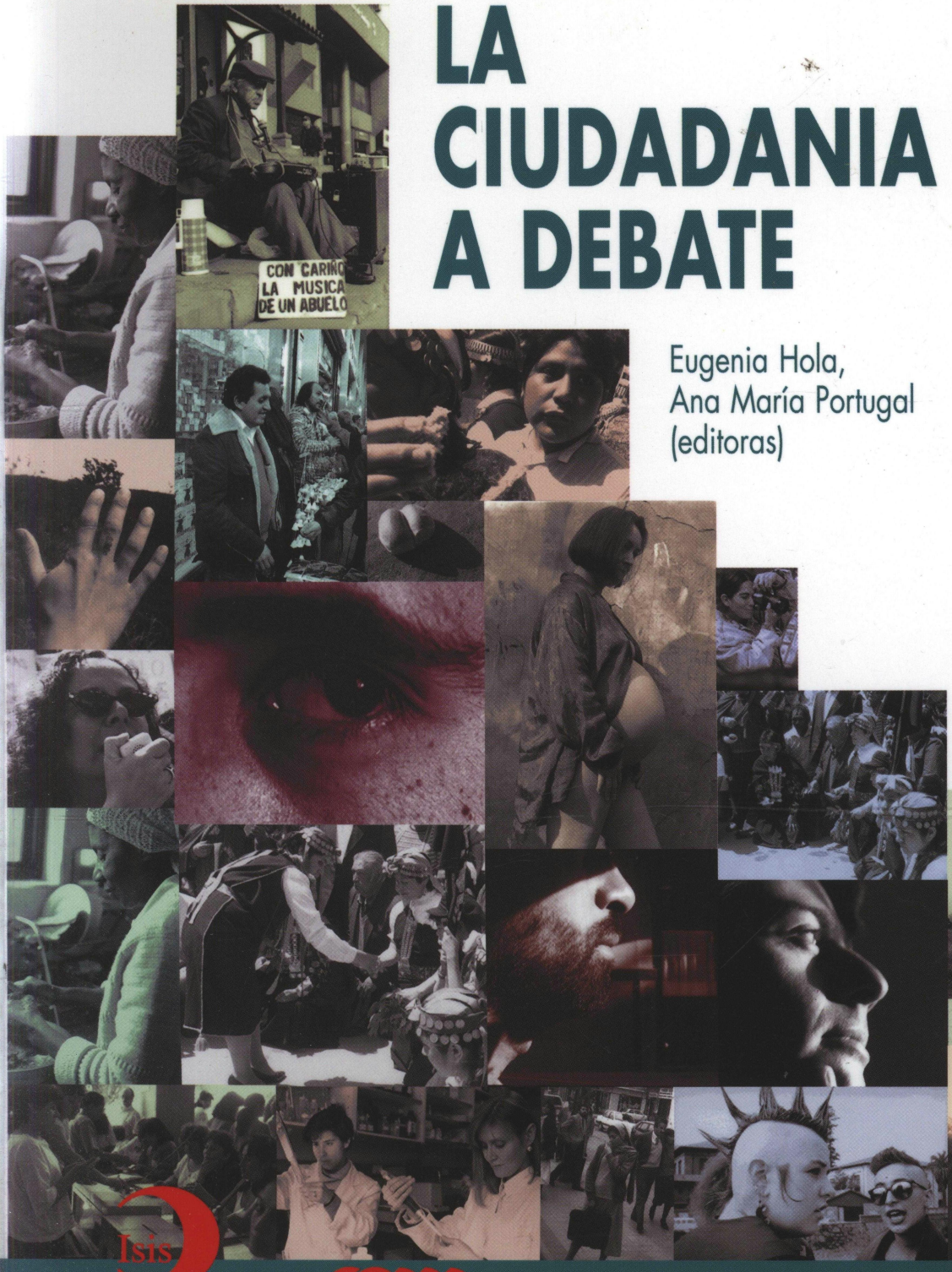
LA CIUDADANIA A DEBATE



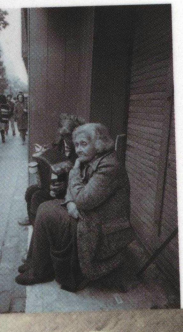
Eugenia Hola,
Ana María Portugal
(editoras)

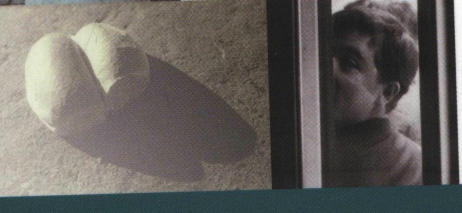
Isis internacional

EDICIONES DE LAS MUJERES Nº 25

Autoras antalogadas:

Rosario Aguirre
Jeanine Anderson
Paola Cappellin
Elizabeth Jelin
Bérengère Marques-Pereira
Maxine Molyneux
Virginia Vargas
Nira Yuval-Davis





LA CIUDADANIA A DEBATE

Eugenia Hola y Ana María Portugal, editoras

Isis internacional

centro de estudios de la mujer

EDICIONES DE LAS MUJERES N° 25
Diciembre 1997

© 1997 Isis Internacional
Inscripción N° 102.496
ISSN 0716-8101
Santiago, Chile

Editoras: Eugenia Hola y Ana María Portugal
Colaboración especial: Virginia Guzmán

Directora: Ana María Portugal
Representante legal: Ana María Gómez
Producción editorial: Carmen Torres
Diseño gráfico: Rosa Varas
Traducciones: Silvia Hernández y Oriana Jiménez
Corrección de textos: Sonia Chamorro
Secretaria: Katia Corbalán
Portada y páginas gráficas interiores: Collage de Evelyn Ruman

Impresión: Andros Ltda.

Esta publicación ha sido posible gracias al financiamiento de la Fundación Heinrich Böll, e.V. (Alemania).

Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente el punto de vista de Isis Internacional ni de sus integrantes.

INDICE

Presentación 7

Introducción
Eugenia Hola 8

Debates sobre comunitarismo, moralidad y políticas de identidad
Maxine Molyneux 15

Mujeres, ciudadanía y diferencia
Nira Yuval-Davis 35

Un debate feminista en curso
Virginia Vargas 55

Los derechos y la cultura de género
Elizabeth Jelin 71

El maternalismo en las políticas sociales
Rosario Aguirre 87

¿Pueden los ciudadanos tener familia?
Jeanine Anderson 102

Los derechos reproductivos como derechos ciudadanos
Bérengère Marques-Pereira 119

Las trabajadoras interpelan a la sociedad brasileña
Paola Cappellin 135

Autoras 153

PRESENTACIÓN

Hoy nadie duda, en el debate sobre ciudadanía, el sentido rupturista y ecléctico que encierra esta noción, a la luz de las nuevas corrientes ideológicas y de los cambiantes procesos culturales y políticos en el marco de fin de siglo.

Actualmente, hablar de ciudadanía es poner en cuestión todo un conjunto de normas y prácticas inscritas en el ideario de occidente que dieron forma y estatuto a la idea de democracia. Este es el clima en que se confrontan actualmente las diversas expresiones del pensamiento político feminista.

Dentro de la propuesta de Isis Internacional de dar a conocer la reflexión y la producción de conocimiento de pensadoras, escritoras y activistas, es que se inscribe este número de Ediciones de las Mujeres: La Ciudadanía a Debate. Con tal propósito convocó a un grupo de autoras latinoamericanas y de habla inglesa, quienes desde sus especialidades y experiencias dan cuenta de la complejidad de un debate donde se hacen presentes nuevos actores y actoras históricamente excluidos. Para ello contó con la participación del Centro de Estudios de la Mujer a través de Eugenia Hola en el trabajo de selección y edición de los artículos y de Virginia Guzmán, especialista en el tema.

Confiamos que esta nueva entrega de Ediciones de las Mujeres contribuya a ampliar y profundizar el conocimiento de este tema en sus distintas dimensiones y propuestas.

Isis Internacional

Introducción

Eugenia Hola

El trabajo contenido en este número de *Ediciones de las Mujeres* pretende mostrar la forma en que se despliega la revisión conceptual y la reflexión feminista en uno de los temas que hoy tiene centralidad en cualquier análisis socio-político-cultural: la ciudadanía.

Las autoras se han venido planteando la necesidad de construir un conocimiento que vaya a la transformación de la condición social de la mujer, esto es, construir nuevas nociones que sean capaces de dar cuenta de la mujer en su especificidad y heterogeneidad. De esta manera se observa el desarrollo de una práctica teórica y también política que impulsa una renovación del saber tal cual estaba establecido y una resignificación de la mujer en cuanto actor social, articulando la crítica a su propia condición con la crítica a todas las formas de opresión, subordinación o exclusión.

En el análisis de género de la ciudadanía, establecen vínculos analíticos con teorías más generales dando cuenta de los aportes y dilemas del pensamiento y de los desafíos que enfrenta la reflexión crítica. A su vez destacan los aportes que desde una mirada de género contribuyen a replantear la temática a nivel macrosocial. Está presente un constante diálogo entre perspectivas feministas y con otras corrientes del pensamiento, referentes o interlocutores ocultos o explícitos, en torno a los cuales van completando un visión de ciudadanía ampliada para la democracia.

El pensamiento de las autoras tiene en común el afán de vincular la reflexión al ideal emancipatorio del feminismo. Una reflexión capaz de trascender hacia el espacio público; una reflexión que muestre compromiso con la necesidad de transformar las estructuras de dominio imperantes; una reflexión que junto con negar el orden vigente, descubra y afirme las posibilidades que la sociedad contiene. El posicionamiento teórico intenta precisar la concepción de ciudadanía en la cual se inscribe el

pensamiento de cada autora y que, en general, se refiere a la tríada conformada por las instituciones democráticas, los derechos ciudadanos y su sentido y la calidad de los ciudadanos (acción ciudadana). Sin embargo, como precisan algunos estudios, la existencia de sociedades pluriétnicas y multiculturales está generando un proceso de revaloración de los derechos humanos y de ampliación a un cuarto nivel referido a ciertos *derechos a la diferencia*. Es aquí donde se inscriben las reflexiones de género.

El actual debate sobre ciudadanía y género muestra la tensión entre la racionalidad técnica, financiera, militar y de mercado y la voluntad de sujetos colectivos de plantear su autonomía frente a la lógica sistémica, entre la racionalidad instrumental que mantiene un orden represivo y excluyente y la racionalidad orientada a desenmascarar los procesos que la perpetúan. Tenemos, así, aproximaciones y propuestas que –valorizando la democracia como un orden necesario que articula Estado y sociedad, Estado y mercado– ponen énfasis en la exigencia de repensar los procesos de participación social y de creación de cultura ciudadana. Concomitantemente se trata un problema mayor: cómo evitar un discurso ecléctico o superfluo que no deje lugar al cambio.

Esta perspectiva contiene una revaloración de los movimientos sociales y, por lo tanto, de la diversidad frente a la acción homogeneizadora del Estado. Esta revaloración conlleva la idea de que es posible implementar nuevas formas de hacer política, en otras palabras, generar bases para el ejercicio de una ciudadanía con menos mediaciones de los actores sociales y políticos colectivos, léase partidos, sindicatos, etc. Se privilegia una dinámica social más autónoma y formas menos instrumentales de la acción política.

Subyace a estas elaboraciones la necesidad de construir una cultura democrática, lo cual se plasma en la preocupación por abordar el tema de las relaciones en los ámbitos público y privado que requieren ser democratizadas: desde las familiares a las políticas, desde las personales a las institucionales, desde las culturales a las económicas y tecnológicas, desde la reproducción y la sexualidad a las laborales, etc.

La conclusión inmediata es que la reflexión de género no encaja en la concepción neoliberal y postmodernista en tanto, entre otras dimensiones significantes, rechaza el relativismo valórico-ético y cultural, conjuga diversidad y necesidad de integración, da cuenta del juego de relaciones entre Estado, sociedad y mercado, recupera el sujeto como sujeto colectivo con fuerza transformadora y, no menos relevante, trasciende el enfoque del ciudadano como simple votante.

La fragmentación de saberes y el efecto atomizante sobre cualquier proyecto que nos trae la postmodernidad, requiere de un esfuerzo de integración del discurso en un todo consistente. El esfuerzo realizado en torno a una revisión conceptual, en la materia específica de estas *Ediciones de las Mujeres*, más bien constata la existencia de un proceso en torno a ir completando un marco interpretativo que permita historizar los fenómenos, que arroje nuevas luces sobre la contingencia, que permita expandir la perspectiva de análisis de algunos procesos sociales en América latina.

Sin embargo, no es posible dejar de preguntarse, como lo hacen nuestras autoras, por el lugar que ocupa su propia producción de conocimiento y las implicancias de éstos en futuros cambios sociales y políticos.

Bien sabemos que el discurso es un campo de luchas, aunque no todas las áreas son igualmente significantes en la jerarquía del poder y de las relaciones de conocimiento. El tema *ciudadanía* ha pasado a ser un tema polémico asumido tanto por las izquierdas como por las derechas y los grupos emergentes a nivel nacional y en América Latina como continente.

Expresión de esta controversia en el ámbito feminista lo constituyen los artículos que conforman este número de las *Ediciones de las Mujeres* y las tensiones conceptuales que el discurso plantea como sustantivas, entre otras: la necesidad de contar con marcos conceptuales de modo que sea posible comprender la complejidad de la realidad en estudio, a la vez que conservar la rigurosidad en los procedimientos y la consistencia interpretativa; la diversidad de corrientes y énfasis teóricos presentes en la reflexión y el intento de avanzar hacia una síntesis integradora y articulada. En otras palabras, la tensión entre necesidad de síntesis y ruptura epistemológica, entre revisión del conocimiento existente y producción de formas nuevas de acercarse a los fenómenos sociales; la tensión entre formulación de proposiciones utópicas de difícil o imposible constitución y pragmatismo o inmediatismo en la acción. Y, como consecuencia lógica, la necesidad de someter a las ciencias sociales en general y al feminismo en particular a una re-visión, para encontrar en la reciprocidad de perspectivas, en la implicación dialéctica mutua y no en una polarización, las bases para la producción de nuevos conocimientos y otras formas de acercarse a la realidad.

En el trabajo de Maxine Molyneux se observa, como preocupación central, la necesidad de confrontar en una forma diferente las posibilidades y limitaciones de la democracia capitalista de modo de contribuir a la elaboración de una fórmula efectiva para la difusión de la justicia social. Considera que esta agenda es especialmente urgente en el contexto latinoamericano dado el proceso de redemocratización política y de desigualdad social que le acompaña. Su análisis se desarrolla en torno al proceso de elaboración, discusión y crítica del feminismo a la concepción liberal de ciudadanía y su contribución en lo referente a elaborar la ciudadanía con perspectiva de género. A continuación discute cuatro tópicos relevantes para una política feminista en referencia permanente a concepciones tales como el liberalismo y el comunitarismo: el concepto de ciudadanía activa y su significado; los usos de argumentos acerca de la moralidad; las políticas de identidad y el Estado. Deja planteado el desafío de cómo pensar y desarrollar una política que promueva un proyecto general de justicia social sin que ello presuponga un público indiferenciado.

Para Nira Yuval-Davis la ciudadanía es una construcción multidimensional que requiere ser teorizada de modo tal que permita construir un marco comparativo de análisis de ciudadanía de género sin sesgos culturales. En tanto tal, explora en

primer lugar la relación entre ciudadanía como un fenómeno individual y colectivo y cómo éstos se relacionan con nociones de nacionalismo y comunidad. Luego trata los derechos y las diferencias sociales aproximándose críticamente a la definición liberal que presenta a todos los ciudadanos como iguales y que, por tanto, considera irrelevantes las diferencias. Ello a la luz de los debates sobre multiculturalismo y relaciones de género. En tercer lugar se acerca a la discusión sobre la dicotomía privado/público y, por último, aborda la noción de ciudadanía activa, las maneras en que ésta ha sido construida por las fuerzas políticas de derecha y de izquierda y sus relaciones con los derechos y deberes ciudadanos. Su propósito es señalar el camino hacia la formulación de políticas transversales de mujeres y ciudadanía.

El abordaje de Virginia Vargas sobre ciudadanía se centra en algunas de las tensiones más relevantes para el feminismo que se dan en este campo: tensión entre los derechos formales y los derechos sustantivos; entre el principio de igualdad y el derecho a la diferencia. A partir de allí desarrolla las diferentes perspectivas y dimensiones o ejes de la ciudadanía en orden a evidenciar las dinámicas de exclusión e inclusión relacionadas a la construcción de las ciudadanías femeninas. Como nos dice, perspectivas y dimensiones constituyen categorías sustantivas como forma de aproximarse a las ciudadanías realmente existentes. En cuanto a las perspectivas, toma básicamente la histórica y la estructural y en las dimensiones de análisis de ciudadanía se refiere a las dinámicas subjetivo-objetivo, activo-pasivo y exclusión-inclusión, no como polaridades sino como procesos con un cierto nivel de continuidad. En lo que sigue, avanza algunos de los argumentos más significativos sobre construcción y concepción ciudadanas que tratan de responder a esas tensiones. Finalmente desarrolla dos aproximaciones problemáticas –la liberal y la comunitaria– teniendo como referente conceptual dos paradigmas –el de la igualdad y el de la diferencia–, en tanto estas aproximaciones están presentes en los abordajes sobre ciudadanía y diversidad. La preocupación que subyace en el análisis dice relación con la meta de ciudadanía que nos proponemos y si ésta se enmarca o no en el modelo masculino de ciudadanía.

La propuesta conceptual de Elizabeth Jelin precisa la relación entre derechos humanos básicos y derechos civiles y políticos, los cuales se han venido situando tradicionalmente en la vida pública ignorando el mundo de lo privado. Y esto, nos dice, tiene especial importancia para la ciudadanía de las mujeres. Su ámbito de reflexión son los derechos reproductivos como espacio de lucha por la igualdad, por la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. El discurso se articula en torno a reconocer como permanente e inevitable la tensión entre los derechos individuales y los derechos colectivos; entre el principio de igualdad y el derecho a la diferencia; entre *la mujer* como categoría y las mujeres como heterogeneidad. A partir de estas dimensiones problematiza dos áreas de los derechos en la esfera privada de las relaciones familiares: la violencia doméstica y la sexualidad. ¿Conclu-

sión? Por el contrario. Es en este punto que la reflexión se abre a nuevas preguntas en términos de la naturaleza de estos derechos, el papel del Estado y del ciudadano en estas materias, el ejercicio de las responsabilidades, quiénes y qué demandan, interrogantes que ponen de manifiesto la complejidad del tema.

Rosario Aguirre ubica su reflexión en el marco de los debates que tienen como eje la redefinición de las relaciones entre Estado y mercado. Presenta el análisis de lo que ha sido históricamente la construcción social de la maternidad, aspecto clave para la comprensión de la construcción social y cultural de las diferencias de género. Su objetivo último es avanzar en la determinación de las implicancias que ello tiene en el reconocimiento y ejercicio de los derechos sociales de las mujeres. En primer lugar, da cuenta de la literatura feminista que cuestiona las teorías sobre la ciudadanía y los supuestos de género implícitos en las políticas sociales. En el segundo punto se analizan las alternativas planteadas a la concepción liberal del ciudadano. En particular los fundamentos maternalistas de la ciudadanía de las mujeres y la propuesta de conceptualizar la ciudadanía social como servicio. En tercer lugar, se presentan –a través de la propuesta de Fraser– algunos elementos para pensar la cuestión de la interpretación de las necesidades de las mujeres, en tanto base para la definición y el ejercicio de los derechos sociales. Por último, trata la necesidad de analizar la experiencia latinoamericana reciente en relación a los fundamentos maternalistas de las nuevas políticas sociales, en el marco de los procesos de ajuste estructural y reforma del Estado en diferentes escenarios de integración regional. Se destaca, al mismo tiempo, la emergencia de acciones de movilización, presión política y recursos discursivos que tienden en la región a vincular la ciudadanía participativa con la ciudadanía política de las mujeres.

El trabajo de Jeanine Anderson plantea un cuestionamiento a las formas de interpretar las relaciones entre lo público y lo privado. Para la autora, los temas de democracia y ciudadanía deberían discutirse en íntima vinculación con el tema familia. Pone en duda el postulado acerca de que las relaciones establecidas en la familia sean cualitativamente diferentes de otros tipos de relaciones entre actores y asociaciones sociales en el espacio público. Se detiene en el señalamiento de aquellos argumentos que, en la tradición occidental, han venido descalificando a las mujeres como ciudadanas: dependencia versus independencia, contratos explícitos versus contratos implícitos, condicionamientos emocionales, sometimiento forzoso a otro. A partir de allí, explora las asociaciones familiares y no familiares en orden a reevaluar la relación y semejanza de la participación de la mujer en ambos ámbitos. Sostiene la existencia de un continuo, lo cual implicaría que el comportamiento de los y las líderes de las organizaciones no serían cualitativamente diferentes de sus comportamientos en el ámbito del parentesco. La tarea está en estudiar los elementos asociados a los lazos familiares y cómo éstos reaparecen en asociaciones cívicas, económicas y políticas. Al mismo tiempo, ubicar los elementos de racionalidad y elección que se identifican

como exclusivos del mundo público. Somete a prueba estas premisas a partir de los estudios que ha realizado en dos barrios peruanos. La meta, concluye, es llegar a analizar las asociaciones humanas con exactitud recuperando la complejidad que supone el ejercicio de la ciudadanía en el mundo público y privado.

Bérengère Marques-Pereira nos propone, en primer lugar, un cuadro de contexto y un cuadro teórico donde, a partir de Marshall, recupera el concepto de ciudadanía como un proceso de construcción social. Antes de desarrollar una tesis acerca de los derechos reproductivos subraya los elementos que le parecen constitutivos de las relaciones de género y la identidad de género, plantea un marco cognoscitivo para un abordaje metodológico de los derechos reproductivos y analiza la interrelación entre los distintos niveles de ciudadanía trascendiendo el ámbito de lo político, social y civil al incorporar una cuarta dimensión: la libertad reproductiva. Afirma que los derechos reproductivos manifiestan la emergencia de una nueva generación de derechos cuya naturaleza es diferente de la de otros derechos. Esa ampliación de la ciudadanía comporta la construcción de un sujeto político que lucha por conseguir su definición de ciudadanía desde una práctica consensuada o conflictual. En este punto, se hace referencia al interés general como uno de los medios para legitimar las posiciones y proposiciones de los actores acerca de la representación de sus intereses e identidades colectivas. En seguida trata dos posiciones antagónicas del interés general: las del Vaticano y las feministas para concluir con las conquistas en Beijing en materia de aborto, maternidad y sexualidad.

Por su parte, Paola Cappellin nos propone revisar la historia de los movimientos de trabajadoras en Brasil desde 1980, sus reivindicaciones y como ello va generando modificaciones en el modelo de ciudadanía. La experiencia de los movimientos de mujeres trabajadoras urbanas y rurales le permite ilustrar el ejercicio de una ciudadanía activa que contiene como particularidad la articulación de las demandas sobre la vida doméstica con las demandas de los movimientos populares. Para comprender la lucha de las trabajadoras por modificar las relaciones entre familia y trabajo se detiene en la imagen social de lo femenino en el mundo sindical, el itinerario que recorren en su camino a ser dirigentes y las propuestas que plantean en orden a corregir las desigualdades. En la parte final propone algunos elementos de interpretación con el propósito de completar las reflexiones sobre los transcursos de las movilizaciones, los contenidos de las reivindicaciones en el mundo del trabajo y los medios para que éstas lleguen a ser consideradas como demandas de ciudadanía.

El conjunto de artículos constituye una contribución extraordinariamente relevante en tanto organiza argumentos y propone nuevas vetas para avanzar en la configuración de un marco de análisis comprensivo de la complejidad de la temática puesta a debate: democracia y ciudadanía con perspectiva de género.



DEBATES SOBRE COMUNITARISMO, MORALIDAD Y POLÍTICAS DE IDENTIDAD*

MAXINE MOLYNEUX

La revisión de la literatura sobre ciudadanía desde la década de los ochenta revela una extensiva producción y un considerable alcance geográfico. La ciudadanía ha llegado a ser la divisa de numerosos análisis políticos e históricos, con trabajos dentro de esta perspectiva que aparecen virtualmente en todas las regiones del mundo.

La preocupación referente a la ciudadanía y a la democracia ha recibido una contribución importante de parte del feminismo. El trabajo de Elshtain, Pateman y otros motivó un renovado interés y compromiso con la teoría política mediante el cuestionamiento de las premisas del liberalismo y de la democracia, revelando los funcionamientos de exclusión y desigualdad dentro del corazón mismo de los principios universales de igualdad, universalismo e imparcialidad.

Sin embargo, la ciudadanía es un concepto en discusión y en evolución constante. La discrepancia de las nociones sobre lo que está implícito, debido a las contiendas en torno a los asuntos que involucra, a menudo prescribe prioridades y estrategias políticas bastante diferentes, las cuales varían con el tiempo. El ideal clásico contuvo tres elementos centrales: igualdad, dominio de la ley, y participación en la vida política. Con el nacimiento del liberalismo político se desarrollaron nuevos argumentos sobre el propio equilibrio entre responsabilidades cívicas y libertades individuales, mientras en el siglo XX la idea clásica ha sufrido ataques desde la izquierda, por el marxismo y otras teorías de identidad colectiva, y desde la derecha,

---

* Versión resumida de *Gender, Citizenhip and Democracy: Reflections on Contemporary Debates*, ponencia presentada en julio de 1996 en la conferencia sobre Mujeres, cultura cívica y democracia, organizada por PUEG, UNAM, con el apoyo de UNESCO. (Traducción de Oriana Jiménez)

por el nacionalismo. La fundación del Estado benefactor también señaló una concepción nueva de los derechos de ciudadanía, los cuales enfatizaron la pertenencia social y los derechos sociales como un complemento necesario de los derechos políticos.

En décadas más recientes, los debates sobre la ciudadanía han sido nuevamente encendidos y difundidos en forma más extensa por el liberalismo radical y por el compromiso de una izquierda post-marxista con la teoría democrática. Las concepciones individualistas liberales de la ciudadanía han sido cuestionadas por las concepciones republicanas de ciudadanía activa y por el comunitarismo, mientras que los conceptos marshallianos de los derechos sociales han sido defendidos contra las críticas libertarias del bienestar dentro de la arena de la política. Así, en la ausencia de una alternativa socialista al capitalismo, el campo de compromiso indicó que la *ciudadanía* no es más el terreno exclusivo del liberalismo; la izquierda y la derecha en forma similar acomodan su lenguaje para discutir una gama de preocupaciones aparentemente similares.

Si las políticas de ciudadanía son una cuestión de disputa así también ocurre con sus supuestos básicos. Críticos post-modernos han atacado su racionalismo mientras que niegan la validez y utilidad del propio concepto en un mundo caracterizado por la fragmentación y la globalización, y donde se critica que el ciudadano haya sido reemplazado por el consumidor.

Una de las preguntas que la ciudadanía propone más agudamente se relaciona con los valores esenciales a los que ella se asocia. El concepto de ciudadanía con el cual el feminismo se asoció inicialmente se originaba en el discurso de la Ilustración. Representaba un compromiso con el pensamiento racional y con principios universales tales como igualdad, fraternidad y libertad. Estos principios llegaron a ser la inspiración para una variedad de movimientos emancipatorios y de demandas por el cambio social.

En el marco de los estudios contemporáneos sobre la ciudadanía, el derrumbamiento de visiones sociales alternativas ha estado acompañado por una hostilidad creciente a cualquiera visión transcendental y por una negativa escéptica de los argumentos de principios del legado de la Ilustración, en forma más general. Las primeras concepciones de la ciudadanía han sido probadas para operar con un lenguaje implícito de privilegio en relación a la *clase, raza y género*. Para algunos, esto requiere despojarse de sus pretensiones universalistas y promover principios, entre los cuales están los de localismo, pluralismo y diferencia. Para otros, sin embargo, este universalismo es visto como una defensa esencial contra la amenaza creciente a los derechos de las mujeres propuestos por los nacionalismos derechistas y por el despotismo teocrático. En este sentido, especificidades regionales y culturales necesariamente proponen interrogantes distintas y obtienen diferentes respuestas políticas. En suma, sería justo decir que el escenario de los compromisos señalados por la *ciudadanía* ha llegado a ser completamente pluralizado y su significado, muy variado.

En este proceso de elaboración, discusión y debate, el feminismo está lejos de haber logrado un *consenso ideal*. Los asuntos en disputa han adquirido una nueva relevancia dentro de las oportunidades más favorables del contexto de los años 90, en los cuales los tópicos de gobierno, democracia y derechos humanos han adquirido una capacidad de apoyo internacional y, en ciertos casos, de apoyo nacional. Esto lo hace ser un asunto muy urgente para aquellos comprometidos con la justicia de género y, en forma más general, con la justicia social.

A continuación se discuten cuatro tópicos debido a sus implicancias en la política feminista: el significado de la ciudadanía activa, los usos de argumentos acerca de la moralidad, las políticas de la identidad y el Estado.

Ciudadanía activa y comunitarismo

Actualmente, existe una amplia literatura que apunta a *incorporar el género* a la ciudadanía y a la democracia. En América Latina, tal como sucede en otras partes, ha significado desde discusiones dentro de la teoría política y social hasta exploraciones de formaciones históricas y sociales particulares.

El compromiso productivo de las teóricas feministas con la teoría política –la cual se inició en los años setenta y culminó con el fecundo trabajo de Pateman (1989)– permitió la deconstrucción de los supuestos subyacentes a la teoría liberal al exponer el sesgo masculinista inherente a las concepciones de política y de ciudadanía. Se mostró que su construcción de individuo postulaba una abstracción de acuerdo a un ideal masculino asociado con la vida pública. Las relaciones entre los sexos y el trabajo dentro de la esfera privada eran naturalizados así como lo era la subordinación de las mujeres dentro del matrimonio.

Algo central en las críticas feministas al liberalismo, desde Wollstonecraft en adelante, es la identificación de un doble estándar con respecto a los valores y reglas de los ámbitos público y privado. Como Sijm lo expresa: "la esfera privada es el mundo del particularismo, sometimiento, desigualdad, emociones naturales, amor y parcialidad mientras que la esfera pública es el mundo del universalismo, independencia, igualdad, razón, racionalidad e imparcialidad" (citado en Jones y Jánasdóttir, 1985). Detrás del mundo público liberal se ubica el mundo no transformado del sometimiento, expresado en el contrato del matrimonio. John Stuart Mill señala: "allá no quedan esclavos legales, excepto el ama de cada casa" (Mill, 1984). Moller Okin (1992) nos muestra cómo el liberalismo clásico consideró a la familia ubicada fuera de la esfera de la justicia, gobernada como si lo fuera por inclinación natural y lazos de afecto.

El feminismo, al exponer el tema del doble estándar estuvo, por mucho tiempo, asociado con la demanda que estipulaba que una plena ciudadanía para las mujeres dependía de la igualdad y justicia *dentro* del hogar así como fuera de él. En los años

setenta e inicios de los ochenta, en el esfuerzo por desarrollar y extender la crítica respecto de la democracia liberal –elaborada entre otras cosas por el enfoque de la disparidad entre las demandas de ciudadanía y la realidad de exclusión de las mujeres del cuerpo político– el trabajo de las teóricas feministas se unió al de personas que trabajaban en modelos de exclusión étnicos y raciales. Estas intervenciones pioneras, en muchas formas, prefiguraron los compromisos más generalizados y los estudios de ciudadanía, compromisos y estudios que se han transformado en elementos centrales del debate contemporáneo político.

Actualmente, las teóricas han empezado a moverse más allá de la crítica para explorar las implicaciones de política de la ciudadanía de género y de la pertenencia social. Los temas como derechos humanos de las mujeres, derechos legales y política social, han llegado a convertirse en el objeto de campañas mientras que interrogantes más amplias acerca de qué prácticas y estrategias políticas están vinculadas al compromiso de extender los derechos de ciudadanía, son los temas del debate actual. El escenario de los compromisos ha sido, por lo tanto, diverso y ha conducido a algunas ganancias importantes respecto de los derechos de las mujeres, derechos sociales y representación política.

Como la ciudadanía es un concepto discutible, su apropiación en el feminismo ha vuelto a abrir algunas de las viejas divisiones y ha creado nuevas, sumándose al tan discutido debate de la igualdad versus la diferencia, las críticas postmodernistas de los principios ilustrados de universalidad e individualismo. Estas críticas han sugerido que si la ciudadanía pudiera ser despojada de su universalismo abstracto y de su *falso igualitarismo* llegaría a ser una herramienta más efectiva para avanzar en la justicia de género. Algunos autores han sostenido que las diferencias de sexo y el cuerpo de la mujer son la base apropiada de un reconocimiento legal y político. Otros han indagado para permitir una reformulación de supuestos ortodoxos que subyacen en la representación política; la idea de que grupos subalternos, tales como las mujeres y minorías étnicas, debieran tener derechos especiales de representación en el parlamento ha sido explícitamente desarrollada por personas tales como Young (1989) en oposición a las nociones de imparcialidad, que en efecto desafían las pretensiones universales de las definiciones de la Ilustración referentes a la ciudadanía, al amenazar su principios de igualdad e individualismo. En forma más general, dentro del ámbito de la práctica política, las corrientes intelectuales y políticas asociadas con aquellas tendencias han favorecido a *descentralizar* el activismo político dentro de la sociedad civil con independencia del Estado, evitando *agendas políticas trascendentes* que favorezcan una noción no especificada de *resistencia*.

Por lo tanto, existen desacuerdos sobre cuatro temas principales: los términos de la pertenencia social, la entrega de derechos por los que luchan, el tipo de presencia política que las mujeres pudieran tener como meta, y las implicancias de género de ciertas definiciones de ciudadanía. Sin embargo, hay un sustancial acuerdo entre

las feministas de diferentes tendencias acerca de la necesidad de reformular el significado dado a la ciudadanía. Argumentan por un concepto de individuo más *encarnado* y *embebido* como ser social y, consecuentemente, provisto de género. Si los ciudadanos están dotados con derechos y responsabilidades, entonces éstos deben ser considerados como provistos de género, y si la ciudadanía significa algo más que la igualdad formal, debe ser asociada con medidas para alcanzar la igualdad substantiva.

Las críticas feministas se apoyan en quienes cuestionan la concepción de ciudadanía liberal utilitaria, de individualismo excesivo y estrecha moralidad, en tanto defiende el principio de los derechos individuales y su precedencia respecto de asuntos de responsabilidad social. La ciudadanía concebida sólo como derechos, y en términos políticos reducida a la práctica limitada de la votación, refleja una visión empobrecida de la pertenencia social. En cambio, se argumenta, es necesaria una concepción más substantiva y fuerte de ciudadanía, una ciudadanía más participativa y más responsable socialmente. Los argumentos han sido elaborados por autores tales como Putnam quien señala que una vida asociativa rica tiene una positiva influencia en la democracia. Otros tipos de demandas han sido elaboradas en términos de la necesidad de concepciones de ciudadanía activa o social que ayuden a oponerse a las depredaciones de las crecientes desigualdades sociales y violencia civil que existen como síntomas de la *modernidad.*

En el contexto presente se observa, a través del espectro político, apoyo a una sociedad civil más fuerte y a una ciudadanía social y *activa.* La izquierda lo ha considerado, en forma amplia, en términos de conducir una mayor participación pública y capacidad para avanzar en un proyecto de reforma social y política. Las feministas lo han visto como una manera de hacer posible *las políticas de las mujeres* y el empoderamiento, al permitir el trabajo en asociaciones vecinales que entregan un apropiado reconocimiento y apoyo. También es un instrumento de política social –para las ONG, los gobiernos y el Banco Mundial– visto como una manera de enfrentar los problemas sociales y políticos estableciendo un sentido de responsabilidad social y una base de legitimidad política para la reestructuración.

Pero la ciudadanía social, entendida como activismo comunal, participación o regeneración moral, no está siempre o indudablemente ligada a proyectos de reforma democrática o de mayor cohesión social. En algunos países es manipulada por *fundamentalistas* que buscan crear una comunidad política en defensa de objetivos que conducirían a Estados autoritarios, teocráticos y altamente generizados. En algunas partes del mundo post-comunista se ha asociado con extrema intolerancia, odios intercomunales, populismo autoritario y racismo. Otras formas de ciudadanía activa han estado asociadas con los radicalismos conservadores como en las campañas contra el aborto en los Estados Unidos o en Polonia.

En América Latina, las ideas de ciudadanía activa tienen su antecedente en la cultura de las comunidades cristianas de base y en las prácticas de las agencias de

desarrollo relacionadas con la participación comunitaria, las cuales se remontan a los años sesenta. Muchos movimientos de mujeres y ONG han jugado un rol particularmente activo en la búsqueda por desarrollar una mayor participación política, al apoyar actividades de base y comunitarias como una plataforma para la acción. Tal activismo ha sido un rasgo importante de las transiciones latinoamericanas y, a veces, una fuente invaluable de revitalización política (Jelin, 1996; Jaquette, 1995; Waylen, 1996). Si en los años recientes ello ha declinado, no deja de ser un testimonio que la ciudadanía social de este tipo es un desarrollo político altamente contingente que depende de la oportunidad del contexto y de los resultados reales.

Si la ciudadanía activa es un elemento crucial de las políticas democráticas radicales, entonces es necesario formular algunas fuertes interrogantes sobre su significado en contextos sociales y políticos determinados. Algunas veces es difícil identificar los objetivos de aquellos que promueven la ciudadanía activa. Esto es especialmente verdadero si la *sola* actividad es vista como un bien en sí mismo, como ocurre en el caso de algunos teóricos de los movimientos sociales quienes están menos preocupados por los resultados de tal activismo y, por otro lado, omiten la consideración de los movimientos que se oponen totalmente a las prácticas democráticas.

Esos problemas están tal vez mejor ilustrados por el entusiasmo actual referente al comunitarismo, corriente de pensamiento político muy publicitada y que ha sido abrazada por políticos y teóricos de la derecha y de la izquierda en el mundo anglosajón, siendo el Partido Laborista Británico uno de sus más recientes adeptos. Existen paralelos entre algunas versiones latinoamericanas de la ciudadanía activa y algunos elementos del *nuevo comunitarismo*, debido a que se basan en concepciones orgánicas del orden social, cuyos significados indudablemente se asemejan a aquellos del positivismo francés y con las ideas corporativas católicas. Por lo tanto, no es sorprendente encontrar elementos comunitarios en las concepciones latinoamericanas de ciudadanía, dadas por la evolución histórica de la región y por la fortaleza de variantes del catolicismo social asociados con los partidos demócrata cristianos.

En América Latina, el comunitarismo en su forma social católica ha involucrado a sectores de la izquierda debido a que parece ofrecer un compromiso entre el individualismo liberal y el socialismo de Estado. Ciertamente son pocos los que rechazarían las críticas comunitarias a la destrucción de mercados no controlados, o con el llamado a los valores cívicos y a la acción comunitaria como formas de enfrentar el crimen y la descomposición social. La reciente experiencia de la región es que las versiones comunitarias de ciudadanía, cuando se aplican a la práctica política, pueden resultar en beneficios tangibles para aquellos involucrados, como se evidencia en los éxitos que aparentemente han disfrutado algunos movimientos para la paz social y la renovación cívica. La alianza multiclase que apoyó al movimiento Viva Río en Brasil en los años noventa, llevó a decenas de miles de personas a las calles demandando políticas comunitarias y reformas políticas, seguridad pública y mejoramiento

habitacional para los pobres (Gaspar Pereira, 1996). La mayoría de las personas tiene interés en tales mejoras, especialmente aquellas que se sienten vulnerables al deterioro de la civilidad y difusión del crimen, incluyendo una sustancial proporción de mujeres, las cuales, típicamente, apoyan tales campañas y toman un rol de liderazgo en nombre de sus hijos así como de ellas mismas.

Pero hasta ahora, los teóricos comunitarios han ofrecido pocas soluciones concretas a esos problemas, más allá de las improvisaciones y de las llamadas superficiales a las ideas de una comunidad holística. No solamente esas visiones son irrealistas, sino que subestiman seriamente la profundidad de los problemas sociales enfrentados por las sociedades capitalistas contemporáneas. Es dudoso que las sociedades modernas, con sus profundas desigualdades estructuradas, puedan llegar a ser la comunidad moral imaginada por los comunitarios. Gellner (1984), entre otros, considera como esfuerzos inútiles *moralizar* una sociedad de masas que por su propia naturaleza no puede servir a los fines morales colectivos.

Más aún, el antiestatismo del comunitarismo latente (y algunas veces abierto) se revela en una forma de visión utópica de las virtudes de la *autoayuda* la cual, aunque necesaria y admirable como complemento a otras formas de apoyo, difícilmente es una solución en sí misma. Esto se relaciona al notable fracaso de los comunitarios de trabajar el problema del poder tanto dentro de las propias comunidades como fuera de ellas, en el marco de la sociedad más amplia.

El comunitarismo está en gran parte asociado con una moralidad conservadora de tipo tradicional. McIntyre por supuesto insiste que la *tradición* es una parte necesaria de una buena sociedad (1981, 1988). Pero como Moller Okin pregunta, ¿las tradiciones de quién y qué valores están invocados? Las subordinaciones de las mujeres son, muy a menudo, legitimadas por llamados a la tradición, *la forma en que eran las cosas* en algún pasado idealizado. Ello establece el tema de que la moralidad debe ser tomada seriamente, que debe estar fundada en principios de justicia e igualdad dentro de la propia familia. Por otro lado, en las visiones comunitarias el individuo es el depositario de la moralidad y los *valores familiares* son defendidos en una forma que prescribe roles convencionales entre los sexos intentando restaurar las estructuras de autoridad que han sido desafiadas por las feministas y también por tendencias sociales cuyas causas estructurales son improbablemente compensadas por los esfuerzos de moralizar la sociedad.

Al enfatizar el principio de la comunidad y no el del individuo, los comunitarios cambian el argumento en la dirección de la responsabilidad y se alejan de la de los derechos, en un discurso con implicaciones evidentes para los debates de política social y, dentro de ellos, de los derechos de las mujeres. Aquí, el caso paradigmático es el debate sobre las madres solteras, en el cual el tema de su supuesta elección para permanecer solteras es vista por los comunitarios como una forma de descuido egoísta de las necesidades de los niños y una carga sobre la comunidad más amplia para

ver, de esta forma, cómo la discusión de los problemas generales de la maternidad sola son sepultados en un pánico moral sobre su negligencia en sus responsabilidades sociales. El trabajo de Chant (1992) en América Latina y Campbell (1995) en viviendas estatales británicas, ha sugerido que más que las madres solteras sean la causa de decadencia moral y desorden social, ellas pueden ser los últimos vestigios existentes de lazos de solidaridad entre los pobres que viven en la ciudad.

En efecto, las mujeres son diabolizadas o santificadas en los discursos comunitarios; pero la visión de la buena sociedad que surge muestra una dependencia considerable en el trabajo no remunerado de la mujer en la familia, en los proyectos de autoayuda y en el trabajo voluntario. Más allá de considerar inherente los atributos del sexo, se da por descontado su responsabilidad social de una manera que fija los sexos en una eterna binaria inmodificable que recuerda la teoría de Parsons sobre los roles. La carencia de una teoría del poder se hace nuevamente evidente, en este caso referente a las relaciones entre los sexos, pero también opera con una imagen de comunidad (o sociedad civil) como un espacio sin concentración de poder estructurado y modelos de conflictos. Las mujeres harían mejor en desafiar algunas de estas estructuras de poder que trabajar *en forma altruista* dentro de las comunidades, si ello implica una aceptación no crítica de las jerarquías sociales y dependencia en su trabajo no remunerado.

América Latina, en contraste a la Europa del Este, tiene una tradición relativamente fuerte de movilización comunal y, como ha sido mostrado muchas veces, gran parte de esta movilización ha involucrado una proporción sustancial, cuando no una mayoría de mujeres. Es sorprendente ver que a menudo se invoca a América Latina como el modelo para esquemas de bienestar de autoayuda o como una inspiración en las discusiones de nuevas formas de *democracia asociacional*. El valor práctico de tales actividades en el trabajo de alivio de la pobreza no tiene dudas, pero lo que es interesante es ver cómo ellas se perciben en el contexto de los debates sobre democracia y justicia social. Ciertamente, el supuesto es que en general las movilizaciones de este tipo contribuyen a la democracia.

Pero ¿es posible decir en qué sentido precisamente se ha contribuido a la democracia? Aquí los analistas se dividen entre optimistas y pesimistas. Para los primeros hay dos efectos positivos: en primer lugar tales esquemas sirven como aprendizaje para las mujeres cuyas experiencias de solidaridad y liderazgo les entrega empoderamiento en una forma que las capacita para tomar un rol en el escenario político formal. En segundo lugar, conduce a la creación de nuevos espacios democráticos en la esfera pública, los que pueden ser ocupados por mujeres y, al mismo tiempo, desafiar su subordinación en el hogar. Los analistas más pesimistas han observado, sin embargo, que raramente esas actividades han conducido a cambios más amplios en el escenario político institucional y, a pesar del activismo, la solidaridad femenina y la cooperación que ha resultado no conduce a un fin tangible o a un

impacto duradero en la vida de las mujeres, incluyendo la división del trabajo en el hogar. Hay evidencias para probar ambas proposiciones como verdaderas, revelando así tanto los límites como la potencialidad de la ciudadanía activa, recordándonos una vez más que el significado y resultado de la participación y activismo son procesos contingentes, los cuales pueden o no ser pertinentes a los procesos de creación de un Estado y de una sociedad más democráticos. Lo que hace la diferencia crucial es el grado en que se liga el activismo a un tipo de visión más amplia y sus relaciones con las políticas democráticas y las organizaciones.

Esto plantea un tema que ha sido ampliamente debatido por las feministas latinoamericanas, el del significado con perspectiva de género de algunas concepciones de la ciudadanía activa. Para algunas feministas culturales, este tipo de movilización femenina es visto como surgiendo desde el origen de valores morales específicamente femeninos, alguno de los cuales derivan de la experiencia primordial maternal (Elshtain, 1981). La situación de las mujeres y/o los atributos naturales produce una política más democrática, más altruista y menos jerárquicamente predispuesta a las formas organizacionales con las cuales se relaciona. Estos valores femeninos son a la vez vistos como la base para un nuevo modelo de política y ciudadanía que, sin duda, representa los valores de la "sociedad óptima". Esta versión feminizada de la ciudadanía se compromete con la concepción de una diferente conciencia política femenina, o *voz*, que se basa en las virtudes de la esfera privada las cuales no son reconocidas en las comprensiones normativas de la *política* (Gilligan, 1985). Las virtudes femeninas, entonces, necesitan ser trasladadas a la esfera pública donde ellas remoralizarán y transformarán la vida política.

Los términos de estas discusiones encuentran un eco en los primeros debates latinoamericanos sobre los temas de la ciudadanía femenina, en la cual tanto los oponentes como los defensores de la presencia de las mujeres en la política invocan repetidamente esas supuestas virtudes femeninas (Lavrin, 1996). Algunas teóricas, entre ellas Ruddick (1980), al defender las virtudes femeninas como la base de la moralidad pública, contraponen una ética (femenina) de cuidado a la ética masculina dominante de justicia o derechos. Algunas teóricas de la diferencia consideran estos valores femeninos como perteneciente a las mujeres e inherentes a la propia femineidad. Las dificultades y peligros de esencializar las supuestas virtudes de la femineidad no necesita elaboración; más interesantes son los supuestos que subyacen al modelo de sociedad óptima y a las políticas femeninas que están disponibles. Estas se basan en dos suposiciones que a menudo han funcionado para mantener alejadas a las mujeres de las instituciones políticas. La primera es que ya que las virtudes de las mujeres son diferentes a las de los hombres, el trabajo de las mujeres en la política es también diferente y, la segunda, es que el lugar de la mujer en la política está dentro de un *espacio de mujeres*, esto es, dentro de una comunidad femenina o a lo menos de una comunidad no sujeta a formas *masculinas* de autoridad o separada de escenarios

institucionales formales. Tal visión, basada en una división del trabajo político, establece una estéril oposición entre comunidad y Estado. La política efectiva depende de la actividad en ambas esferas y, crucialmente, de la interacción entre ambas.

Una creciente producción literaria en la que el pensamiento feminista ha tenido considerable influencia, ha procurado trasladar el debate sobre la moralidad desde la esfera privada a la pública, de modo que se pudiera convertir en un arma de lucha contra la corrupción y los propios intereses políticos y burocráticos enmascarados como *intereses comunes*. Como Levi (1996) lo ha señalado en oposición a Putnam, los gobiernos también pueden ser una fuente de capital social y de confianza. Aunque existen bulladas razones para oponerse a la moralización de la política pública, la incorporación de la ética en el Estado podría también significar la reordenación de sus prioridades en una forma más humana y democrática. Sin embargo, una política feminista requiere la teorización de la relación entre género, política y moralidad, sin asumir que sean dados ontológicamente, o que la política de las mujeres sean *políticas maternales*. Más bien que referirse a la *moralidad de las mujeres* podríamos considerar un conjunto más universal de sentimientos morales que crucen la división de género.

Por su parte, la contribución de Tronto (1993) se relaciona con la entrega de un enfoque más evidente y no reductivo a esta temática, al preguntar lo que significaría tomar seriamente como parte de nuestra definición de una "sociedad óptima" no los *valores de las mujeres* sino los valores del cuidado. Al hacer visible el cuidado, y en forma más general el trabajo reproductivo, al incorporarlo a los debates sobre ciudadanía, Tronto sugiere que transformemos radicalmente la naturaleza y los límites de la moralidad, permitiendo repensar las estructuras de poder y privilegio. En forma crucial insiste que se requiere un análisis con perspectiva de género de los términos o condiciones bajo las cuales nos comprometemos en relaciones de cuidado. Escribe: "una ética del cuidado involucra el reconocimiento del cuidado como una actividad relacional más que un simple trabajo, así como un balance de las necesidades del cuidador y del receptor de cuidado, a menudo en situaciones de dependencia y desigualdades de poder y recursos". Tal enfoque es necesario si nuestra comprensión de ciudadanía es enriquecida por una ética del cuidado por una parte, y si la práctica del cuidado está subyacente a los derechos sociales asociados con la ciudadanía (Lister, 1995). Dicho de otro modo, lo que se ofrece es una visión estratégica para una "sociedad óptima" que incorpore la sensibilidad feminista y lleve el debate sobre *la moralidad de las mujeres* sin caer en el esencialismo que ha caracterizado este enfoque. Al pensar sobre el cuidado como una preocupación de política social podemos comenzar a trasladar los debates sobre moralidad al contexto político y a combinar los temas del cuidado con los temas de los derechos, siendo ambos necesarios a cualquier proyecto de justicia social.

Políticas de identidad

Si la versión comunitaria de ciudadanía es tan estrecha, en tanto su énfasis está en la ética en lugar de los derechos, su antagonista más radical es el individualismo basado en los derechos. Esto encuentra una expresión en el tipo de políticas de identidad que hacen de la búsqueda de intereses particulares su fin primario. Sin embargo, tal como el comunitarismo, las políticas de identidad han sido vistas como sintomáticas de la búsqueda por seres auténticos, en medio de lo transitorio y de la fragmentación.

A diferencia de las demandas del comunitarismo, las cuales subordinan el interés de un grupo particular a la colectividad social más amplia, las políticas de identidad rechazan típicamente tal subordinación teniendo como función principal dar voz a la comunidad oposicional. Phillips (1993) destaca la diferencia entre el *nuevo pluralismo* de las políticas de identidad y el *antiguo pluralismo* de los grupos de interés. Mientras los últimos se aliaron más libremente en torno a los intereses comunes y buscaron influenciar en la política, los primeros dedican más tiempo a la subjetividad en el sentido de estar en oposición, aunque la política sea necesariamente definida fuera de los espacios de las políticas institucionales. Y agrega que la intensidad de las políticas de identidad es "menos dócil a una política de acomodación o compromiso y más proclive a animar la fragmentación o la hostilidad mutua".

La socavación de las pretensiones universalistas de la ciudadanía ha permitido a la ciudadanía de la identidad reposicionarse como un medio para abordar los dilemas de la democracia y de la diferencia al reconocer lo que Walzer (1990) llama polivocalismo (muchas voces), léase pluralidad, multiculturalismo y diversidad. Esto plantea dos temas relacionados: si la diferencia debería ser la base de nuevas concepciones de ciudadanía; y si las demandas por los derechos colectivos y representación colectiva en el parlamento se deben reconocer. Ambos temas cuestionan el grado en que los principios universales deberían defenderse contra las demandas de diferencia.

A pesar de que existe un fuerte apoyo para que la diferencia destituya a la igualdad en la formulación de la política social y en las concepciones de ciudadanía, hay fuertes argumentos en contra de ello. Mouffe y otros se unen al debate por una política antiesencialista, la cual tiene como meta no resguardar la diferencia sexual en la legislación. Mouffe (1992) afirma: "las limitaciones de la concepción moderna de ciudadanía debería ser remediada no por hacer a la diferencia sexual políticamente relevante a su definición, sino por la construcción de una nueva concepción de ciudadanía donde la diferencia sexual llegue a ser efectivamente no-pertinente". Si esto pudiera servir como una meta a largo plazo, es conveniente señalar que los temas de diferencia sexual no pueden ser ignorados, como se evidencia ampliamente en las luchas que diariamente se dan por ellos en los ámbitos de la política social y la reforma jurídica.

El marco convencional de la interrogante respecto a la igualdad o diferencia ha sido ampliamente criticado como una falsa polaridad (Scott, 1988; Phillips, 1993). Ambos principios son importantes para mantener y practicar un compromiso con el principio general de universalidad el cual, a menudo, ha ido junto al reconocimiento de que la desigualdad social requiere medidas que asuman las diferentes capacidades y goce de derechos.

En relación a la representación colectiva, Young (1990) ha dado el argumento más convincente para la institucionalización de mecanismos relacionados con tal noción de ciudadanía, la cual resulta del conocimiento de una multiplicidad de comunidades y no del goce de derechos universales. Young señala que los principios trascendentes callan las voces de los oprimidos y que "un pueblo democrático debería entregar (...) un reconocimiento efectivo a los representantes de diferentes voces y perspectivas de los grupos que lo constituyen y que están oprimidos o en desventaja". La ciudadanía se concibe aquí como el derecho a igual representación de los grupos, de su experiencia, perspectivas e intereses. Esto tiene el atractivo de que permite a grupos oprimidos y en desventaja adquirir mecanismos institucionales de apoyo y acceso a los recursos que se le han negado por largo tiempo. Aun los críticos a las implicancias de este enfoque apoyan algún tipo de sistema de cuotas para la representación de grupos particulares –por lo menos como una medida interina– hasta que las condiciones para una mayor igualdad social se hayan establecido.

Pero existen dificultades con los supuestos que subyacen a la representación de los grupos si ésta es vista como algo más que una solución pragmática a la desigualdad política. Algunas críticas a Young han expresado la visión de que los derechos de los grupos no conducen a una noción más plural y amplia de ciudadanía. Entre los argumentos más fuertes están los referentes al problema de asegurar una representación genuina. ¿Cómo es que un *grupo* como el de las mujeres, con una diversidad de necesidades y preferencias, encuentra una adecuada representación en la política, especialmente al no contarse con acuerdos sobre asuntos subyacentes a los principios? Aun más, ¿cómo es posible asegurar que los propios representantes no constituyan una elite particular que imponga sus propios deseos a las demás integrantes de su grupo?

Hay otros dos peligros para la democracia. En primer lugar, al dar reconocimiento a las colectividades en base a una de sus identidades (mujeres, negros, entre otras), los individuos son *congelados* en ello y motivados a pensar en sus intereses en términos reducidos (Phillips, 1993). Como Squires (1994) ha argumentado, si la política de la identidad es la única base para la acción política, existe el peligro que pudiera servir para esencializar y deshistorizar la diferencia. Como se ha dicho repetidamente, los individuos tienen una multiplicidad de identidades *fracturadas* e inestables y sus intereses son correspondientemente variables.

En segundo lugar, aunque pudiéramos estar de acuerdo respecto a que la políti-

ca del particularismo tiene su lugar en ciertas luchas, no siempre es necesaria. Puede que no entregue una base suficiente para una visión renovada de la ciudadanía. Vargas (en León ed., 1994) señala el riesgo de las políticas competitivas de interés grupal, las cuales sólo se preocupan de las ganancias tácticas para sus miembros, sin que importen las consecuencias más amplias. Los movimientos políticos exitosos tienden a construirse sobre principios lo suficientemente sólidos para que resistan, en el corto plazo, los efectos corrosivos de sus propios intereses.

Dietz (1992) ha señalado las limitaciones de las políticas de identidad en lo referente a los proyectos para la democracia. Sostiene la necesidad de una visión más trascendente que la entregada por los estrechos intereses de las políticas de identidad, "no solamente una determinación feminista para evitar el 'mujerismo' aunque se permanezca atento a las mujeres, sino también un compromiso a la actividad relacionada con la ciudadanía, la cual incluye y requiere la participación de los hombres". Esta posición mira la participación activa en la vida política "comprometiéndose con otros ciudadanos en determinar y buscar intereses individuales y comunes en relación al bien común" como el único camino que las mujeres tienen para realizar los cambios que les son vitales.

Parece probable que algunas versiones de política de identidad continuarán siendo parte del movimiento de mujeres más amplio, y esto puede ayudar al desarrollo de intereses de género específicos que desean continuar desplegando. No obstante, la discusión y debate, dentro de las tendencias del movimiento como un todo, es una condición *sine qua non* del desarrollo democrático como un asunto de alianza y estrategia política más general. Sin embargo, los intereses y demandas particularistas podrían mostrarse más efectivamente articulados dentro de una concepción redefinida de interés general. No es sólo un asunto de política pragmática, sino que es un valor en tanto transforma un interés específico en materia de preocupación pública y de política pública.

Esto nos lleva inevitablemente al asunto al que nos hemos referido anteriormente como los *últimos valores de la ciudadanía*, debido a que en el mundo moderno es difícil escapar a la conclusión que dejar de lado sus principios originales es peligroso. Un volumen significativo de teoría feminista ha argumentado que lo que comúnmente se requiere no es el total abandono del pensamiento ilustrado, sino el reemplazo de las concepciones obviamente defectuosas por versiones que pueden exigir credibilidad tanto teórica como política. Nadie desea reinstalar un universalismo *falso*, una noción *totalitaria* de la trascendencia o una versión simplista de igualdad; esas concepciones necesitan ser repensadas para producir una noción de ciudadanía que sea reelaborada y no excluyente (Lovibond, 1989; Benhabib, 1990).

Una elaboración de ciudadanía con perspectiva de género y de las políticas que pudieran seguir parecen, por lo tanto, requerir de una reformulación de las políticas de participación así como de la propia ciudadanía. El proceso político pluralizado

imaginado en el futuro por las nociones contemporáneas de ciudadanía requiere, como Hirst (1994) lo expresa, "un proceso efectivo de competencia democrática entre los intereses organizados... en los cuales ellos negocian corporativa, colectiva y cooperativamente en asociación con el Estado". En otras palabras, la aceptación de un proceso de negociación es esencial a las políticas pluralistas. De esta manera entonces, regresamos a la interrogante de la práctica feminista y de su relación con la entidad política.

El Estado

El tema de si tratar o no con el Estado y de cómo hacerlo, de trabajar con o contra él, tiene especial repercusión en América Latina donde el activismo femenino estuvo, por largo tiempo, en oposición a la represión política y en una postura crítica a la práctica organizacional de la izquierda. Esta contribuyó al deseo por desarrollar una *nueva forma de hacer política*, asociada con los principios de autonomía, democracia interna e igualitarismo. Con el retorno a los gobiernos democráticos y a los partidos políticos, la interrogante acerca de las propias posiciones feministas dentro de las organizaciones, sea burocracia estatal o partidos políticos, permaneció en discusión.

La creciente concentración del poder burocrático es un obstáculo formidable a la reforma democrática, en tanto el Estado aparece como impermeable y lejano de las preocupaciones ciudadanas. Esta visión pesimista de trabajar dentro de las estructuras del Estado condujo a muchas organizaciones de mujeres a dar la bienvenida al rol creciente jugado por las ONG. Argumentaron que el espacio correcto para la revitalización de las políticas estaba dentro de la sociedad civil en lugar del escenario convencional institucional del Estado y los partidos. Gran parte de la izquierda compartió esta visión que, durante los años sesenta y setenta, fue *antiestatista* (Lechner, 1981) y con adhesión a las ideas de autonomía y entusiasmo por los movimientos sociales, las que continuaron de esta forma hasta los años noventa.

Este énfasis en la autonomía puede haber sido menos real en la práctica de lo que fue en foros académicos, pero una revisión de la literatura sobre género y política en América Latina muestra una preponderancia abrumadora de la preocupación referente a la sociedad civil y a los nuevos movimientos sociales como si ello, por sí mismo, agotara las posibilidades de las prácticas feministas.

La proliferación de las actividades de las ONG en los años ochenta y la resultante concentración en pequeños proyectos y en comunidades locales reflejaron y, en algunos casos, profundizaron la pluralización y fragmentación de los movimientos de mujeres. Para algunos analistas ello fue un signo de saludable diversidad (Alvarez, 1997); para otros constituyó una falla general para formular cualquier tipo de respuesta coordinada en la política. La autonomía, desde la perspectiva negativa, podía

fácilmente traducirse en *ineficacia*. Más aún, el delineamiento de la relación binaria público-privado dentro de las esferas masculina-femenina de la política, continuó estableciendo una separación estéril de esas dos esferas, impidiendo formas necesarias de diálogo y de nexos estratégicos entre ambas.

En tiempos más recientes y en nuevas condiciones políticas, el movimiento de mujeres gradualmente ha sido capaz de trascender algunas de esas *falsas dicotomías*. Lo que algunos ven como la crisis de los sistemas democráticos modernos ha llevado a formular demandas de revitalización de las políticas institucionales y de replanteo de la relación entre Estado y sociedad. El agotamiento del extremismo neoliberal en los años 90 también ha conducido a replantearse la relación entre Estado y economía, a la vez que renovadas preocupaciones por los temas de derechos humanos ha conducido a importantes movimientos a apoyar las reformas del sistema judicial en América Central, en Argentina y en otros lugares.

Esto ha requerido abandonar una concepción monolítica de Estado por un enfoque pragmático, el cual se visualiza como más permeable operando, en la formulación de Pringle y Watson, como "una serie desconectada de escenarios". Claramente los estados de América Latina están lejos de la experiencia de las feministas escandinavas o de la Unión Europea, quienes han sido capaces de hablar de *feminizar el Estado* mediante el establecimiento de mujeres en posiciones de influencia y apoyo a las políticas en favor de la mujer. Pero, no obstante la naturaleza lejanamente permeable de muchos estados contemporáneos, existe gran espacio para una política que mejore la representatividad estatal y los esfuerzos por extender la agenda de gobiernos eficaces de manera que incluyan las preocupaciones feministas.

En América Latina se han producido algunos movimientos positivos en esta dirección como resultado tanto de estrategias regionales como internacionales. Algunos países han adoptado sistemas de cuotas para permitir un mayor número de mujeres en el parlamento y se han establecido comités de mujeres para apoyar la formulación e implementación de políticas. El análisis de género en la formulación política de la macroeconomía está entrando gradualmente en el proceso político, generando una conciencia de las consecuencias sociales relacionadas con las prioridades públicas. La Conferencia de Beijing en 1995 finalmente ha dado voz a la necesidad de ubicar la esfera de la reproducción dentro del proceso de planificación, no sólo para reconocer el trabajo invisible de la mujer sino para identificar las necesidades sociales en forma más general. Temas tales como la feminización de la pobreza también han levantado importantes interrogantes de política, las cuales necesitan urgentes debates y resoluciones. En pocas palabras, los intereses de las mujeres necesitan representación dentro del Estado y en entidades supranacionales en los terrenos de equidad y justicia social, de argumentos efectivos y de reivindicaciones. Se observan algunos avances importantes en Naciones Unidas, la Unión Europea y algunos estados de América Latina.

La efectividad de tales intervenciones es, sin embargo, contingente y va más allá que la seguridad de los *espacios de mujer* dentro del escenario político. En gran medida depende de la naturaleza del Estado y del gobierno, contingencias que permanecen críticamente importantes en la determinación de los éxitos de las demandas del movimiento de mujeres al Estado por recursos y cambios de política. En primer lugar, la simpatía con la que los gobiernos se manifiestan por los temas de mujer y la dirección de la política dependen crucialmente del partido en el poder, de su propia ideología política y, por consiguiente, de la apertura a la representación de las mujeres y a los temas de género. La sola ubicación de un espacio institucional dentro del Estado no es una condición suficiente para un cambio significativo: los grupos de mujeres deben tener una capacidad efectiva para presionar por mantener sus demandas en la agenda política. El trabajo de aquellos en el gobierno depende de nexos fuertes con las fuerzas plurales dentro de la sociedad civil. A su vez, las feministas reconocen la necesidad de ser claras en los temas claves cuando entran en el proceso de negociación política. La emergencia del feminismo conservador como una fuerza significativa puede representar un poderoso aliado en algunos temas, pero también un poderoso oponente en otros.

Si el Estado es un escenario crítico de lucha, ¿qué tipo de Estado debería ser capaz de activar programas basados en fines de igualdad social? Aquí se necesitan nexos entre la sociedad civil y el Estado que entreguen las bases para replantearse no sólo la naturaleza del Estado en relación a los temas de la democracia, sino también su rol en términos políticos y económicos más amplios. Es tarea urgente encarar la formulación de estrategias que respondan a la grave depredación de un sistema que genera crecientes desigualdades sociales. Una consecuencia positiva de la experiencia negativa de la doctrina económica liberal es que ha revitalizado los debates sobre la relación apropiada entre el Estado y la economía, moviéndose más allá de lo que Amin y Thrift (1995) llaman las falsas polaridades del plan versus el mercado, lo público versus lo privado o el Estado versus la sociedad civil.

Los teóricos democráticos en América Latina apoyan los movimientos orientados hacia un Estado más descentralizado, lo cual enfatiza ideas de autogestión local. La izquierda, ansiosa por revitalizar la economía política moribunda de décadas de gobiernos autoritarios, contiene movimientos orientados hacia la recuperación del Estado. Cabría señalar, como advierte O'Donnell (1993), acerca de la necesidad de cautelar la excesiva disminución del Estado.

El Estado tiene una responsabilidad social mayor que la de ser guardián del mercado libre, para lo cual tiene que reformarse. Conseguir un nuevo balance entre Estado, mercado y sociedad civil implica, simultáneamente, democratizar la economía y el Estado para crear formas de gobierno que involucren integralmente a las instituciones de la sociedad civil en la gestión económica y en la distribución del bienestar, lo cual permite representar los intereses de los que no tienen el poder me-

diante la incorporación de movimientos sociales, redes de pequeños empresarios y movimientos por la justicia social (Amin y Thrift, 1995). A esto debe agregarse un importante punto: la propia sociedad civil es también un espacio en el cual los valores y prácticas democráticas deberían ser capaces de ganar más influencia. La *comunidad* y el hogar son potencialmente lugares vitales en la construcción de significados y prácticas democráticas, con tal que no sean vistas como libres de relaciones de poder y privilegio.

Tales visiones de democracia radical revelan las limitaciones de aquellas nociones de ciudadanía activa y políticas de identidad, las cuales están desconectadas de estrategias que son parte de un proyecto más grande de reformas políticas, económicas y sociales. La existencia de asociaciones dentro de la sociedad civil y de políticas de interés son componentes valiosos de la vida cívica, pero no suficientes para alcanzar los tipos de transformaciones que se necesitan para responder a los crecientes problemas de desigualdad social. Los llamados para una mayor responsabilidad cívica y una ciudadanía activa necesitan ligarse a estrategias destinadas a confrontar formas de poder incrustadas dentro de la sociedad como un todo.

El tema importante para muchas feministas latinoamericanas es cómo desarrollar una política que promueva un proyecto general de justicia social, el cual tiene un compromiso con la universalidad de sus principios sin que ello presuponga un público indiferenciado. Tal proyecto depende en una reelaboración radical del Estado, haciéndolo a la vez más democráticamente garante y socialmente responsable. Propuestas tales como esas buscan, por una parte, establecer límites más fluidos entre el Estado y la sociedad civil y, por otra, redefinir las responsabilidades del Estado. Tal proyecto encierra los intereses particulares de las categorías sociales oprimidas al asegurar que las organizaciones, cuyas voces demandan justicia social e igualdad, son canales institucionales idóneos para influenciar la legislación y la política pública. Para el movimiento de mujeres la tarea es como Lister señala: "la de elaborar una concepción de ciudadanía que sea sensible a las diferencias, de y entre categorías de género, siempre que no pierda el potencial emancipatorio de las aspiraciones universalistas de la ciudadanía". Sin la idea de universalismo, respecto de la cual se puede medir la negación a la total y genuina ciudadanía de las mujeres y de otros ciudadanos de segunda clase, el concepto de ciudadanía está en peligro de perder su fuerza política.

Esta es una perspectiva de ciudadanía entre muchas otras y está basada en la creencia de que la igualdad es un principio más poderoso que la diferencia. Pretende capacitar a las mujeres para participar con los hombres como iguales en una esfera pública debidamente transformada. Una condición necesaria es no sólo el reconocimiento y valoración de las responsabilidades tradicionales de la mujer en la esfera privada, sino desligarlas de una asociación exclusiva con la femineidad. Como Dietz (1985) afirma, atacar la injusticia social requiere más que un "lenguaje de amor y

compasión... Solamente el lenguaje de la libertad, igualdad, ciudadanía y justicia" entregarán el desafío efectivo, en otras palabras, "la tarea es expresamente política". Por mucho tiempo el feminismo ha sostenido que no puede haber una igualdad significativa entre los sexos hasta que las responsabilidades en la esfera privada se compartan. La problemática de la falla de los hombres para cumplir las obligaciones de *el ciudadano cuidador* es una forma para establecer el nexo vital entre democracia e igualdad, tanto en la esfera pública como privada. Un compartir más equitativo de la división social del cuidado mediante mejores medidas públicas, expande y enriquece el significado de la ciudadanía en una forma que es vital a los intereses de las mujeres y de la sociedad en su conjunto.

Bibliografía

Alvarez, Sonia. 1990. *Engendering Democracy in Brazil.* Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

_____ . 1997. Latin American Feminisms Go Global: Trends of the 1990's and Challenge for the New Millenium. En: Alvarez et al., eds., *Cultures of Politics/Politics of Cultures: Revisioning Latin American Social Movements.* Boulder, Colorado Westview.

Amin, Ash y Nigel Thrift. 1995. Institutional Issues for the European Regions: From Markers and Plan to Socioeconomics and Powers of Association. *Economy and Society*, vol. 24, N° 1, febrero.

Bock G., y Susan James, eds. 1994. *Beyond Equality and Difference.* London/NY: Routledge.

Bulmer-Thomas, V. ed. 1996. *The New Economic Model in Latin America.* Londres: ILAS/Macmillan.

Campbell, Beatrix. 1995. Old Fogeys and Angry Young Men: A Critique of Communitarianism. *Soundings*, Issue 1, otoño. pp.47-64.

Chant, Sylvia. 1985. Family Formation and Female Roles in Queretaro, Mexico. *Bulletin of Latin American Research*, vol. 4, N° 1.

Coole, Diana. 1988. *Women in Political Theory, From Ancient Misogyny to Contemporary Feminism.* Sussex, Brighton: Wheatsheaf Books.

Dietz, Mary. 1987. Context is all: Feminism and Theories of Citizenship. *Daedelus* 116:4 pp.1-24.

_____ . 1985. Citizenship with a Feminism Face. The Problem with Maternal Thinking. *Political Theory*, vol. 13, N° 1, febrero.

Elshtain, J.B. 1981. *Public Man, Private Women.* New Jersey: Princeton.

Flax, Jane. 1989. Beyond Equality: Gender, Justice and Difference. En: Fraser, Nancy, *Unruly Practices.* Oxford: Polity Press.

Frazer, E. y Nicola Lacey. 1993. *The Politics of Community.* Harvester Wheatheaf.

Gaspar Pereira H. 1996. The Viva Rio Movement. ILAS Occasional Paper N° 45.

Gellner, Ernest. 1994. *Conditions of Liberty.* Penguin.

Gilligan, Carol. 1982. *In a Different Voice.* Cambridge, Mass: Harvard University Press.

González de la Rocha, Mercedes. 1994. *The Resources of Poverty.* Cambridge, Mass: Blackwell.

Guzmán, V., Portocarrero, P. y Vargas, V., compiladoras. 1991. *Una Nueva Lectura: Género en el Desarrollo.* Lima: Entre Mujeres, Flora Tristán.

Hall and Held. 1989. Left and Rights. *Marxism Today,* June 16-23.

Hirst, P.Q. 1994. *Associative Democracy.* Cambridge.

Hobbsbawm, Eric. 1996. The Cult of Identity Politics. *New Left Review* N° 217.

Jelin, E. and Hershberg, Eric. 1996. *Constructing Democracy: Human Rights, Citizenships and Society in Latin America.* Westview.

Jelin, E. 1990. *Women and Social Change in Latin America.* London: Zeed Books.

Jaquette, Jane, ed. 1995. *The Women's Movement in Latin America.* 2nd Ed.
Jones, K. B. 1990. Citizenships in a Woman-Friendly Polity. *Signs* 14(4):781-812.
_____ . 1993. *Compassionate Authority.* Routledge.
Jones, K. B. and Jónasdóttir, A., eds. 1988. *The Political Interest of Gender.* London: Sage.
Keane, John. *Democracy and Civil Society.* London: Verso.
Lavrin, A. 1996. *Women, Feminism, and Social Change in Argentina, Chile and Uruguay, 1890-1940.* Lincoln: University of Nebraska Press.
Lechner, N. 1988. *Los patios interiores de la democracia.* Santiago, Chile: Fondo de Cultura Económica.
Lehmann, D. 1990. *Democracy and Development in Latin America.*
León, Magdalena, ed. 1994. *Mujeres y participación política. Avances y desafíos en América Latina.* Bogotá: TM Editores.
Levi. 1996. Social and Unsocial Capital: A Review Essay of R. Putnam's. *Making Democracy Work in Politics and Society*, Vol. 24, N° 1.
Lister, Ruth. 1995. Dilemas in Engendering Citizenship. *Economy and Society,* Vol. 24, N°1.
Lovibond, Sabina. 1989. Feminism and Postmodernism. *New Left Review* N° 178.
McIntyre, Alasdair. 1988. *Whose Justice? Which Rationality?* London: Duckworth.
_____ . 1981. *After Virtue. A Study in Moral Theory.* London: Duckworth.
Marshall, T.H. 1950. *Citizenship and Social Class and Other Essays.* Cambridge: Cambridge University Press.
Mill, J.S. 1929. *On the Subjection of Women.* London: Everyman.
Moller Okin, Susan. 1991. *Justice, Gender and the Family.*
Mouffe, Chantal, ed. 1992. *Dimensions of Radical Democracy.* London: Verso.
Nussbaum, Martha and Glover, Jonathan, eds. 1995. *Women Culture and Development.* Oxford: Clarendon Press.
O'Donnell. 1993. On the State, Democratization and some Conceptual Problems. *World Development,* Vol. 21, N° 8.
Parsons, Talcott. *Family Socialization and Interaction Process.*
Pateman, Carole. 1989. *The Sexual Contract.* Cambridge: Polity Press.
Phillips, Anne. 1993. *Democracy and Difference.* Cambridge: Polity Press.
_____ . 1991. *Engendering Democracy.* Cambridge: Polity Press.
Pringle, R. and Watson, S. 1992. Women's Interests and the Post-Structuralist State. En: Barrett and Phillips, *Destabilising Theory.* Cambridge: Polity Press.
Putnam, R. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy.* Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Ruddick, Sara. 1980. Maternal Thinking. *Feminist Studies* 6, N°2, Summer.
Sijm. 1988. En: Jones, K. B. and Jónasdottir A., eds., *The Political Interest of Gender.* London: Sage.
Showstack Sassoon, Anne, ed. 1987. *Women and the State - the Shifting Boundaries of Public and Private.* London: Hutchinson.
Squires, J. 1994. *Added Values Signs of the Times.* Discussion Paper.
Tronto, Joan C. 1993. *Moral Boundaries Political Argument for an Ethics of Care.* New York and London: Routledge.
Vargas, Virginia. 1991. The Women's Movement in Peru. Streams, Spaces and Knots. *Review of Latin American and Caribbean Studies* 50, June.
Walzer, Michael. 1990. The Communitarian Critique of Liberalism. *Political Theory* 18:3.
Waylen, G. 1996. *Gender in Third World Politics.* London: Open University Press.
Young, Iris Marion. 1990. *Justice and the Politics of Difference.* Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Yuval-Davis, Nira. 1993. Gender and Nation. *Ethnic and Racial Studies,* Vol. 16, N° 4, pp. 621-632.



MUJERES, CIUDADANÍA Y DIFERENCIA*

NIRA YUVAL-DAVIS

La ciudadanía se ha convertido en un tema de debate muy popular en los últimos años, asumido tanto por la izquierda como por la derecha, a nivel nacional e internacional, así como por las feministas. El interés en la ciudadanía reside no sólo en el restringido sentido formal de tener derecho a portar un pasaporte específico sino como un concepto general que resume la relación entre el individuo, el Estado y la sociedad.

T.H. Marshall (1950, 1975, 1981), quien ha sido el teórico sobre ciudadanía con mayor influencia en Gran Bretaña la ha definido como "una condición conferida a aquellos que son miembros plenos de una comunidad" (1950), lo cual incluye los derechos civiles, políticos y sociales y las obligaciones. Vinculando formalmente ciudadanía a la membresía con una comunidad más que con el Estado, como lo hace la concepción liberal, la definición de Marshall nos permite discutir analíticamente la ciudadanía como un *constructo* de múltiples niveles, aplicable a personas miembros de variadas colectividades, local, étnica, nacional y transnacional. Esta construcción de ciudadanía multidimensional es particularmente importante en estos días en que los estados neoliberales redefinen y reprivatizan sus tareas y obligaciones. También permite levantar la interrogante acerca de la relación entre *la comunidad* y el Estado y cómo esto afecta la ciudadanía de la gente. Los debates en la literatura entre *liberales* y *comunitarios* (ver, por ejemplo Averini y Shalit, 1992; Daly, 1993; Nimni, 1996; Phillips, 1993) y los *republicanos* (Peled, 1992; Roche, 1987; Sandel, 1982; Oldfield,

---

* Versión revisada del artículo *Women, Citizenship and Difference*, presentado en la Conferencia sobre Mujeres, Ciudadanía y Diferencia, realizada en la Universidad de Greenwich entre el 16 y el 18 de julio de 1996. También forma parte del capítulo 4 del libro de la misma autora, *Gender and Nation*, Sage, 1997. (Traducción de Oriana Jiménez)

1990) se refieren a estos tópicos. El artículo examina algunas de las implicaciones de este debate para las nociones de derechos sociales y diferencia social.

Brian Turner (1990) ha construido una importante tipología basada en dos dimensiones, lo público/privado y lo activo/pasivo. La tipología de Turner, por desgracia, es del todo eurocentrada o, más bien, occidentalmente centrada (Yuval-Davis, 1991), basando su tipología *universal* en el desarrollo de la ciudadanía en cuatro países occidentales. Aún más impresionante sea quizás el hecho de que la tipología de Turner es ciega desde el punto de vista del género (Yuval-Davis, 1991; Walby, 1994), aunque las dos dimensiones que considera son aquellas que a menudo han sido usadas para describir las diferencias de género en general y las diferencias en relación a la ciudadanía de las mujeres en particular (Pateman, 1988; Grant, 1991). Este artículo explora estas dos dimensiones y cómo ellas deberían ser teorizadas si queremos construir un marco comparativo de análisis de la ciudadanía de género sin sesgos culturales occidentales y que incorpore nociones de diferencia.

El nacionalismo y *la comunidad*

Tal como lo describe Roche (1987), en la tradición liberal se supone que los ciudadanos individuales poseen igual condición, iguales derechos y deberes, etc., de manera que los principios de desigualdad que se derivan del género, etnia, clase u otros contextos no deben ser relevantes a la condición de ciudadanía como tal. Los ciudadanos son así construidos no como "miembros de la comunidad" sino como extranjeros entre sí, aunque comparten un complejo conjunto de supuestos y expectativas mutuas que, cuando no son satisfechas, pueden ser impuestas mediante la fuerza por el Estado.

Esta abstracción liberal de identidad ha sido criticada por los *comunitarios* que pretenden que las nociones de derechos y deberes, al igual que aquellas de igualdad y privacidad, no tienen sentido fuera del contexto de comunidades particulares (Ackelsberg, 1995). Sobre bases diferentes, los proponentes del republicanismo como Sandel (1982) también consideran profundamente insatisfactoria la construcción individualista de la ciudadanía. Argumentan que tal construcción niega la posibilidad de ciudadanía como constitutiva de membresía en una *comunidad moral*, en la cual la noción del *bien común* es antecedente de la elección de ciudadanía individual. La construcción liberal, según Sandel, supone la prioridad del *derecho sobre el bien*. El republicanismo, de otro lado, construye la ciudadanía no sólo como un estatus sino también como un medio de involucramiento y participación activa en la "determinación, práctica y promoción del bien común".

Sin embargo, como Peled comenta (1992), "ello plantea la cuestión de cómo se constituye la comunidad [moral] republicana y qué cualidades se requieren para tomar parte activa en ella". Según Peled, pueden diferenciarse dos nociones distintas

de comunidad en la actual revitalización del republicanismo: una comunidad débil en la cual la membresía es esencialmente voluntaria y una comunidad fuerte e histórica que es descubierta y no formada por sus miembros. En una comunidad fuerte su "existencia continua es un valor importante en y por sí misma" y se convierte en uno de los imperativos más importantes –si no el más importante– de la "comunidad moral".

La membresía en una comunidad fuerte envuelve un vínculo duradero, a menudo un mito de origen común y claramente relacionado a un mito de destino común. En otras palabras, la comunidad fuerte es una comunidad imaginada nacional (Anderson, 1983). En tanto comunidad fuerte, no existen diferencias entre las construcciones republicanas de la comunidad moral y las construcciones de tipo *gemeinschaft* de la comunidad nacional.

Surge entonces la pregunta: ¿qué ocurrirá con aquellos miembros de la sociedad civil que no pueden o no quieren convertirse en miembros plenos de tal comunidad? Para Peled, la solución (según Oldfield, 1990) es una construcción de ciudadanía a dos niveles. Una membresía plena en la "comunidad fuerte" para quienes puedan ser incluidos, y para quienes no puedan "un estatus residual, trunco, similar a la noción liberal de ciudadanía como un conjunto de derechos. Los titulares de esta ciudadanía no comparten la participación en el bien común, pero están asegurados en sus posesiones de lo que consideramos derechos humanos y civiles esenciales".

En otras palabras, Peled sugiere la institucionalización de un sistema excluyente de ciudadanía a dos niveles como una manera de resolver la discrepancia entre las fronteras de la sociedad civil y la colectividad hegemónica nacional. Tal solución está lejos de ser satisfactoria. A nivel político, abiertamente disimula la discriminación y la segregación racial de ciudadanos en términos nacionales (Peled presenta a Israel y su tratamiento a los palestinos, quienes son ciudadanos del Estado israelí desde 1948, como un caso ideal de un Estado que logró hacerlo con éxito). A nivel teórico, dicotomiza la población en dos colectividades homogéneas –los que se encuentran dentro y los que están fuera de la colectividad nacional–, sin prestar atención a otras dimensiones de divisiones y posiciones sociales tales como género, etnicidad intranacional, clase, sexualidad, capacidad, momento del ciclo de vida, entre otras, las cuales son cruciales para la construcción de la ciudadanía.

Sin embargo, a pesar de todas estas reservas, la postura anterior por lo menos reconoce la naturaleza contradictoria potencialmente inherente de la ciudadanía como individual y comunal, inclusiva y excluyente. En los trabajos de Marshall (op. cit.), estos temas no son considerados en absoluto como problemas y ha habido un supuesto automático de una superposición entre los límites de la sociedad civil y los de la comunidad nacional.

En este punto es necesario formular dos advertencias. Como ya he señalado en otros textos (Cain y Yuval-Davis, 1990; Yuval-Davis, 1991), es importante no ver a

la comunidad como una unidad natural. Colectividades y comunidades son constructos ideológicos y materiales cuyas fronteras, estructuras y normas son resultado de procesos constantes de luchas y negociaciones o de desarrollos sociales más generales (Anthias y Yuval-Davis, 1992). El imperativo moral, que interpreta el bien de la comunidad como apoyo para su existencia continua como una colectividad aparte, puede convertirse en una ideología conservadora que consideraría cualquier cambio interno o externo en la comunidad como una amenaza. Por otra parte, es importante recordar que, como hemos comentado antes (Yuval-Davis y Anthias, 1989), la noción de ciudadanía no puede encapsular adecuadamente en sí misma todas las dimensiones de control y negociaciones que tienen lugar en las distintas áreas de la vida social, ni puede abordar correctamente las maneras en que el propio Estado forma su proyecto político.

Derechos sociales y diferencia social

La definición liberal de ciudadanía construye a todos los ciudadanos como básicamente iguales y considera las diferencias de clase, etnicidad, género, entre otras, como irrelevantes a su condición de ciudadanos. Por otra parte, el Estado benefactor supone una noción de diferencia determinada por necesidades sociales. En palabras de Edwards (1988), "aquellos con necesidades similares deben obtener recursos similares y aquellos que tienen necesidades distintas, recursos diferentes o –más sucintamente– tratamiento como iguales en lugar de igual tratamiento".

En un inicio las diferencias fueron concebidas como exclusivamente de clases. Tal como lo vislumbrara originalmente Beveridge (1942), los derechos del bienestar social estuvieron orientados a mejorar la calidad de vida de las clases trabajadoras (así como al funcionamiento fluido del capitalismo). Según lo describiera Harris (1987), el asistencialismo fue concebido como el reconocimiento institucionalizado de la solidaridad social dentro de la comunidad política de los ciudadanos.

De acuerdo con Evans (1993), esta solidaridad social está siendo amenazada por una variedad de agrupaciones étnicas, raciales, religiosas y sexuales que existen dentro de la matriz marginal de la sociedad, y "que experimentan discriminación informal y formal en consonancia con el bajo valor social que se les reconoce" (Evans, 1993). Una preocupación principal de las múltiples luchas y debates (Gordon, 1989; Hall y Held, 1989) ha sido alrededor del derecho a entrar o permanecer en un país específico. Las leyes de migración son instancias de construcción de fronteras ideológicas, racistas incluso, que permiten el movimiento irrestricto de algunos y el completo bloqueo para otros.

Incluso cuando se han resuelto cuestiones de ingreso y establecimiento, las inquietudes de las personas pertenecientes a minorías étnicas pueden ser distintas de las de otros miembros de la sociedad. Por ejemplo, su derecho a una ciudadanía for-

mal puede depender de normas y regulaciones de su país de origen y del país en que viven, así como de la relación entre ambos. Por ello, la ciudadanía debe ser analizada no sólo en términos del Estado sino en relación a múltiples ciudadanías formales e informales en más de un país. Y más importante aún, estas ciudadanías deben ser vistas desde una perspectiva que incluya las diferentes ubicaciones de los distintos estados así como las diferentes ubicaciones de personas y agrupaciones al interior de los estados (Bakan y Stasiulis, 1994).

Un conjunto completamente distinto de temas de ciudadanía está relacionado con las minorías indígenas en sociedades colonialistas (Stasiulis y Yuval-Davis, 1995; Dickanson, 1992). No se trata sólo de que en muchas sociedades las poblaciones indígenas hayan ingresado tardíamente, si es que ingresaron, al organismo formal de ciudadanía del Estado. Se trata de que si su demanda al país –bajo la forma de derechos territoriales– fuera tomada seriamente en su significado pleno, ello entraría totalmente en conflicto con las demandas de legitimidad de la colectividad colonial nacional. Los intentos de resolver el problema transformando a la población indígena en otra minoría étnica han encontrado, por lo general, una fuerte y comprensible resistencia (deLepervanche, 1980). Los tratados formales, que institucionalizarían y fijarían legalmente las relaciones entre lo que los aborígenes australianos han dado en llamar *la sociedad impuesta* y los pueblos indígenas, a menudo crean una situación compleja en la cual existen dos entidades soberanas en el mismo territorio: una que tiene propiedad sobre el Estado y la otra que trata de establecer una sociedad soberana sin Estado dentro de la primera. Luchas de algún modo similares, aunque expresadas en términos menos raciales, están presentes en muchos movimientos secesionistas que reclaman el derecho a la autodeterminación nacional de cara a sus estados, los que se han constituido como naciones.

Los aspectos más problemáticos de los derechos ciudadanos de las minorías raciales o étnicas están relacionados a los derechos sociales y a la noción de multiculturalismo (Parekh, 1990; Jayasuriya, 1990; Yuval-Davis, 1992, 1997). Para algunos (como Harris, 1987 y Lister, 1990), el problema sigue residiendo en el terreno de ciudadanos individuales, aunque diferentes. La comunidad homogénea de Marshall está siendo transformada en una comunidad pluralista a través de su reinterpretación, la cual pone el énfasis ya no sobre la igualdad de status sino sobre el respeto mutuo (Lister, 1990). Tal modelo, sin embargo, no toma en cuenta los potenciales conflictos de intereses entre las diferentes agrupaciones de ciudadanos, no considera el carácter colectivo, antes que individual, de los dispositivos conferidos a los miembros de minorías étnicas (Jayasuriya, 1990).

Las políticas multiculturalistas construyen de manera efectiva la población o, más bien, las clases pobres y trabajadoras dentro de la población, en términos de colectividades étnicas y raciales. A tales colectividades se les atribuye necesidades colectivas basadas en sus diferencias culturales así como en sus desventajas estructu-

rales. La cuestión de la satisfacción colectiva de las necesidades se relaciona con políticas de acción positiva orientadas a derechos grupales antes que individuales. Tales políticas generan resistencia en tanto las de bienestar y empleo en términos de derechos grupales pueden entrar en conflicto con los derechos individuales y ser, en consecuencia, discriminatorias. Sin embargo, al menos en países que adoptaron oficialmente políticas multiculturalistas como el caso de Canadá, Gran Bretaña y EE.UU., se ha aceptado ampliamente que las únicas medidas efectivas que pueden tomarse son las de dispositivos colectivos y acción positiva, basadas en la pertenencia al grupo (Burney, 1988; Young, 1989; Cain y Yuval-Davis, 1990). Políticas similares han sido elaboradas en otros estados pluralistas tales como India y Sudáfrica.

La cuestión se torna más problemática cuando el dispositivo se relaciona con las diferentes necesidades culturales de etnicidades distintas. En los casos más extremos, como en los debates sobre aborígenes por un lado y las minorías musulmanas en relación al caso Rushdie por el otro, ha habido llamados para posibilitar que las minorías operen de acuerdo a sus propios sistemas de costumbres y legalidad religiosa. Aunque los argumentos contrarios han cubierto un variado espectro, desde el hecho de que ello implicaría un sistema de *apartheid* de facto hasta argumentos de unidad social y hegemonía política, quienes apoyan esta afirmación la han visto como una extrapolación natural de los derechos sociales y políticos de las minorías.

Ello plantea la cuestión de cómo definir los límites de los derechos ciudadanos. Kymlicka sugiere diferenciar *dos tipos de derechos grupales*: aquellos que comprometen los derechos de un grupo en relación a sus propios miembros y aquellos que comprometen los derechos del grupo en relación a la sociedad (o al Estado). Kymlicka se opone al uso de los poderes del Estado en el apoyo a las demandas del primer tipo pues, sostiene, muy a menudo individuos al interior del grupo podrían oprimir en nombre de la cultura y la tradición. En el segundo caso, el tema a menudo implica protección a los grupos vulnerables. En tal caso, la intervención estatal es bienvenida. Aunque en general la línea de argumentación de Kymlicka puede ser aceptada, reifica y naturaliza los límites grupales y no diferencia entre personas con posiciones específicas de poder al interior del grupo (las cuales no son homogéneas y pueden tener intereses diferentes y confrontacionales) y *el grupo*.

Jayasuriya (1990), en una terminología un tanto diferente aborda las mismas interrogantes. Sugiere una distinción entre necesidades que son esenciales y que, por tanto, deben ser satisfechas por el Estado, y deseos, que caen fuera del sector público y deben ser satisfechos dentro del terreno privado de manera voluntaria. Esta conceptualización de *deseos* y *necesidades* como diferencias objetivas entre demandas culturales esenciales y no esenciales de subcolectividades específicas al interior de la sociedad civil es, desde luego, altamente sospechosa. Las necesidades culturales no son características esencialistas fijas y ahistóricas de las colectividades. Las culturas son recursos altamente heterogéneos usados selectivamente y, a menudo, de maneras

contradictorias en diferentes proyectos étnicos promovidos por miembros de colectividades específicas, de una forma que perjudica a las mujeres. Con frecuencia las mujeres padecen por la aceptación de la definición, por parte del Estado, de lo que constituyen "las necesidades culturales de la comunidad" en materia de educación, matrimonio, divorcio y otras disposiciones tales como refugios para mujeres (Sahgal y Yuval-Davis, 1992; sobre este aspecto existen testimonios de mujeres activistas de varios países post-coloniales en una conferencia de movilización sudafricana. Ver Biehl, 1994)).

Lo privado y lo público

Jayasuriya establece la línea fronteriza de provisión por parte del Estado entre los dominios público y privado, como si tal frontera fuera natural y estática. Tal límite es, sin embargo, altamente problemático, tanto en términos de género como cultural.

Existe un alto grado de inconsistencia en las maneras en que los diferentes autores discuten sobre la frontera entre lo público y lo privado y su relación con otros conceptos tales como sociedad política y civil, familia, economía, sector voluntario, entre otros.

Feministas tales como Carole Pateman (1988; 1989) y Ursula Vogel (1989) identifican la esfera pública con lo político mientras que la esfera privada la relacionan básicamente con el dominio familiar. Pateman examinó los escritos de teóricos del contrato social como "la más famosa e influyente historia política de los tiempos modernos jamás narrada". La fraternidad (uno de los tres lemas de la Revolución Francesa, que también llamaba a la libertad y a la igualdad) dice, singulariza la transformación de las relaciones de poder hegemónicas en la sociedad desde un patriarcado –en el cual el padre (o el rey como figura paterna) gobernaba sobre otros hombres y mujeres– a una fraternidad –en la cual los hombres conquistan el derecho de gobernar a sus mujeres en la esfera doméstica, pero convienen en un contrato de orden social de igualdad entre ellos en la esfera pública y política. Por ello, las mujeres no fueron excluidas de la esfera pública incidentalmente, sino como parte de la negociación entre el nuevo régimen y sus ciudadanos miembros. De un modo similar, Vogel ha demostrado que las mujeres no eran simplemente participantes tardías de los derechos de ciudadanía, como propone el modelo evolutivo de Marshall. La exclusión fue parte y parcela de la construcción del derecho masculino no sólo como individuos sino también como "representantes de una familia (es decir, un grupo de no ciudadanos)" (Vogel, 1989). Y de hecho, en la Inglaterra victoriana, las mujeres perdían su ciudadanía cuando se casaban; seguían perdiéndola, hasta 1948, si se casaban con extranjeros y no fue sino hasta 1981 que obtuvieron el derecho independiente de transferir su ciudadanía a los hijos (WING, 1985; Bhabha y Shutter, 1994).

En contraposición a esta construcción de Pateman y Vogel acerca de lo privado como dominio de la familia, Jayasuriya (1990) aborda el dominio privado como aquel no financiado y/o controlado por el Estado, incluyendo las instituciones religiosas. Bryan Turner (1990) incluye en el dominio privado el mejoramiento del propio yo y otras libertades, así como actividades espirituales. Sylvia Walby (1994) critica a Turner por adoptar el "punto de vista masculino" en este aspecto al fusionar dos significados de *privado* –el que se refiere a la autonomía de la persona y el que se relaciona a la libertad respecto a las intervenciones del Estado. Argumenta que mientras la familia puede o no ser libre de intervención por parte del Estado, no es un espacio autónomo y libre para las mujeres ni tiene un conjunto unitario de intereses. Diferentes miembros de la familia –nuclear o extendida– tienen distintas posiciones, poderes e intereses sociales dentro de ella.

Si aceptamos el término privado como aquel en el cual el individuo es autónomo, entonces este significado puede ser ejercido en mayor o menor medida en todas las esferas sociales, donde las personas –y no sólo las mujeres– pueden actuar como parte de las estructuras sociales y colectividades con todas las limitaciones que éstas suponen y como agentes individuales autónomos ya sea en la familia, en la esfera civil o en la política. Al mismo tiempo, las relaciones de poder político, con sus propias dinámicas, existen en cada esfera social. La contribución más importante del feminismo a la teoría social ha sido el reconocimiento de que las relaciones de poder operan también al interior de las relaciones sociales primarias, al igual que en las relaciones secundarias más impersonales de los dominios civil y político.

El reconocimiento de que las líneas de poder operan tanto horizontal como verticalmente han dado lugar a la idea foucaultiana de que no es necesario teorizar al Estado como una esfera unitaria aparte. Sin embargo, como se ha dicho en otro momento (Anthias y Yuval-Davis, 1989), aunque el Estado no es unitario en sus prácticas, intenciones o efectos, existe la necesidad de retener al Estado como una esfera aparte, "un cuerpo de instituciones que están centralmente organizadas alrededor de la intencionalidad de control, con un determinado aparato de ejecución a su mando o como soporte". Aunque la producción ideológica, la educación y los medios de comunicación pueden residir dentro y fuera del Estado, el ejercicio de los derechos individuales y colectivos sigue estando ligado al Estado (Soysal, 1994). Este control sobre el Estado sigue siendo el principal objetivo político. Especialmente en el Estado benefactor moderno, no existe esfera social que esté protegida de la intervención estatal. Aún en casos donde no hay una intervención directa, es el Estado el que establece usualmente, de manera activa o pasiva, los límites de su no intervención. En otras palabras, la construcción de los límites entre lo público y lo privado es un acto político en sí mismo.

Dadas todas estas inconsistencias y confusiones en la determinación del dominio privado, sugiero que abandonemos la distinción de público/privado. Deberíamos,

más bien, diferenciar tres esferas distintas: el Estado, la sociedad civil, y el dominio de la familia, las relaciones de parentesco y otras relaciones primarias.

Feministas como Ann Orloff (1993) y Julia O'Connor (1993), han señalado que existe la necesidad de añadir el dominio de la familia al del Estado y el mercado cuando se analizan los modos en que las sociedades organizan la asignación de servicios de bienestar. Sin embargo, también debe ser añadido el dominio de la familia cuando discutamos las diferentes ubicaciones de las organizaciones políticas y el poder.

Resulta desorientador ver en el surgimiento del Estado-Nación moderno una forma de organización social completamente distinta a las pre-modernas. En muchos estados, especialmente en los post-coloniales, la familia extendida y las relaciones de parentesco han seguido siendo usadas como focos de lealtad y organización. Los derechos políticos, sociales y probablemente incluso los civiles, pueden depender de la ubicación familiar del ciudadano particular.

En el otro extremo del continuum familia-sociedad civil-agencias del Estado, tenemos a los Estados del ex bloque soviético, en los cuales se hizo el intento de incorporar todas las facetas del dominio civil y, en cierta medida, también del dominio familiar. Todas las actividades políticas, económicas y culturales estaban destinadas a ser controladas por el Estado, todas las formas de organización o expresión que no siguieran la línea del Estado (y del Partido Comunista) tendían a ser reprimidas y controladas. La membresía en el Partido conllevaba mayores derechos civiles, políticos y sociales.

Al igual que en los países del ex bloque soviético, en los estados de bienestar occidentales como, por ejemplo, los países escandinavos, el Estado ha suministrado instalaciones públicas para ayudar a las mujeres con las responsabilidades domésticas y el cuidado de los hijos, de manera que puedan concurrir al mercado laboral, pero a diferencia de lo que ocurre en el ex bloque soviético, han tenido una proporción mayor de representación política.

Se considera que los estados de bienestar son aquellos en los cuales la influencia de la sociedad civil es mayor en términos de la ubicación del poder político así como del económico. Marshall (1981) describió a la sociedad capitalista como la sociedad "unida con guiones"[1] en la cual existen tensiones inevitables entre una economía capitalista y el Estado benefactor. Esping Andersen (1990) describió las variaciones entre distintos regímenes de estado de bienestar como dependientes del grado en el cual las fuerzas del mercado o el Estado prevalecen en la lucha por la dominación. Es importante recordar, sin embargo, que el dominio civil no es sólo el mercado. Allí operan no sólo relaciones económicas sino también políticas y sociales en colusión y/o resistencia con las fuerzas del mercado. Los partidos políticos, movi-

1. Se aplica despectivamente a los naturalizados cuyas simpatías están con el país de origen.

mientos sociales y sindicatos no son parte del Estado aun cuando éstos son a menudo organizados y concentran sus actividades en el Estado. Especialmente importantes para nuestro interés son las organizaciones formales e informales, las asociaciones e instituciones de la sociedad civil que están organizadas por/para miembros de colectividades étnicas/raciales/nacionales particulares. Tales colectividades juegan un papel mayor o menor en la formulación de políticas estatales, y relaciones sociales y políticas.

En términos generales, los ejemplos mencionados demuestran la importancia relativa de los diferentes dominios –familiar, civil y agencias estatales– en la determinación de los derechos sociales, políticos y civiles de sus ciudadanos. Por consiguiente, cualquier teoría comparativa de ciudadanía debe incluir un análisis de la autonomía individual permitida a los ciudadanos (de distintos géneros, etnias, regiones, clases, etapas del ciclo de vida, entre otros) frente a sus familias, organizaciones de la sociedad civil y agencias del Estado.

Ciudadanía activa/pasiva

El otro eje de la tipología comparativa de ciudadanía de Brian Turner es el de activo/pasivo, el cual define (1990) como "si el ciudadano es conceptualizado meramente como sujeto a una autoridad absoluta o como un agente político activo". La diferenciación convencional, entonces, entre *ciudadano* y *sujeto* es eliminada en la definición de Turner y se convierte en cambio en un continuum de pasividad y actividad.

La historia de la ciudadanía es distinta en países diferentes. En algunos, como en Francia y EE.UU., ha sido resultado de una lucha popular revolucionaria, mientras que en otros, como Gran Bretaña y Alemania, ha sido más bien un proceso *de arriba hacia abajo*. De manera similar, en algunos países post-coloniales como India o Kenia, la independencia nacional se logró tras un largo período de lucha popular, mientras que en otros, como en ciertas islas del Caribe, tal transición fue mucho más pacífica y el gobierno civil fue transferido pacíficamente de la elite colonial a la local. Hoy en día, virtualmente toda la población mundial vive en países en los cuales existe cierta forma de ciudadanía, al menos en el sentido marshalliano de ser miembro de una comunidad.

En el escenario actual sólo una minoría de personas, probablemente en una minoría de estados, poseen la condición de ciudadanía activa. Esto no es sólo una cuestión de derechos formales. Incluso en las sociedades más activamente democráticas existen estratos de la población que son más pasivos, demasiado restringidos y/o alienados para participar incluso en el acto formal de votar. Entre éstos pueden figurar no sólo niños, migrantes, minorías étnicas y poblaciones indígenas en sociedades coloniales, sino también lo que se ha dado a conocer como *subclase*, que en

EE.UU. son en gran medida los negros, pero que en Gran Bretaña y otros países pueden ser también blancos en su mayoría y entre los cuales hay una gran proporción de madres solteras (Lister, 1990; Lydia Morris, 1994). Género, sexualidad, edad y calificación, así como etnicidad y clase son factores importantes en la determinación de las relaciones de las personas con sus comunidades y estados.

La noción de *ciudadano activo* ha sido foco de debates y políticas en años recientes dentro de la izquierda y la derecha, especialmente en Gran Bretaña. El reciente y cada vez mayor interés de la izquierda por la ciudadanía ha coincidido con la manifestación de que muchos de los derechos sociales que se han dado por sentado en el Estado benefactor en las áreas de atención de salud, educación, jubilación, beneficios a los hijos, entre otros, están amenazados. Sin embargo, más que concentrarse en los derechos sociales, la izquierda (y el centro) han utilizado la ciudadanía como un llamado a la movilización y participación política.

El lenguaje de la ciudadanía también ha sido un importante discurso para la derecha. En Gran Bretaña *el ciudadano activo* ha sido propuesto como una alternativa al Estado de bienestar, en el cual el ciudadano es construido como un jefe de familia varón de clase media y económicamente exitoso que satisface sus deberes de ciudadano entregando a la comunidad el dinero y tiempo que le sobra (Lister, 1990; Evans, 1993). Por consiguiente, en este sentido, la ciudadanía deja de ser un discurso político y se convierte en una participación voluntaria dentro de la sociedad civil, en la cual los derechos sociales del pobre son transferidos, al menos parcialmente, de derechos a caridades. Los derechos se convierten en dones y la ciudadanía activa supone una noción de ciudadanía de arriba hacia abajo.

Esta despolitización de la noción lleva a que los derechos ciudadanos se alejen de los derechos sociales al bienestar, hacia los derechos civiles de tipo económico. Su objetivo es promover a la persona individual y la autonomía en vez de promover la relación entre la persona y la comunidad, lo cual caería claramente dentro de la práctica liberal de ciudadanía descrita anteriormente.

La noción thatcheriana de ciudadanía como consumismo no se basó por completo en el modelo de libre mercado, a pesar de su retórica universalista. Se observan, también, limitaciones legales y morales que impiden que una variedad de grupos marginales o minoritarios mantengan sus creencias religiosas y culturales o sus necesidades económicas (Evans, 1993). El manejo del Estado de estos *extranjeros morales*, que pueden ser hallados en la matriz marginal de la ciudadanía, es ejercido en los ámbitos sociales, políticos y económicos. Esta es la zona indiferenciada entre las formulaciones liberal y republicana de ciudadanía donde se ubican las minorías religiosas, étnicas y sexuales, fuera de la *comunidad moral* nacional, pero dentro de la nación cívica. Es así como las políticas multiculturalistas se orientan a incluir y excluir simultáneamente a las minorías, colocándolas en espacios marginales y mercados secundarios, a la vez que reifican sus fronteras.

La cuestión de los derechos ciudadanos y la diferencia social ha constituido una dificultad para la teoría feminista. Iris Young (1989) ha sugerido que la democracia representativa debe tratar a las personas no como individuos sino como miembros de grupos. Sostiene que un discurso de ciudadanía universal que ignore estas diferencias sólo perpetuaría la dominación de grupos que ya son dominantes, y silenciaría a los grupos marginales y oprimidos. Por consiguiente, Young sugiere el establecimiento de mecanismos especiales para representar a tales grupos como grupos. Tal perspectiva, sin embargo, puede fácilmente caer en políticas que construyan a los grupos como homogéneos y con fronteras fijas, y donde los intereses de personas específicas dentro de los grupos sean construidos como representando los intereses y el progreso de todo el grupo específico.

Anne Phillips (1993) sostiene un enfoque alternativo. Mientras reconoce que las nociones de diferencia no pueden ser simplemente ignoradas, sugiere (siguiendo a Mary Dietz, 1987) que la participación en el terreno público político debería basarse en lo que ella llama la "transformación", ir más allá de la esfera inmediata de uno, antes que en la trascendencia. Lo primero, según ella, es enfatizar correctamente los límites de las identidades localizadas y específicas, en tanto que lo segundo implica seguir hasta el punto de abandonar todas las diferencias e inquietudes grupales. John Lechte (1994) inspirado por la teoría de Kristeva sobre la relación entre la semiótica y lo simbólico, postula que no puede afirmarse lo privado como el dominio de la diferencia y lo político público como una dualidad de opuestos sino como la primera siendo materialidad de la segunda, la cual le da su significado particular. En otras palabras, cada discusión de las diferencias individuales involucra ya al dominio público. La construcción de Young sobre grupos oprimidos no es más natural que cualquier otro discurso político y el proceso de transformación/trascendencia es inherente al acto de nombrar.

Las sugerencias de otras feministas y activistas que trataron de lidiar con la cuestión de los derechos de ciudadanía y diferencia social se enfocan de manera diferencial en lo social y en lo político. Correa & Petchesky (1994) sostienen que en lugar de abandonar el discurso de los derechos, debemos reconstruirlo de manera que exprese diferencias tales como género, clase, cultura y otras reconociendo, a la vez, las necesidades sociales. Los derechos sexuales y reproductivos (o cualquier otro), entendidos como "libertades" u "opciones" privadas, carecen de significado especialmente para los más pobres y desfavorecidos en tanto no posibilita las condiciones a través de las cuales puedan ser realizados.

La postura de Zilla Eisenstein para abordar las cuestiones de la diferencia es preguntarse si podemos construir "una comprensión de los derechos humanos que sea universal y a la vez específica" (1993). Su solución consiste en construir una mujer de color como norma alternativa, inclusiva de la del varón blanco. Aunque es más difícil prefiero su posición anterior, esto es, no podemos prescindir de la noción

de que los seres humanos tenemos algo en común, pero sí podemos y debemos seguir sin una norma unitaria de acuerdo a la cual todos seamos juzgados.

En vez de una norma unitaria dada, debe existir un proceso de construcción de ésta por parte de cada proyecto político específico. Feministas negras como Patricia Hill-Collins (1990) y feministas italianas como Raphaela Lambertini y Elizabetta Dominini (ver Yuval-Davis, 1994) se han enfocado en las políticas transversales de construcción de coaliciones, en las cuales la ubicación específica de los actores políticos es reconocida y considerada. Esta estrategia se basa en el reconocimiento epistemológico de que cada posición produce un conocimiento situado específico que no puede ser sino inacabado y, en consecuencia, deber darse el diálogo entre aquellos con posiciones distintas para llegar a una perspectiva común. El diálogo transversal debería basarse en el principio de centrarse en las propias experiencias personales al mismo tiempo que desarrollar empatía por las posiciones diferenciadas de los compañeros de diálogo, posibilitando de esta manera que los participantes arriben a una perspectiva distinta a aquella de la visión hegemónica de túnel. Los límites del diálogo deben estar determinados, como Hill-Collins argumentó (1990), por el mensaje antes que por los mensajeros. El resultado del diálogo podrá construir proyectos diferenciales para personas y grupos con posiciones distintas, pero su solidaridad estaría basada en un conocimiento común sostenido por un sistema de valores compatibles. Por ello, el diálogo nunca está circunscrito.

Desde luego, en la *política verdadera*, a diferencia de los movimientos sociales de base, con frecuencia no hay tiempo para un diálogo extensivo y continuo. Cuando la Unidad de las Mujeres en el GLC[2] trató de trabajar de esta manera a principios de la década de los ochenta, terminó ignorada completamente por las estructuras jerárquicas de toma de decisiones, las cuales trabajaban a un ritmo mucho más acelerado. Las políticas transversales no deben ser consideradas necesariamente opuestas al principio de delegación, por cuanto las delegadas políticas son vistas como defensoras, no como representativas, de categorías y grupos sociales específicos y de esta manera su mensaje es resultado de diálogos transversales.

Derechos y deberes de la ciudadanía

Las distintas definiciones de ciudadanía enfatizan que se trata de un proceso de doble vía que involucra obligaciones y derechos. En ocasiones, derechos y deberes pueden ser confundidos. Existen algunos estados, por ejemplo Egipto, donde votar es un deber ciudadano sólo de los hombres, mientras que las mujeres deben solicitar expresamente y por escrito este derecho, demostrando que son alfabetas. De no cumplir con tal deber pueden ser severamente multadas.

2. Greater London Council (Consejo del Gran Londres), autoridad local metropolitana que fue muy radical al comienzo de los años ochenta, razón por la cual Margaret Thatcher la desmanteló totalmente.

La defensa de la propia comunidad y del país han sido vistos como el máximo deber del ciudadano: morir (tanto como matar) por el bien de la patria o la nación (Yuval-Davis, 1985; 1991). Este deber ha dado lugar a que Kathleen Jones postule (1990) que el cuerpo es una dimensión significativa en la definición de la ciudadanía. Tradicionalmente, afirma, la ciudadanía ha estado vinculada a la capacidad de tomar parte en la lucha armada por la defensa nacional y esta capacidad ha sido considerada equivalente a la condición del varón, mientras que la condición femenina ha sido considerada equivalente a la debilidad y la necesidad de protección por parte del varón. Algunas organizaciones feministas (como NOW en los EE.UU., ANMLAE en Nicaragua y otras) han luchado por la inclusión de las mujeres en las fuerzas armadas en igualdad de condiciones que los hombres, argumentando que cuando las mujeres compartan con ellos el máximo deber de la ciudadanía –morir por su propio país– también serán capaces de obtener iguales derechos ciudadanos que los hombres.

Tal experiencia despierta un conjunto de serias disquisiciones sobre este tipo de argumento. En primer lugar, la experiencia de algunas de las mujeres que han debido dejar atrás bebés pequeños, demuestran que el lema feminista de igualdad de oportunidades para las mujeres puede ser empleado para crear mayores presiones en vez de proteger sus derechos. En segundo lugar, demuestra que las relaciones diferenciales de poder entre mujeres y hombres, incluyendo el asedio sexual, continúan al interior del terreno militar y, en consecuencia, no puede considerarse automáticamente a las mujeres como en un proceso de empoderamiento. En tercer lugar, este argumento ignora el contexto social y político general de las fuerzas armadas y su empleo.

Es probable que sea de mayor importancia para nuestro interés el hecho de que virtualmente ninguno de las soldados que lucharon en la Guerra del Golfo del lado de los aliados occidentales lo hiciera como parte del servicio nacional. Tanto mujeres como hombres eran soldados profesionales que veían en las fuerzas armadas su carrera profesional. He avanzado en la elaboración de este punto en otro documento (Yuval-Davis, 1991), pero la implicancia clara es que, en las prácticas de guerra moderna, luchar ya no es, con frecuencia, un deber ciudadano.

Originalmente, la ciudadanía ha sido condicionada por la posesión de propiedad y, por consiguiente, el deber universal ha sido el pago de impuestos. Con la expansión de la ciudadanía sobre las distintas clases, este deber está ahora condicionado al monto del ingreso que cada persona tiene y por lo tanto, una vez más, no puede ser visto como un derecho universal.

Para personas que carecen de propiedades, los ingresos se basan en el empleo. Carole Pateman (1989) apunta al hecho de que Marshall mencione "el derecho al empleo" como uno de los derechos ciudadanos, justamente en un momento en que los arquitectos del asistencialismo estaban proponiendo que los hombres fueran trabajadores proveedores y las mujeres esposas dependientes. Una lucha importante del movimiento feminista ha sido por igual pago e iguales oportunidades de empleo. A

pesar de ciertos logros en este campo, la brecha de género y de un mercado laboral segregado en su mayor parte se han mantenido. Las mujeres siguen siendo principalmente esposas y madres. Igualmente, grupos raciales y étnicos a menudo han tenido resultados poco exitosos en sus luchas contra la discriminación en el mercado laboral.

Por añadidura, se hizo evidente que las políticas de igualdad de oportunidades pueden ser efectivas sólo en relación a quienes han ingresado verdaderamente al mercado laboral. Meekosha señala un punto aún más fundamental, esto es, que la no calificación excluye muchas veces a las personas al no incorporarlas en el cuerpo de la ciudadanía.

Discusiones recientes sobre *trabajo por comida* como sustituto de *asistencia*, han usado el discurso de los deberes como una condición para los derechos ciudadanos y el *servicio comunitario* como una manera de que los *desposeídos* puedan cumplir con sus deberes. Muchas de las personas que apelan a este cambio expresan un sincero deseo por romper el círculo perpetuo de la dependencia, privación y alienación del asistencialismo. Sin embargo, el *trabajo por comida* –además de su naturaleza coercitiva y selectiva y de los efectos colaterales que puede suponer su ejecución para otros sectores del mercado laboral– cambia los supuestos primarios del debate sobre ciudadanía desde el terreno político al social, desde el empoderamiento personal y colectivo al coercitivo, esto es, al trabajo dependiente.

En suma, los derechos ciudadanos están anclados tanto en el dominio social como político. Sin *proporcionar* condiciones sociales que los posibiliten, los derechos políticos no existen. Al mismo tiempo, los derechos ciudadanos sin obligaciones configuran personas pasivas y dependientes. El deber ciudadano más importante es, por lo tanto, ejercer los derechos políticos y participar en la determinación de la trayectoria de sus colectividades, estados y sociedades.

Conclusión

El artículo discute algunos de los temas relevantes al desarrollo de una teoría de la ciudadanía que no solamente no sea sexista, racista ni sesgada hacia los valores occidentales, sino que también sea lo suficientemente flexible para lidiar con los cambios de largo alcance que tienen lugar en el (des)orden y reconstrucción del Estado y la sociedad. Tal teoría requiere desmantelar la identificación de lo privado con el dominio de la familia y lo político con el dominio de lo público. Se necesita construir ciudadanía a distintos niveles y separarla de una relación exclusiva con el Estado. Las variadas formas –sub, supra-nacional y a través del Estado– de las colectividades a las cuales las personas pertenecen, formal o informalmente como ciudadanos, generan diversas formas de relaciones cooperativas y conflictivas las cuales pueden determinar diferencialmente las posiciones y los accesos a los recursos de distintas personas en momentos diferentes.

Una vez que la noción de ciudadanía es comprendida como un concepto amplio más que como una relación entre individuo y Estado, se pueden también integrar las luchas de las mujeres en contra de la opresión y explotación dentro de sus propias comunidades locales y étnicas, y trascender el debate políticamente peligroso e intelectualmente estéril que ha tomado lugar en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Viena en 1993.

Como discuto en otro lugar (Yuval-Davis, 1997, cap.6), no hay un *fin de la historia* ni un *fin de la meta* para las luchas políticas. Las políticas transversales pueden ofrecernos un camino para el apoyo mutuo y probablemente una efectividad mayor en la continua lucha por una sociedad menos sexista, menos racista y más democrática y de intervención de la política, la economía y el medio ambiente en contextos continuamente en proceso de cambio, en los cuales vivimos y actuamos. La lucha por la ciudadanía debe comprometernos en nuestros hogares, en colectividades locales, étnicas y nacionales tanto como en nuestras luchas con las agencias del estado nacional e internacional. ¡Es toda una agenda!

Bibliografía

Ackelberg, Martha. 1995. Liberalism y Community Politics, ponencias inéditas escritas como versión preliminar para la *Encyclopedia of Women's Studies*, Simon and Shuster, de próxima aparición.

Allen, Sheila & Macey, Marie. 1990. At the Cutting Edge of Citizenship: Race & Ethnicity in Europe 1992. Documento presentado en la conferencia New Issues in Black Politics, University of Warwick, mayo.

Anderson, Ben. 1983. *Imagined Communities*. London: Verso.

Anthias, Floya & Yuval-Davis, Nira. 1989. Introduction. En: Nira Yuval-Davis & Floya Anthias, eds., *Woman-Nation-State*. London: Macmillan.

_____ . 1992. *Racialized Boundaries: Race, Nation, Gender, Colour & Class and the Anti-Racist Struggle*. London: Routledge.

Arendt, Hannah. 1951. *The Origins of Totalitarianism*. NY: Harcourt, Brace & Co.

Averini, S. & Shalit, A., eds. 1992. *Communitarianism & Individualism*. Oxford: Oxford University Press.

Bhabha, Jaacqqueline & Shuter, Sue. 1994. *Women's Movement: Women under Immigration. Nationality and Refugee Law*. Trentham Books, Stoke-on-Trent.

Bakan, Abigail B. & Stasiulis, Daiva. 1994. Foreign Domestic Worker Policy in Canada and the Social Boundaries of Modern Citizenship. *Science & Society*, vol. 58, N° 1, pp.7-33.

Barbalet, J.M. 1988. *Citizenship*. Bristol: Open University Press, Milton Keynes.

Beveridge, William. 1942. *Report on Social Insurance and Allied Services*. London: HMSO.

Biehl, Amy. 1994. Custom and Religion in a Non-racial, Non-sexist South Africa. *Women Against Fundamentalism Journal*, N° 5 pp.51-54.

Burney, Elizabeth. 1988. *Steps to Social Equality: Positive Action in a Negative Climate*. London: Runneymead Trust.

Cain, Harriet & Yuval-Davis, Nira. 1990. The Equal Opportunities Community and the Anti-Racist Struggle. *Critical Social Policy*, Autumn, N° 29, pp.5-26.

Chhachhi, Amrita. 1991. Forced Identities: the State, Communalism, Fundamentalism and Women India. En: D. Kandiyoti, ed., *Women, Islam & the State*. Macmillan, pp.144-175.

Correa, Sonia & Petchesky, Rosalind. 1994. Reproductive and Social Rights: a Feminist Perspective. En: G. Sen, A. Germain & L.C. Cohen, eds., *Population Policies Considered*. HCPD & IWHC, pp.107-126.

Daly. 1993. *Communitarianism: Belonging & Commitment in a Pluralist Democracy*. Wasworth Publishing Company.

Dean, Mitchel. 1992. Review Essay: Pateman's Dilemma: Women and Citizenship. *Theory and Society* N° 21, pp.121-130.

deLepervanche, Marie. 1980. From Race to Ethnicity. *Australian & New Zealand Journal of Sociology*, vol. 16, N° 1.

Dickanson, Olive. 1992. *Canada's First Nations*. Toronto: McClelland & Stanley.

Dietz, Mary G. 1987. Context is all: Feminism and Theories of Citizenship. *Daedalus*, 116, 4, pp. 1-24.

Edwards, J. 1988. Justice and the Bounds of Welfare. *Journal of Social Policy*, N° 18.

Eisenstein, Zillah R. 1989. *The Female Body and the Law*. Berkeley: University of California Press.

_____ . 1993. *The Color of Gender - Reimaging Democracy*. Berkeley: University of California Press.

Esping-Andersen, Gosta. 1990. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge: Polity Press.

Evans, David T. 1993. *Sexual Citizenship: the Material Construction of Sexualities*. London: Routledge.

Evans, Mary, ed. 1994. *The Woman Question*. Sage Publications.

Gordon, Paul. 1989. *Citizenship for Some? Race and Goverment Policy 1979-1989*. London: Runneymead Trust.

Grant, Rebecca & Newland, Kathleen, eds. 1991. *Gender and International Relations*. Bloomington: Indiana University Press.

Hall, Catherine. 1994. Rethinking Imperial Histories: The Reform Act of 1867. *New Left Review*, N° 208, pp. 3-29.

Hall, Stuart & Held, David. 1989. Citizens and Citizenship. En: Stuart Hall & Martin Jacques, ed., *New Times*. London: Lawrence and Wishart.

Harris, D. 1987. *Justifying State Welfare: The New Right v The Old Left*. Oxford: Basil Blackwell.

Hernes, Helga Maria. 1987. Women and the Welfare State: the Transition from Private to Public Dependence. En: A. Showstack Sassoon, ed., *Women and the State*, pp. 72-92. London: Hutchinson.

Hill-Collins, Patricia. 1990. *Black Feminist Thought*. Boston: Unwin Hyman.

Ignatieff, Michael. 1993. *Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalisms*. London: BBC and Chatto & Windus.

Jayasuriya, Laksiri. 1990. Multiculturalism, Citizenship and Welfare: New Directions for the 1990s. Presentado en el quincuagésimo aniversario de Lecture Series, Dept. of Social Work and Social Policy, University of Sydney.

Jones, Kathleen B. 1990. Citizenship in a Woman-Friendly Polity. *Signs*, 15, 4.

Joseph, Suad. 1993. Gender and Civil Society. *Middle East Report*, N° 183, pp.22-26.

Kandiyoti, Deniz. 1991. Identity and its Discontents: Women and the Nation. *Millennium*, vol. 20, N° 3 pp.429-444.

Kosmarskaya, Natalya. 1995. Women and Ethnicity in Former Day Russia - Thoughts on a Given Theme. En: H. Lutz, A. Phoenix & N. Yuval-Davis, eds., *Crossfires: Nationalism. Racism and Gender in Europe*. London: Pluto Press.

Kymlicka, Will. 1995. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Clarendon Press.

Lechte, John. 1994. Freedom, Community and Cultural Frontiers. Documento presentado en la conferencia Citizenship and Cultural Frontiers, Staffordshire University, Stoke-on-Trent, 16 de septiembre.

Lister, Ruth. 1990. *The Exclusive Society: Citizenship and the Poor*. London: Child Poverty Action Group.

Mann, Michael. 1987. Ruling Class Strategies and Citizenship. *Sociology*, N° 21 pp.339-354.

Marshall, T.H. 1950. *Citizenship and Social Class and Other Essays*. Cambridge: Cambridge University Press.

_____ . 1975 (ed. original 1965). *Social Policy in the Twentieth Century*. London: Hutchinson.

_____ . 1981. *The Right To Welfare and Other Essays*. London: Heinemann Educational Books.

Marx, Karl. 1975. On the Jewish Question. *Early Writings*, Penguin, pp. 211-242.

Meekosha, Helen & Dowse, Leanne. 1996. Enabling Citizenship. Gender, Disability and Citizenship, ponencia presentada en la conferencia Women, Citizenship and Difference, University of Greenwich, Londres, julio.

Molyneux, Maxine. 1994. Women's Rights and International Context: Some Reflections on the Post Communist States. *Millennium: Journal of International Studies*, vol. 23, N° 2.

Morris, Lydia. 1994. *Dangerous Classes: The Underclass and Social Citizenship*. Routledge.

Mouffe, Chantal. 1993. Liberal Socialism and Pluralism: Which Citizenship. En: J. Squires, ed., *Principled Positions*. London: Lawrence & Wishart.

Nimni, Ephraim. 1996. The Limits of Liberal Democracy, ponencia inédita presentada en el seminario departamental para Sociology Subject Groups de la Universidad de Greenwich, Londres.

O'Connor, Julia S. 1993. Gender, Class & Citizenship in the Comparative Analysis of Welfare State Regimes: Theoretical & Methodological Issues. *BJS*, vol.44 N° 3, pp.501-518.

Oldfield, Adrian. 1990. *Citizenship and Community: Civic Republicanism and the Modern World*. London: Routledge.

Oliver, Michael. 1995. *Understanding Disability: From Theory to Practice*. Macmillan, Basingstoke.

Orloff, Ann Shola. 1993. Gender & the Social Rights of Citizenship: the Comparative Analysis of Gender Relations and Welfare States. *American Sociological Review*, vol. 58, June, pp.303-328

Parekh, Bhiku. 1990. The Rushdie Affair and the British Press: Some Salutary Lessons. En: *Free Speech*, informe del seminario por CRE, London.

Pateman, Carole. 1988. *The Sexual Contract.* Cambridge: Polity Press.
_____ . 1989. *The Disorder of Women.* Cambridge: Polity Press.
Peled, Yoav. 1992. Ethnic Democracy and the Legal Construction of Citizenship: Arab Citizens of the Jewish State. *American Political Science Review*, vol. 86, N° 2, pp.432-442.
Pettman, Jan. 1992. *Living in the Margins: Racism, Sexism & Feminism in Australia.* Sidney, NSW: Allen & Unwin.
Phillips, Anne. 1993. *Democracy & Difference.* Cambridge: Polity Press.
Phillips, Melanie. 1990. Citizenship Sham in Our Secret Society. *The Guardian*, 14/9.
Roche, Maurice. 1987. Citizenship, Social Theory and Social Change. *Theory and Society*, N° 16, pp.363-99.
Sahgal, Gita & Yuval-Davis, Nira, eds. 1992. *Refusing Holy Orders: Women and Fundamentalism in Britain.* London: Virago.
Sandel, Michael J. 1982. *Liberalism and the Limits of Justice.* Cambridge: Cambridge University Press.
Shanin, Theodore. 1986. Soviet Concepts of Ethnicity: The Case of a Missing Term. *New Left Review*, N° 158, 113-22.
Showstack Sassoon, Anne, ed. 1987. *Women and the State - the Shifting Boundaries of Public and Private.* London: Hutchinson.
Smith, Anthony D. 1986. *The Ethnic Origins of Nations.* Oxford: Blackwell.
Soysal, Yasemin. 1994. *Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe.* University of Chicago Press.
Stasiulis, Daiva & Yuval-Davis, Nira, eds. 1995. *Unsettling Settler Societies: Articulations of Gender, Ethnicity, Race & Class.* London: Sage.
Turner, Brian. 1990. Outline of a Theory on Citizenship. *Sociology*, vol. 24 N° 2, pp.189-218.
Vogel, Ursula. 1989. Is Citizenship Gender Specific? Documento presentado en la conferencia anual de PSA. Abril.
Voronina, Olga A. 1994. Soviet Women and Politics: On the Brink of Change. En: B.J. Nelson & N. Chowdhury, *Women and Politics Worldwide*, pp.722-736. New Haven: Yale University Press.
Walby, Sylvia. 1994. Is Citizenship Gendered? *Sociology*, vol. 28 N° 2, pp.379-395.
Wilson, William J. 1987. *The Truly Disadvantaged.* Chicago: University of Chicago Press.
WING (Women, Immigration & Nationality Group). 1985. *Worlds Apart: Women under Immigration and Nationality Laws.* London: Pluto Press.
Young, Iris Marion. 1989. Polity and Group Difference: a Critique of the Ideal of Universal Citizenship. *Ethics*, 99.
Yuval-Davis, Nira & Anthias, Floya. 1989. *Woman-Nation-State.* London: Macmillan.
Yuval-Davis, Nira. 1985. Front & Rear: Sexual Divisions of Labour in the Israeli Military. *Feminist Studies*, vol.11, N° 3.
_____ . 1991. The Citizenship Debate: Women, Ethnic Processes and the State. *Feminist Review*, N° 39, pp.58-68.
_____ . 1991. The Gendered Gulf War: Women's Citizenship and Modern Warfare. En: Bresheeth, Haim & Yuval-Davis, Nira, *The Gulf War and the New World Order.* London: Zed Books.
_____ . 1992. Multi-Culturalism, Fundamentalism and Women. En: J. Donald & A. Rattansi, eds., *Race, Culture & Difference.* London: Sage Publications.
_____ . 1993. Gender and Nation. *Ethnic and Racial Studies*, vol. 16, N° 4, pp.621-632.
_____ . 1994. Women, Ethnicity & Empowerment. *Feminism and Psychology*, vol. 4(1), pp.179-197.
_____ . 1997. Colour, Culture and Anti-Racism. En: C. Lloyds, F. Anthias & N. Yuval-Davis, eds., *Rethinking Racism & Anti-Racism in Europe.* Macmillan.



UN DEBATE FEMINISTA EN CURSO

VIRGINIA VARGAS VALENTE

Este escrito es selectivo en tanto intenta abarcar algunos ejes básicos al debate: aquellos que, desde la perspectiva feminista, son significativos para orientar una discusión y reflexión sobre la forma de desarrollo y las contradicciones en el despliegue de las ciudadanías femeninas en la región.

Ciudadanía es un eje que concentra muchas de las tensiones del pensamiento político actual y de las reflexiones políticas feministas. Las tensiones entre la universalidad de los derechos y las diferencias y/o desigualdades para acceder a esa universalidad o, lo que es lo mismo, entre los derechos formales y los derechos sustantivos, entre el principio de igualdad y el derecho a la diferencia. Nos enfrenta también a definir si, en el intento de superar una ciudadanía restringida o pasiva para lograr una ciudadanía activa y plena, estamos poniendo como meta el modelo masculino de ciudadanía o adoptando una propuesta más flexible y subversiva, capaz de incorporar las múltiples dimensiones y derechos que las mujeres –y otros sectores excluidos– hemos conquistado, construido y ampliado en las últimas décadas.

EL CONTEXTO

La ciudadanía es un concepto y una práctica heterogénea cuyo contenido no puede estar desligado de las condiciones históricas y actuales de nuestra región. Como señala Calderón, los desiguales procesos de modernización y de expansión del proyecto cultural de la modernidad se desarrollaron en forma inconclusa y excluyente, sobre la base de sociedades multiculturales y pluriétnicas, conteniendo grandes diferencias socioeconómicas. Ello ha generado un producto particular donde conviven procesos múltiples, algunos completando la modernidad, otros manteniendo la premodernidad y algunos otros desarrollando la confusa postmodernidad.

Estos tiempos mixtos, que contienen sus propias exclusiones y subordinaciones, han tenido un peso fundamental en la cultura política del continente y en el imaginario ciudadano. Sin embargo, algunos fenómenos sociopolíticos y económicos han dado un terreno más propicio para el despliegue de los intereses ciudadanos de las mujeres. Entre ellos, el más significativo es el proceso de globalización que ha desencadenado múltiples fenómenos, con efectos ambivalentes. Son evidentes sus alarmantes consecuencias en el plano económico al desproteger a los ciudadanos, generar mayor exclusión social a todos los niveles y, en otro plano, al debilitar al Estado como ente direccional de la sociedad. Pero es evidente también que este mismo proceso ha permitido desplegar una inédita y rica dinámica de conexión y articulación de lo local con lo global y, viceversa, al ampliar los contenidos de las sociedades civiles nacionales e internacionales así como las bases ciudadanas para hombres y mujeres.

En el caso de las mujeres, los efectos de la globalización han acentuado lo que Giddens llama la tendencia al "de-tradicionalismo". Este término alude al divorcio del histórico matrimonio entre modernización y tradicionalismo, a la forma en que el proceso de globalización engulle y desarticula costumbres y tradiciones arcaicas y antidemocráticas. Un ejemplo de ello son los cambios en la relación entre los sexos y los valores familiares, que han producido la posibilidad de una mayor autonomía de las mujeres en relación a su entorno familiar. Las mujeres, dice Giddens, ya no son simplemente mujeres, sino que tienen que decidir qué quieren ser, evidenciando así el hecho que la identidad de género no es algo prescrito, sino algo que debemos y podemos definir. La posibilidad de un pensamiento autónomo, que reconozca sus derechos, queda más abierta para muchas mujeres al transformar dramáticamente su horizonte referencial.

El énfasis en los derechos sociales no ha sido resultado de la riqueza existente sino de la pobreza. Un cierto nivel de pobreza no extrema (la extrema pobreza es paralizante y neutralizante de todos los elementos dinámicos que llevan a la búsqueda de algunas soluciones parciales) ha impulsado, en la región, el desarrollo de un significativo movimiento de mujeres alrededor de las tareas de subsistencia, acercando a miles de ellas, por primera vez, a la noción de derechos y a la posibilidad ciudadana. La organización alrededor del consumo (precario) potenció la posibilidad de percibirse como merecedoras de ciertos niveles de ciudadanía social, en forma colectiva, exigiendo también a los gobiernos reconocimiento colectivo.

En los años noventa no sólo se modificaron el espacio y el contexto de actuación del movimiento, sino también las dinámicas y los horizontes de la acción. Se entra a un período de mayor incertidumbre y donde el movimiento se hace más reflexivo y más anclado en una utopía realista; también más fragmentado o con articulaciones más espaciadas y con temáticas mucho más diversas. Uno de los cambios significativos ha sido la modificación de una postura antiestatista. Se pasa desde una

autonomía más bien defensiva y una lógica y dinámica de confrontación, que habían sido características en la década anterior, hacia una lógica de negociación y de autonomía dialogante y propositiva. Como señala Anne Phillips, el movimiento estaría más orientado hacia el nivel macro, apuntando y apostando a la membresía de las mujeres en la comunidad política, explorando asuntos de inclusión y exclusión que conduzcan a la construcción de ciudadanías amplias, enriquecedoras de la democracia.

La ciudadanía aparece, hoy por hoy, como terreno de disputa por su carácter restringido, parcial, excluyente, así como por los intentos de las y los excluidos de presionar y negociar la inclusión. Al hacerlo, parecería que están recalificando y democratizando el contenido de esa inclusión.

Perspectivas y dimensiones

A la ciudadanía la podemos analizar desde diferentes perspectivas y desde diferentes dimensiones o ejes y, en cada uno de ellos, podemos rastrear y evidenciar las dinámicas de exclusión e inclusión en relación a la construcción de las ciudadanías femeninas. Perspectivas y dimensiones constituyen categorías sustantivas como forma de aproximarse a las ciudadanías *realmente existentes.*

La perspectiva histórica permite analizar cómo se ha formado la ciudadanía y cómo surgen los individuos o las personas con derechos, en qué condiciones económicas, sociales y políticas y con qué estrategias de formación ciudadana. Un análisis de este tipo permitirá analizar cómo las mujeres no han sido, ni todas, ni totalmente excluidas de la historia ciudadana. No sólo porque algunas obtuvieron algunos derechos ciudadanos antes que otros (mujeres alfabetas versus analfabetas), sino también porque una ciudadanía femenina dependiente fue absolutamente necesaria en los orígenes para la construcción de la ciudadanía y la cultura ciudadana hegemonizada por los hombres: por ejemplo, a través de la norma del salario familiar. Nos permite analizar también si, dentro de la historia de los derechos ciudadanos femeninos fue el voto y/o el acceso a la educación y/o el acceso a los métodos anticonceptivos (que, según Simone de Beauvoir, permitieron acabar con el "fatalismo fisiológico") los que impulsaron con más fuerza la conciencia ciudadana en las mujeres.

Esta *evolución* y construcción de las diferentes dimensiones de la ciudadanía no es lineal ni apunta en una sola dirección. Es un proceso que contiene "fracturas, retrocesos y recuperaciones de contenidos perdidos... permeando sus contenidos y calificándolos... La ciudadanía es una renovada y nunca acabada construcción sociocultural" (Calderón). Por ejemplo, los derechos políticos adquieren un nuevo valor después de las experiencias dictatoriales de la región.

La perspectiva estructural nos permite analizar cómo es la ciudadanía, qué rasgos la caracterizan, cuál es su consistencia ciudadana. Es decir, en qué condiciones

de igualdad o desigualdad se accede a todos los derechos civiles, sociales y políticos, quiénes lo pueden hacer más fácilmente que otros y cuáles son las dimensiones ciudadanas que están más desarrolladas en una misma persona o grupos de personas. En el caso de las mujeres, este análisis nos permitirá examinar las brechas o distancias ciudadanas que existen tanto de las mujeres en relación a los hombres como de las mujeres entre sí, y de grupos específicos de mujeres con grupos específicos de hombres en condiciones geográfico-culturales, socioeconómicas y políticas específicas.

En base a estas dos entradas, histórica y estructural, podemos desarrollar una perspectiva comparada, la cual permite analizar cómo se ha formado la ciudadanía en diferentes lugares. Por ejemplo, las tipologías ciudadanas de América Latina en relación a Europa, Asia, Africa, o, en América Latina misma, entre áreas andinas versus el Cono Sur o de éstas con otros países del Tercer Mundo.

En cuanto a las dimensiones de análisis de ciudadanía, cabe señalar que las dinámicas subjetivo-objetivo, activo-pasivo, así como la de exclusión-inclusión, no son polaridades tajantes sino procesos con un cierto nivel de continuidad.

La dimensión objetiva-subjetiva está referida tanto a la existencia real de derechos y responsabilidades, como al grado de conocimiento que las personas tienen sobre sus derechos, responsabilidades, garantías, sistemas de pertenencia a una comunidad política, actitud frente a ella, temores, aspiraciones, percepciones. Tiene que ver indudablemente con las barreras reales e imaginarias que las personas viven y perciben en relación a su ciudadanía. Hay barreras objetivas evidentes para las mujeres (como el trabajo doméstico, o el trabajo familiar no remunerado), así como las diferentes formas de discriminación social en relación al sexo, la etnia u otros.

La dimensión subjetiva de ciudadanía es de importancia fundamental, pues la relación que las mujeres establecemos con nuestra ciudadanía se sustenta en un reconocimiento parcial de derechos merecidos y una débil conciencia del derecho a tener derechos ciudadanos.

La dimensión objetiva, dada en parte por el análisis estructural, es importante pero no decisoria en tanto la visión subjetiva puede trascender ese contenido estructural al sentirse merecedora de más derechos o puede inhibirse incluso frente a lo ya establecido o conquistado y no exigirla como propia. O bien, exigirla para determinados derechos ciudadanos y no para otros.

La dimensión activa o pasiva de la ciudadanía está relacionada también con la dinámica de derechos y responsabilidades que los ciudadanos tienen con la comunidad política a la que pertenecen. Se ha tendido a ver la ciudadanía activa como la capacidad de juicio independiente, de participación frente a los asuntos públicos, de compromiso activo en la deliberación de los temas que afectan a la comunidad política. Y se ha tendido a ver al ciudadano pasivo como sujeto de derechos, protegido por el Estado y sin ningún papel real como sujeto político. La ciudadanía activa se expresa, a nivel individual, como participación; a nivel social como responsabilidad,

solidaridad, cooperación en la esfera público-social; a nivel político, como exigencias de fiscalización y rendición de cuentas de lo público-político.

Sin embargo, muchas teóricas feministas asumen que, dada la desigual posibilidad de desarrollo de las ciudadanías de las mujeres, el énfasis inicial debería estar en los derechos, no en las responsabilidades. Al decir de Moller Okin: "Dada la dificultad de combinar responsabilidades familiares y públicas, igual ciudadanía para mujeres es imposible hasta que las expectativas de trabajo y de profesión sean modificadas y hasta que los hombres acepten su participación en las responsabilidades". Kymlicka, por su parte, argumenta que se necesita una mayor y más sutil comprensión y práctica de la ciudadanía. Una ciudadanía que vaya más allá del propio interés personal para abrirse al interés colectivo sobre la base de determinadas *virtudes* cívicas, como es un sentido de justicia y de responsabilidad.

Para las mujeres, ampliar y complejizar sus derechos ciudadanos va, en muchos casos, de la mano con asumir responsabilidad aumentando así sus espacios de autonomía. Asumiendo una ciudadanía activa, asumimos responsabilidad sobre sus contenidos, significados, ampliaciones.

Si bien todas las personas comparten cierta forma de ciudadanía a nivel de derechos y obligaciones, no todas pueden participar activamente en la solución de los temas que "afectan a la comunidad política" y menos en sus niveles de decisión. Un conjunto de restricciones y exclusiones tienen que ver tanto con las diversidades como con las especificidades dentro de estas diversidades. Algunas autoras nos hablan de sectores especialmente debilitados para ejercer activamente su condición ciudadana, por ejemplo: los negros, los indígenas, las madres solteras.

Los intentos de los sectores más conservadores de igualar la participación ciudadana –o la ciudadanía activa– con el éxito empresarial, con el consumo, con la participación "voluntaria de los que tienen tiempo y dinero en exceso", es riesgosa. Aquí es importante precisar que si bien la ciudadanía social ha sido en la región un motor fundamental del desarrollo ciudadano, a diferencia de Europa donde se dio desde lo civil, la perspectiva neoliberal de la ciudadanía social y de los aspectos económicos de la ciudadanía civil es altamente problemática. Sin desconocer la importancia de la dimensión del consumo en la formación y en el ejercicio ciudadano, especialmente en el caso de las mujeres (reclamo de derechos a un buen servicio, a buena información, a un buen producto), la incorporación de los ciudadanos a través del consumo y de los bienes pone una seria limitación al desarrollo real e ideológico de la ciudadanía social.

Y acá viene un interesante acercamiento de Fraser y Gordon. Consideran que ideológicamente se ha impuesto un modelo dicotómico en las relaciones humanas, marcado por la oposición contrato versus caridad. En su recuento histórico, asumen que los derechos civiles, en vez de producir igualdad, produjeron desigualdad en la medida que implicaban básicamente derechos de propiedad, de compraventa, entre

otros. En lo público las relaciones se articularon alrededor del contrato, y en la esfera doméstica, alrededor de los recursos más abundantes "que parecían ser los sentimientos", quedando totalmente fuera el circuito del intercambio. La protección de la comunidad frente a los sectores más desposeídos y no ciudadanos se debilitó. Y los desposeídos fueron ayudados por la caridad, y aparecieron recibiendo no derechos sino un "donativo puro, unilateral, al que el receptor no tiene ningún derecho y al que el donante no está obligado. Los pobres aparecen como ciudadanos pasivos que no exigen sino que reciben por buena voluntad, acercándose así peligrosamente a cambiar los derechos por caridades".

En el siglo XX, Marshall asumió que las incongruencias de la ciudadanía civil podían ser superadas por el reconocimiento de la dimensión social de la ciudadanía, la que debería ofrecer un mínimo social básico que permitiera a todos tener acceso igual al necesario bienestar económico, cerrando así las brechas entre igualdad política y desigualdad económica y social.

Sin embargo, dentro de los esquemas liberales y neoliberales, los derechos sociales son sacados de la esfera pública. Para los más desposeídos económicamente, son asumidos no como derechos sociales sino nuevamente como caridad, en la medida que su consecución es vista como producto de la buena voluntad de los gobernantes o de las organizaciones internacionales. El tema fundamental que queda planteado para nuestra región es el de la relación no ya entre derechos civiles, sociales y políticos, sino entre ciudadanía y pobreza y las estrategias necesarias para desarrollar, en las mujeres, una noción de ciudadanía a la cual nos acercamos como algo que nos pertenece por derecho, no por caridad.

Así, si la desigualdad no había aparecido como necesariamente contradictoria con los derechos ciudadanos, esta relación varía y se vuelve determinante cuando esta desigualdad se expresa en pobreza y más aún, en pobreza extrema. Y esta determinación se agrava al combinarse y superponerse a todas las otras dimensiones e identidades étnicas, raciales, de género, de edad, de zona de residencia, de acceso a servicios, entre otras. El surgimiento de una dimensión de igualdad desde donde afirmar la ciudadanía femenina como un derecho puede darse no sólo desde la dimensión de género sino, como dice Mouffe, desde otras muchas dimensiones: aquellas que sean especialmente sensibles y flexibles en un momento determinado.

Pero los asuntos de exclusión-inclusión tienen que ser analizados, a la vez, tomando en consideración las formas en que las mujeres son incluidas en lo público. Valcarcel señala tres rasgos que caracterizan esta inclusión o, dicho de otro modo, rasgos que las mujeres deben detentar para actuar en el espacio legítimo de la política, esto es: sin la completa investidura (sus decisiones son además refutables); con la exigencia de los tres votos clásicos de pobreza, obediencia y castidad y, finalmente, portando dos virtudes clásicas del sexo femenino como son fidelidad y abnegación.

Es importante también reconocer que las ciudadanías se desarrollan en forma

diferente de acuerdo al régimen político imperante. Si bien la democracia es el terreno por excelencia para construir y alcanzar ciudadanías plenas, no hay una relación directa entre democracia y ciudadanía. El desarrollo y expansión de los derechos ciudadanos puede darse por decisión de las elites dominantes (desde arriba), o por presión (desde abajo) o por combinación de ambas dinámicas. Ello se relaciona con la mayor o menor construcción de espacios públicos de cada una de estas incursiones ciudadanas: desde arriba o desde abajo, con amplia construcción de espacios públicos, y desde arriba o desde abajo, con poco espacio público, según la tipología de Turner. Es decir, puede haber estrategias de construcción ciudadana que asuman una perspectiva de liberalización sin democracia o de liberalización democrática.

Finalmente, se asume que las ciudadanías restringidas orientan su lucha hacia una ciudadania plena, la cual aparece más bien como un imaginario a alcanzar en conjunto con las demás expresiones democráticas de la sociedad civil. Es importante, sin embargo, recordar que esta aspiración a ciudadanías plenas está en referencia a un momento histórico determinado, esto es, a los derechos ciudadanos que gozan los más privilegiados y a las garantías de los derechos que los sectores con ciudadanías restringidas van conquistando, descubriendo, incorporando y ejercitando. En este sentido, las ciudadanías siempre van a ser restringidas porque casi nunca las garantías anteceden a los derechos descubiertos y exigidos.

Si la ciudadanía conlleva la membresía a una comunidad, su análisis, dice Held, implica examinar la manera en que los diferentes grupos, clases, movimientos han peleado para ganar grados de autonomía y control sobre sus vidas frente a las varias formas de estratificación, jerarquía y opresión política. Así, diferentes movimientos sociales han levantado distintos puntos acerca de la naturaleza y dimensiones de la ciudadanía, ampliando sus límites reales o imaginarios. En el caso de las mujeres, desde el derecho a propiedad, pasando por su libertad en relación al matrimonio, hasta los derechos reproductivos y sexuales.

Ciudadanía y diversidad

Es evidente en todas las diferentes teorías feministas su crítica a la pretendida universalidad del pensamiento político y de la construcción ciudadana. Esta universalidad ha invisibilizado a las mujeres y a todos los demás sectores excluidos del modelo cultural hegemónico (hombre, blanco y trabajador). Muchas de las concepciones ciudadanas prevalecientes, si bien tienden a reconocer la diversidad, no asumen la dimensión de desigualdad que esta diversidad ha conllevado y conlleva aún. Esta desigualdad ha sido intrínseca al desarrollo de las ciudadanías modernas, pues su surgimiento se dio en condiciones de profunda inequidad al tratar a los diferentes como desiguales. Las dimensiones culturales de la ciudadanía, aportadas posteriormente por Turner, amplían los contenidos ciudadanos pero mantienen las mismas

limitaciones anteriores cuyo resultado es la exclusión –a pesar de poseer derechos comunes– no sólo en sus estatus socioeconómicos sino también en sus identidades socioculturales.

Y es que la igualdad política universal, en teoría y en abstracción, puede acomodarse muy fácilmente a las desigualdades estructurales en la distribución de la riqueza y el poder y esto, a su vez, puede socavar sistemáticamente cualquier igualdad formal de derechos (Phillips).

Frente a estas constataciones, se levanta una de las tensiones teóricas más significativas que se resume en dos posturas básicas con muchas variaciones intermedias. Si se mantiene un modelo neutral desde la perspectiva de género, asumiendo una ciudadanía común y un espacio público unitario, o si se reconoce una identidad particular de las mujeres a ser reconocida por un espacio público diferenciado. Es el famoso dilema de Wollstonecraft, recordado por Pateman: "exigir igualdad es aceptar la concepción patriarcal de la ciudadanía, la cual implica que las mujeres deben parecerse a los hombres, mientras que insistir en los atributos, las capacidades y actividades distintivas de las mujeres, y que a éstos se les dé expresión y sean valorados como forjadores de ciudadanía es pedir lo imposible, puesto que tal diferencia es precisamente lo que la ciudadanía patriarcal excluye".

Esta disyuntiva contiene –pero va más allá– la antigua tensión entre feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia. O mejor dicho, adquiere nueva vigencia y nuevos argumentos al relacionarla con la definición de la competencia del dominio ciudadano y con la definición de lo político.

En lo que sigue trataré de avanzar sólo algunos de los argumentos más significativos sobre construcción y concepción ciudadanas que tratan de responder a esta tensión, desde aquellas posiciones que asumen la diferencia como eje de su propuesta ciudadana y aquellas que, reconociéndola, optan por una entrada no genérica a la ciudadanía.

Desde la perspectiva feminista, dos aproximaciones problemáticas –la liberal y la comunitaria– y dos paradigmas –el de la igualdad y el de la diferencia– han estado presentes en los abordajes sobre ciudadanía y diversidad.

En cuanto a las aproximaciones problemáticas tenemos, en primer lugar, la perspectiva liberal. Según algunas teóricas feministas como Yuval-Davis, este enfoque es problemático porque "atenta con hacer invisibles todos los accesos diferenciados al Estado" que existen entre la gente a raíz de esas diferencias. Esta noción naturaliza a la gente hegemónica que tiene derechos y hace a los otros invisibles. Para otras autoras, como Phillips, el feminismo tiene más que ganar con la perspectiva liberal de la ciudadanía.

En segundo lugar, la aproximación comunitaria, y en parte también el *republicanismo cívico*, asume que los individuos son construidos por sus comunidades, su pertenencia a categorías sociales. Por ello, incluso habiendo derechos forma-

les para todos, el acceso al Estado se mantiene diferenciado. Es su membresía a categorías sociales o colectividades específicas la que determina sus derechos y no la existencia de individuos atomizados y aislados. Como señala Kymlicka, justamente en la existencia de "organizaciones voluntarias de la sociedad civil, iglesias, familias, uniones, asociaciones étnicas, cooperativas, grupos ambientalistas, asociaciones vecinales, grupos de apoyo a mujeres, centros de caridad" es donde se pueden aprender las virtudes de obligación mutua que frenen el individualismo liberal. Sin embargo, para las mujeres puede ser problemático en tanto muchas de estas asociaciones contienen como rasgo la exclusión y discriminación de las mujeres. Por ejemplo la familia, dice Kymlicka, "es frecuentemente una escuela de 'despotismo' que enseña dominio masculino sobre las mujeres; las iglesias enseñan respeto a la autoridad e intolerancia hacia otras creencias, etc., en vez de virtudes y responsabilidades cívicas".

Los dos paradigmas, que están presentes de alguna forma en las diferentes posiciones de la teoría feminista sobre ciudadanía, son resumidos por Seyla Benhabib de la siguiente manera: "... si las mujeres como sujetos sociales y políticos son portadores de un conjunto de valores diferentes y distintivos... que deberían promover y por los que deberían luchar en la esfera pública, o si las mujeres deberían luchar por el poder y la igualdad movilizando los recursos existentes y las instituciones disponibles en la sociedad en su conjunto" o, lo que es lo mismo, preservar una esfera separada de mujeres versus convertirse en miembros plenos de la sociedad existente, abandonando los espacios tradicionales de las mujeres.

Un primer grupo de posiciones las encontramos en autoras como Gilligan –ética del cuidado– y Elshtain y Rudick –feminismo de familia–. Esta línea de pensamiento propone el cambio de una ética de justicia considerada masculina y liberal hacia una ética del cuidado, impulsando la inclusión de la experiencia de las mujeres como mujeres en la definición y construcción ciudadana, al mismo tiempo que privilegia la identidad de las mujeres como madres y el ámbito familiar como el espacio donde buscar un nuevo modelo de acción ciudadana sustentado en el amor, la entrega, la amistad. Se desarrolla así una noción maternalista de ciudadanía cuyos atributos de preocupación y cuidado por el otro/a pueden y deben ser trasladados a la vida pública. La maternidad aparece como la base de una política de compasión que puede reconstruir la escena pública, con nuevos valores sustentados en la idea del cuidado hacia otros, en la medida que las madres nunca anteponen sus intereses a los de su prole.

El mérito de estas posiciones, según Dietz, es justamente el haber sido el primero de los feminismos que comenzó a preocuparse por el significado de la ciudadanía y de la conciencia política. Hay sin embargo algo *muy perturbador* en estas concepciones ciudadanas, al asumir la superioridad de una de las partes (las mujeres en relación a los hombres) y que lleva a levantar un *reino de mujeres* antes que una propuesta de modificación de la cultura política para todas y todos. Es por ello que

estas posiciones han sido criticadas por *esencialistas*, al pretender una identidad femenina *buena* y sustentada en una relación desigual y por lo tanto no democrática, ya sea al interior de la familia o en la misma relación madre-hijo-hija. Por otra parte, continúa Dietz, "un despotismo ilustrado, un Estado de bienestar social, una burocracia de partido único y una república democrática pueden todos respetar a las madres, proteger las vidas de los niños y demostrar compasión por los vulnerables". Es decir, ser buena madre no determina la capacidad de ser buena ciudadana, pues las virtudes maternales no pueden ser políticas porque emergen de una relación desigual, íntima y particular, entre madres e hijos-hijas.

Carole Pateman tiene un aporte significativo al señalar cómo las diferencias sexuales han diseñado unas diferencias políticas plasmadas en las teorías clásicas del contrato social, así como la distinción público-privado ha constituido física y simbólicamente una expresión y reproducción de la demarcación genérica que elimina los temas considerados privados de la discusión en lo público. Con mayor sofisticación que las maternalistas, asume que la ciudadanía es una categoría patriarcal que ha sido constituida no en base a las tareas y cualidades de las mujeres sino a partir de los atributos, capacidades, actividades de los hombres. En este arreglo, las mujeres son percibidas como hombres menores. De allí que insistir en la igualdad es aceptar la concepción patriarcal de la ciudadanía. Frente a esta realidad, Pateman plantea la necesidad de una ciudadanía sexualmente diferenciada, que permita dar significado político a esa capacidad que los hombres no tienen: la de procrear y que, al mismo tiempo, incluya a las mujeres como tales con la misma relevancia política que los hombres, en un contexto de igualdad.

El enfoque de los *nuevos comunitaristas* asume una visión crítica respecto a los efectos destructivos del individualismo, el mercado, la descomposición y fragmentación social. Para evitarlo, enfatizan el principio de la comunidad en vez del individual, poniendo énfasis más en las responsabilidades que en los derechos. Este enfoque tiene varias ventajas, al reconocer derechos y deberes determinados no sólo por el Estado sino por comunidades, sub, supra e inter Estados. Por lo tanto nos permite no sólo ver la multiplicidad de interconexiones entre diferentes colectividades y el Estado, sino que también nos obliga a examinar la relación entre la comunidad, complejizando la relación Estado-Nación (Yuval-Davis).

Sin embargo, su visión acrítica de la comunidad como una realidad homogénea puede asociarse fácilmente a una moral conservadora tradicional, al subsumir, aceptar o rechazar las diversidades y diferencias en relación al *bien de la comunidad*. La posibilidad de intolerancia hacia las diferencias y hacia las mujeres es grande al insistir en los roles convencionales de madres y cuidadoras. Los intereses de las mujeres están, de esta forma, subordinados a la colectividad más amplia.

La crítica de Yuval-Davis es más cercana a la concepción comunitaria pero, al mismo tiempo, más compleja y más política. Define la ciudadanía en relación a polí-

ticas y no a Estados, en la medida que el Estado es sólo una de las formas políticas con las que la gente está de alguna manera involucrada. La ciudadanía es una construcción múltiple y todos somos ciudadanos, pero el reto es cómo desarrollamos teoría feminista sobre la ciudadanía que sea "sensible no sólo al posicionamiento específico de las mujeres en la sociedad, sino también a las diferencias entre las mujeres, en base a su sexualidad, edad, estadio de ciclo de vida, clase, capacidad, etc.", puntualiza Yuval-Davis.

En una corriente diferente, que reconoce también la centralidad de lo político en la definición ciudadana, la propuesta de Iris Marion Young se ubica en la corriente *pluralista cultural*. Ante el sentimiento de exclusión que muchos grupos experimentan en relación a una *cultura común* y hegemónicamente masculina, los *pluralistas culturales* sostienen que esa cultura común o esos derechos comunes no integran las necesidades de estos grupos, pues son definidas originariamente por y para hombres blancos. Young, reconociendo la naturaleza específica de la ciudadanía –como propia del espacio de la política– afirma, sin embargo, que cuando la sociedad es altamente diferenciada, también lo debe ser la ciudadanía. Así, la ciudadanía debe tomar en cuenta las diferencias, las que deben ser expresadas en el ámbito público como identidades grupales y no individuales. Sostiene que la única forma en que las mujeres y los demás grupos excluidos se sientan parte de esa cultura común es a través de lo que ella llama una "ciudadanía diferenciada". Esta propuesta no constituye necesariamente una política de *enclave* en tanto postula la necesidad de organizarse políticamente en torno a grupos de interés para, desde allí, interactuar con los otros grupos de interés, con la sociedad y con el Estado. Es decir, propone derechos universales pero organizados desde la diferencia. Un público *heterogéneo*, formado por grupos de interés, puede trabajar en conjunto reteniendo sus identidades y no ser engullidos por un enfoque *unificador*.

Las críticas a esta posición resaltan el riesgo que ello aliente a los grupos o a las diferentes identidades diferenciadas a volcarse hacia adentro y centrarse en su diferencia, lo cual redundaría en una política corporativista y esencialista. La ciudadanía se podría convertir en una política de *queja* o victimización y dejaría de ser un mecanismo para impulsar un sentido de comunidad, pues nada vincularía a los diferentes grupos ni evitaría que la desconfianza mutua o el conflicto se expandieran.

Con mayores o menores variaciones, algunas autoras como Dietz, Phillips, Mouffe, y Fraser y Gordon –con un énfasis mayor en la ciudadanía social y sus interrelaciones con el conjunto de la ciudadanía– expresan una noción de ciudadanía genéricamente neutral, criticando el pensamiento maternal en tanto se acerca a posiciones esencialistas. Utilizan el concepto de ciudadanía social, destacan la centralidad de la interdependencia de la ciudadanía social y política, y llaman a expandir la participación democrática en el espacio de las políticas sociales, donde un número mayor de mujeres está presente.

Para Mary Dietz, la democratización de la política implica más que políticas de grupos de interés y/o de políticas alrededor de una sola problemática. Recuerda que el feminismo es más que una causa política-social. Es un movimiento político con características particulares, animado por prácticas y formas de organización democrática compatibles con la idea de una ciudadanía potencialmente colectiva y democrática a escala amplia. Las feministas, dice Dietz, deben transformar esas prácticas democráticas en una teoría de la ciudadanía que sea comprensiva. Ello no implica caer en el "mujerismo" que aludiría a "una naturaleza democrática superior en las mujeres", y/o a centrarse sólo en "asuntos de mujeres". Lo importante es defender políticamente la teoría de la ciudadanía democrática no sólo en el propio territorio, sino también en todos los otros territorios, masculinos y femeninos. Es así como "únicamente cuando emprendan el logro de esos intereses sociales y económicos mediante su incorporación activa como ciudadanas en el mundo público, y cuando declaren que la actividad de la ciudadanía es un valor, las feministas podrán reclamar como propia una política realmente liberadora".

Por su parte, Anne Phillips reclama el contenido político por excelencia de la ciudadanía. Sugiere que el énfasis en la ciudadanía está abriendo una nueva dirección en la política y en la práctica feminista, al acentuar los derechos y responsabilidades más que las diferencias. De allí surge la tarea de asegurar que ningún grupo sea excluido en virtud de sus peculiaridades y posiciones múltiples. Cuando somos llamadas a actuar como ciudadanas, no estamos actuando sólo como mujeres, trabajadoras u otras afiliaciones, aunque éstas sean poderosas. La ciudadanía es asumida acá como el criterio homogeneizador con el resto de la sociedad. La ciudadanía, concluye, restaura la importancia de la actividad política ayudando a mirar nuevamente la relación entre lo político, lo económico y lo social.

Por su lado Chantal Mouffe, rechazando el universalismo y la homogeneización que relega todas las particularidades a la esfera privada y sin desconocer que tratar a mujeres y hombres igualitariamente puede implicar tratarlos diferencialmente, argumenta que en lo político y por lo tanto en la ciudadanía, la diferencia sexual no debe ser pertinente. Las limitaciones a la concepción moderna de ciudadanía no se van a superar por el hecho de incorporar la diferencia sexual como una dimensión relevante. Ello es posible, indica, si reconocemos que cada agente social está inscrito en una multiplicidad de relaciones sociales y que cada una de estas relaciones específicas no pueden ser reducidas ni añadidas a las otras.

Cada una de estas especificidades determinan diferentes subjetividades e intereses, construyendo y aceptando diferentes discursos entendidos también como prácticas sociales. Estos discursos pueden estar en contradicción entre ellos y dentro de ellos. Las personas pueden tener una perspectiva democrática en algunas posiciones subjetivas y no en otras. La clase obrera, por ejemplo, puede tener una posición subjetiva democrática en su identidad como trabajador, pero una perspectiva profunda-

mente antidemocrática en su identidad de género. Es importante señalar, sin embargo, que el surgimiento de una dimensión de igualdad en algunas de las posiciones subjetivas puede extenderse o generalizarse a las otras. Lo que no ocurre de una vez y para siempre, puesto que las subjetividades no son fijas y permanentes en el tiempo.

En otras palabras, las mujeres pueden llegar a vislumbrar su especificidad de género y sus intereses políticos, sociales y personales a través de sus múltiples relaciones sociales porque algunas de sus subjetividades –y no sólo la de género– puede contener, en determinados momentos, mayor flexibilidad y fuerza para impulsar procesos de cuestionamiento y movilización alrededor de algunos aspectos de sus subordinaciones. Mouffe apuesta a la construcción de una alternativa democrática cuyo objetivo sea la articulación de distintas luchas ligadas a diferentes formas de opresión.

En esta perspectiva, todo el falso dilema de la igualdad versus la diferencia se derrumba desde el punto en que ya no tenemos una identidad homogénea *mujer* enfrentada a otra identidad homogénea *varón*, sino una multiplicidad de relaciones sociales en las cuales la diferencia sexual está siempre en proceso de construcción de muy diversos modos. "Una vez que las identidades son puestas en cuestión, la pregunta sobre si tienen que ser idénticas a los hombres para ser reconocidas como iguales o la de si tienen que afirmar su diferencia al costo de la igualdad, aparece sin sentido" (Beltrán y Sánchez).

Estas diferentes reflexiones y enfoques complejizan y aportan a una teoría de la ciudadanía que responda a las incongruencias, carencias y debilidades en su concepción y práctica ciudadana al reconocer la diferencia no sólo genérica sino entre las mismas mujeres, como posibilidades y obstáculos ciudadanos a los que hay que potenciar o neutralizar. La tensión entre universalidad y diferencia subsiste, pero ya no como falso dilema. La universalidad tuvo sentido para generalizar la idea de acceso a la ciudadanía, impulsando a los que se sentían excluidos a exigirla. Pero el reconocimiento de la diferencia aparece como fundamental en una perspectiva democrática. Como dicen algunas de las autoras mencionadas, posiblemente el tratar con igualdad a mujeres y hombres requerirá también tratarlos en forma diferente. Ello implicaría presionar y negociar no sólo por el reconocimiento de la titularidad de los derechos, sino porque gocen de garantías a través de mecanismos, estructuras e instituciones de poder que los respalden. Para las mujeres, se abre un abanico de posibilidades.

Aún así, la tensión y ambivalencia entre universalidad y diferencia subsiste. Y parecería que ambas son parte de la construcción ciudadana de las mujeres. Es una tensión y ambivalencia creativa, que se niega a verse polarizada entre una exclusión que invisibiliza y una inclusión que es parcial y en clave masculina. Igualdad y diferencia, universalidad y especificidad, son algunas de las polaridades que nos parcializan en sí mismas y nos potencian en articulación.

Bibliografía

Astelarra, Judith. 1992. Recuperar la voz: el silencio de la ciudadanía. *Ediciones de las Mujeres* N° 17: Fin de siglo, género y cambio civilizatorio, pp. 47-54. Isis Internacional.

Beltrán, Elena y Sánchez, Cristina. 1996. Introducción. En: Beltrán, Elena y Sánchez, Cristina, *Las ciudadanas y las políticas*, pp.3-5. Madrid: Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid.

Beauvoir, Simone de. 1986. *El segundo sexo: los hechos y los mitos*. Buenos Aires: Editorial Siglo Veinte.

Benhabin, Seyla. 1996. Introducción. En: Beltrán, Elena y Sánchez, Cristina, *Las ciudadanas y las políticas*, pp.3-5. Madrid: Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid.

Bobbio, Norberto. 1986. *El futuro de la democracia*. México: Fondo de Cultura Económica.

Calderón, Fernando. 1989. Lo político y lo social: bifurcación o síntesis en la crisis. En: Calderón, Fernando, comp., *Socialismo, autoritarismo y democracia*, pp. 89-106. Lima: IEP-CLACSO.

Dietz, Mary. 1994. Ciudadanía con cara feminista. *Debate Feminista*, año 5, vol. 10, setiembre.

Elshtain y Rudick. 1996. En: Beltrán, Elena; Sánchez, Cristina, ed., *Las ciudadanas y las políticas*. Madrid: Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid.

Falk, Richard. 1994. The Making of Global Citizenship. En: Steebergen van, Bart, ed., *The Condition of Citizenship: an Introduction*. London, California, New Delhi: Politics and Culture Serie. Sage Publications.

Fraser, Nancy y Gordon, Linda. 1994. Civil Citizenship against Social Citizenship. En: Steebergen van, Bart, ed., *The Condition of Citizenship*. London, California, New Delhi: Politics and Culture Serie. Sage Publications.

Fraser, Nancy. 1994. La lucha por las necesidades: esbozo de una teoría crítica socialista-feminista de la cultura política del capitalismo tardío. En: *Propuestas. Documentos para el Debate* N° 3, agosto. Lima: Red Entre Mujeres.

Giddens, Anthony. 1995. The Politics of Un-politics in the Global Village. Londres: *New Times*, 30 setiembre.

Gilligan, Carol. 1982. *In a Different Voice*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Held, David. 1995. *Democracy and the Global Order. From the Modern State to Cosmopolitan Governance*. London: Polity Press.

_____ . 1991. Between State and Civil Society. Citizenship. En: Geoff, Andrews, ed., *Citizenship*. London: Polity Press.

Hobswand, Erik. 1995. *Historia del Siglo XX. 1914-1991*. Barcelona: Editorial Crítica, Grijalbo y Mondadori.

Jelin, Elizabeth. 1996. *Las mujeres y la cultura ciudadana en América Latina*. Trabajo preparado dentro del Programa Women in the Service of Civil Peace, División de la Cultura, UNESCO.

_____ . 1994. ¿Ciudadanía emergente o exclusión? Movimientos sociales y ONG en los años noventa. *Revista Mexicana de Sociología*, 4.

_____ . 1995. La construcción de la ciudadanía: solidaridad, responsabilidad y derechos. *Nueva Sociedad*.

Kymlicka, Will y Norman Wayne. 1994. El regreso del ciudadano: un examen del trabajo reciente sobre la teoría de la ciudadanía. *Ethics* 104, enero. (Traducción en español).

Lamas, Marta. 1996. Transcripciones de la II Reunión Preparatoria del Taller *Más allá del Cairo y Beijing: Fortaleciendo las habilidades de las ONG de América Latina*. Santiago, Chile, Noviembre 1996.

López, Sinesio. 1996. *Mapas de una ciudadanía inconclusa. Estado, modernización y ciudadanía en el Perú del Siglo XX*. Lima.

Marshall, T.H. 1973. *Class, Citizenship and Social Development*. USA: Greenwood Press.

Meynen, Wicky y Virginia Vargas. 1994. La autonomía como estrategia para el desarrollo desde los

múltiples intereses de las mujeres. En: Barrig, Maruja y Wehkamp, Andy (eds.), *Sin morir en el intento. Experiencias de planificación de género en el desarrollo*, pp. 25-48. Lima: NOVIB/Red Entre Mujeres.

Moller Okin, Susan. 1989. *Justice, Gender, and the Family*. Basic Books, Inc.

Molyneux, Maxine. 1996. Ciudadanía femenina y democracia: temas del debate contemporáneo. Documento presentado al Seminario Women, Citizenship and Difference. Greenwich University, julio.

Mouffe, Chantal. 1988. Towards a New Concept of Democracy. En: Beltrán, Elena y Sánchez, Cristina, *Las ciudadanas y las políticas*. Madrid: Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid.

Pateman, Carole. 1992. Equality, Difference, Subordination: The Politics of Motherhood and Women's Citizenship. En: *Beyond Equality and Difference*. USA: Routledge, London.

Phillips, Anne. 1991. Citizenship and Feminist Politics. En: Geoff, Andrews (ed.), *Citizenship*. London: Polity Press.

_____ . 1996. ¿Deben las feministas abandonar la democracia liberal? En: *Perspectivas feministas en teoría política*. España: Paidós, Estado y Sociedad.

Sarvasy, Wendy y Birte, Siim. 1994. *Social Politics: International Studies in Gender. State and Society*. Fall 1994. USA. Board of Trustees of the University of Illinois.

Sarvasy, Wendy. 1994. From Man and Philantropic Services to Feminist Social Citizenship. *Social Politics. International Studies in Gender, State and Society*, vol. 1. N° 3.

Steenbergen van, Bart. 1996. The Condition of Citizenship: an Introduction. En: Steenbergen van, Bart, ed., *The Condition of Citizenship*. London, California, New Delhi: Politics and Culture Serie. Sage Publications.

_____ . 1994. The Condition of Citizenship: an Introduction. En: Steenbergen van, Bart, ed., *The Condition of Citizenship*. London: Polity Press.

Thornton, Margaret. 1995. Embodying the Citizen. En: Margaret Thornton, ed., *Public and Private*. Londres: Oxford University Press.

Tilman, Evers. 1985. *Identidad. El lado oculto de los movimientos sociales*. Buenos Aires: Materiales para el Debate Contempóraneo.

Varcarcel, Amelia. 1996. Las mujeres dentro de la vida política. En: Beltrán, Elena y Sánchez, Cristina, ed., *Las ciudadanas y las políticas*. Madrid: Instituto Universitario de Estudios de la Mujer. Universidad Autónoma de Madrid.

Waterman, Peter. Globalization, Civil Society and Solidarity. En: Castells, Carmen, compiladora. London: Ed. Cassell. En prensa.

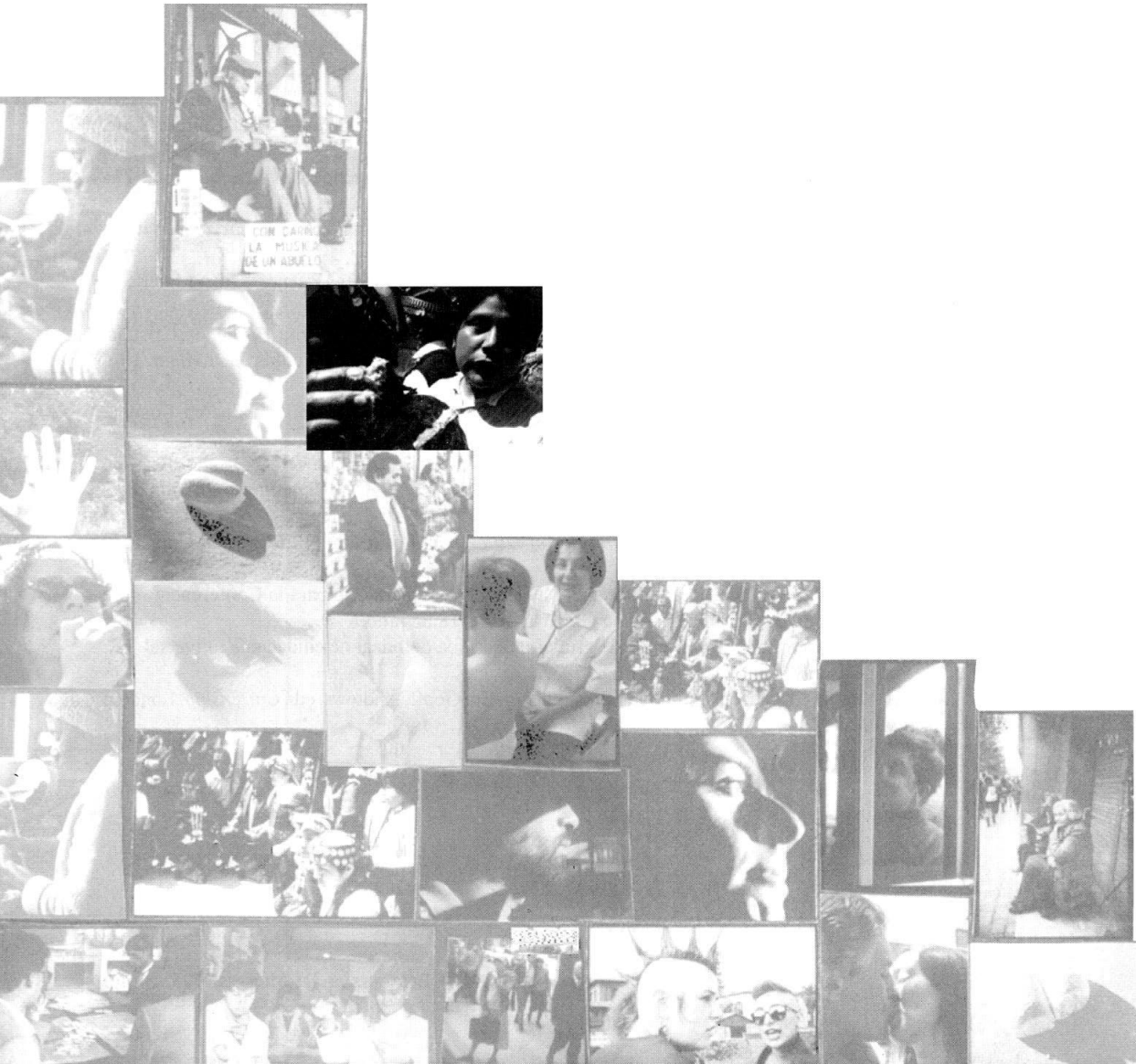
Wollstonecraft, Mary. Citada en artículo de Pateman, Carole. 1992. Equality, Difference, Subordination: The Politics of Motherhood and Women's Citizenship. En: *Beyond Equality and Difference*. USA: Routledge, London.

Young, Iris Marion. 1990. *Justice and the Politics of Difference*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

_____ . 1996. Mujeres, ciudadanía y diferencia. Documento preparatorio para la Conferencia sobre Mujeres y Ciudadanía. Universidad de Greenwich, 16-18 de julio.

_____ . 1996. Vida política y diferencia de grupo: una crítica del ideal de ciudadanía universal. En: Carmen Castells, compiladora. España.

Yuval-Davis, Nira. 1983. Citizenship and Feminist Theory. En: Geoff, Andrews, ed., *Citizenship*. London: Polity Press.



Los derechos y la cultura de género*

Elizabeth Jelin

El concepto de ciudadanía es un buen lugar para comenzar a analizar la posición de las mujeres en América Latina en los años noventa en el contexto de los procesos de democratización política a partir de los años ochenta. No vamos a desarrollar aquí la conceptualización de la ciudadanía (Jelin, 1996), sino señalar que tanto la ciudadanía como los derechos están siempre en *proceso* de construcción y cambio. Esto implica alertar sobre el peligro de identificar la ciudadanía con un conjunto de prácticas concretas, sea votar en elecciones o gozar de la libertad de expresión, recibir beneficios sociales del Estado, o cualquier otra práctica específica. Si bien estas prácticas constituyen el eje de las luchas por la ampliación de los derechos en situaciones históricas determinadas, desde una perspectiva analítica el concepto de ciudadanía hace referencia a una *práctica conflictiva vinculada al poder, que refleja las luchas acerca de quiénes podrán decir qué en el proceso de definir cuáles son los problemas sociales comunes y cómo serán abordados* (van Gunsteren, 1978).

Esta perspectiva parte de una premisa: el derecho básico es *el derecho a tener derechos* (Arendt, 1970; Lefort, 1987). La acción ciudadana es concebida en términos de sus cualidades de automantenimiento y expansión: "las acciones propias de los ciudadanos son sólo aquellas que tienden a mantener, y de ser posible a incrementar, el ejercicio futuro de la ciudadanía" (van Gunsteren, 1978). En consecuencia, el contenido de las reivindicaciones, las prioridades políticas, o los ámbitos de la lucha en contra de discriminaciones y opresiones pueden variar, *siempre y cuando se re-*

---

* Versión revisada del trabajo Igualdad/Diferencia: Dilemas de la ciudadanía de las mujeres en América Latina, preparado en el marco del programa *Las mujeres y la cultura de la ciudadanía en América Latina* patrocinado por la UNESCO. El artículo original incluye también una discusión de las responsabilidades de las mujeres en la construcción de la ciudadanía.

afirme el derecho a tener derechos y el derecho (y el compromiso de participar) en el debate público acerca del contenido de normas y leyes.

En la historia contemporánea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que las Naciones Unidas adoptó en 1948, establece el marco básico para la acción concreta, ya que expresa una ética universal que sostiene la igualdad y la libertad. Estos principios han llevado a luchas y acciones permanentes que tienden a la ampliación de la base social de la ciudadanía (por ejemplo, la extensión del voto a las mujeres o a los/as analfabetos/as), a la inclusión de grupos minoritarios, discriminados o desposeídos como miembros de la comunidad política, y al reclamo de "igualdad frente a la ley". La lucha contra la "solución final" del nazismo, la lucha contra el *apartheid* en Africa del Sur, las reivindicaciones del feminismo de acabar con todas las formas de discriminación de las mujeres, los reclamos de ciudadanía de grupos étnicos minoritarios, son las manifestaciones internacionalmente más visibles de estas luchas sociales por la inclusión, la eliminación de privilegios y la igualdad.

Universalismo y pluralismo

Un dilema central que la postulación de los derechos universales presenta es la tensión entre la *universalidad* de los derechos y el *pluralismo* cultural, de género, clase o etnia que genera diversidad. La tensión reaparece constantemente, en los espacios y circunstancias más diversos (Benhabib, 1996). Escudados en la defensa del pluralismo cultural y la crítica al individualismo liberal occidental, encontramos numerosos casos de refuerzo de patrones de subordinación y opresión de género.

Sin embargo, hoy en día, después de años de debates y diálogos, el tema de la diversidad cultural, de los diálogos interculturales y de los parámetros comparativos puede ser abordado de otra manera. El surgimiento de las reivindicaciones de los pueblos indígenas constituye un campo novedoso donde estas cuestiones están siendo discutidas (Stavenhagen, 1990, 1996; WCCD, 1995). Si la idea original de los derechos humanos universales estaba orientada por una visión individualista, ahora el eje pasa por las comunidades y los colectivos. Hablar de derechos *culturales* es hablar de grupos y comunidades: el derecho de sociedades y culturas (autodefinidas como tales) a vivir en su propio estilo de vida, a hablar su propio idioma, usar su ropa y perseguir sus objetivos, y su derecho a ser tratadas con justicia por las leyes del Estado-Nación en que les toca vivir (casi siempre como "minorías"). El planteo de este tipo de derechos implica que el concepto mismo de derechos humanos sólo adquiere sentido en circunstancias culturales específicas, que de esta manera se convierten en requisitos para, y en parte de, los derechos humanos.

En este marco, hablar de los derechos humanos de las mujeres, de los indígenas o de otras categorías específicas de la población que tradicionalmente han estado marginadas u oprimidas implica un reconocimiento de una historia de discriminación

y opresión y un compromiso activo con la reversión de esta situación. Avanzar en este punto no es fácil. Desde una perspectiva política, implica que los poderosos deberán aceptar el proceso de empoderamiento de los marginados. Implica también reconocer que la *tensión entre los derechos individuales y los derechos colectivos es permanente e inevitable.*

La convergencia en el análisis de los derechos de los pueblos indígenas y los de las mujeres llega hasta un punto: la crítica a la definición individualista y universal de los derechos humanos y su identificación con los valores occidentales y masculinos. A partir de este punto, los caminos divergen. Para la elaboración de la cuestión étnica, la crítica se orienta hacia el cuestionamiento de la naturaleza individual o colectiva de los derechos. Para la elaboración de la cuestión de los derechos de las mujeres, el camino es otro: pasa por pensar estos derechos *en el contexto de las relaciones de género* y en una reconceptualización de la relación entre lo público y lo privado.

Igualdad y diferencia

La igualdad y la diferencia constituyen un eje fundamental en el análisis de las relaciones de género y la ciudadanía. ¿Cómo interpretar las demandas de las mujeres dentro del marco de la lucha por la igualdad de derechos ciudadanos y por la vigencia de los derechos humanos universales? Desde la perspectiva de las mujeres, ¿cuál es LA LEY frente a la cual se demanda igualdad? ¿Cómo entonces pensar la diferencia?

Hay distintas maneras de hacerlo. En una primera perspectiva, la diferencia es concebida como *inherente* a las personas, y se vuelve significativa cuando se la identifica con la inferioridad: las personas diferentes no pueden entonces ser portadoras de los mismos derechos, y son vistas (inclusive jurídicamente) como "dependientes" o "no ciudadanas plenas". Una segunda visión se preocupa por garantizar la "igualdad frente a la ley", pero define la igualdad en términos de poseer ciertas características (¿masculinas?), lo cual lleva a no tomar en consideración, o aun en negar, muchos rasgos indicadores de diferencias. Una tercera perspectiva (Minow, 1990) ubica la diferencia en las *relaciones sociales*, de modo que no puede ser concebida como inherente a categorías de personas sino a rasgos de las instituciones sociales y de las normas legales que las gobiernan.

Paradójicamente, la demanda social desde las "diferentes", en nuestro caso las mujeres, tiene una primera modalidad de expresión en el reclamo de *igualdad* que se ha manifestado, a lo largo de las últimas décadas, en demandas de acceso a lugares y posiciones antes vetadas para las mujeres (desde clubes exclusivos hasta ocupaciones tradicionalmente masculinas), en denuncias de discriminación (dificultades de acceso a posiciones jerárquicas en el mundo del trabajo y la política, por ejemplo) y de desigualdad (la demanda "a igual trabajo, igual salario") .

La historia de tres décadas de lucha contra la discriminación en la región lati-

noamericana y en el mundo ha mostrado resultados muy diversos. Crecientemente, la demanda de igualdad gana legitimidad y visibilidad social. Si bien en América Latina la creación de un consenso y una voluntad política de cambio en el tema todavía no se han logrado, hay un camino recorrido en esa dirección. Algunos datos de la realidad de hombres y mujeres indican el acortamiento de la brecha. Esto ocurre en el campo de la educación, y se manifiesta especialmente en el aumento de la matrícula de mujeres en la educación secundaria y universitaria. Pero otros datos no dan lugar para la complacencia: los niveles salariales y el acceso a posiciones de autoridad, por ejemplo. El aumento de las capacidades (educacionales) de las mujeres y el aumento en su participación en la actividad económica de mercado no producen resultados automáticos en otras áreas de la participación. Como numerosos estudios han mostrado, la presencia de las mujeres en posiciones de poder y en el campo de las decisiones económicas y políticas es muy limitada a pesar de la existencia visible y la presencia pública del movimiento feminista, que lleva más de veinte años de actividad en la región (UNDP, 1995). Además, hay datos que indican una carga especialmente fuerte para las mujeres de los costos sociales del ajuste y la crisis.

Un espacio de lucha por la igualdad

Numerosos países han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Naciones Unidas, 1979), lo cual no quiere decir que todos estos países hayan concluido la tarea de ajustar su legislación en todos los campos; mucho menos que hayan implementado las políticas y acciones afirmativas para revertir la situación real de discriminación.

El lenguaje de la igualdad de derechos es el discurso de la no-discriminación. En el campo del derecho laboral y del funcionamiento del mercado de trabajo, la discriminación y la segregación ocupacional, así como los efectos de la legislación, han sido claramente expuestos y aun cuantificados. Que hombres y mujeres enfrentan condiciones muy diferentes en el mercado de trabajo es un hecho irrefutable. También que la igualdad de oportunidades –base conceptual de la formulación de los derechos económicos y sociales– es una ficción. Hay tareas que son socialmente definidas como femeninas y otras como masculinas, generando segregación ocupacional. A su vez, ésta tiende a desembocar en una desvalorización (monetaria, de prestigio, de condiciones de estabilidad laboral, de inserción en carreras) de las tareas femeninas. Hay también discriminación hacia las mujeres basada en la (imputada) incompatibilidad entre el rol productivo y el reproductivo.

El papel reproductivo de las mujeres ha sido una consideración central en la legislación laboral. Desde muy temprano en la historia de su introducción en la región, los legisladores se han preocupado por la "protección" a la mujer trabajadora. Una protección que tenía varios ejes: la fuerza física, la moral, el rol familiar. Las

mujeres no debían realizar tareas pesadas (por ser el "sexo débil"), ni tareas nocturnas (para proteger su honor y reputación moral), ni tareas insalubres (por su debilidad para cuidar su salud y especialmente la del futuro niño que pueden estar gestando). Además, estaba la protección a la maternidad, incluyendo condiciones especiales de contratación y licencias. Todo esto actuó históricamente como un bumerán: en igualdad de otras condiciones, al empleador le resultaba más caro contratar mujeres, lo cual agregaba incentivos para la discriminación. El resultado: trabajo precario y sin beneficios sociales, segregación en ocupaciones "femeninas", menores posibilidades de ascenso, discriminación salarial.

¿Cómo se asegura la igualdad de oportunidades en este contexto? ¿Qué es la igualdad en condiciones desiguales? Eliminar una buena parte de la legislación supuestamente protectora y reemplazarla por principios que tomen en cuenta las transformaciones tecnológicas (la lista de tareas pesadas no puede ser la misma en el año 2000 que a comienzos del siglo XX, por ejemplo) y las nuevas demandas de equidad en los derechos reproductivos, constituyen pasos en esa dirección. Avanzar en esta línea requiere también una profunda revisión de la relación entre las esferas de la producción y la reproducción, especialmente una redefinición de responsabilidades y tareas de hombres y mujeres en la labor doméstica y en los roles familiares.

Hasta tanto se efectivicen los cambios en el ámbito doméstico y en las responsabilidades familiares, lentos y difíciles por la carga de la tradición cultural, y se transforme la tipificación sexual de las ocupaciones, la aplicación de los principios de igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo no puede ser automática. Requiere políticas y acciones compensadoras que reconozcan las diferencias de género y actúen para fomentar la equidad. Las políticas antidiscriminatorias basadas en una igualdad "literal" son contraproducentes: por ejemplo, el esfuerzo que debe hacer la primera mujer que llega a un puesto jerárquico, observada y evaluada por su capacidad personal pero también como representante del "género femenino", es mucho mayor que el de sus colegas hombres, y la coloca en una situación de profunda desigualdad. Reconocer que no hay igualdad implica entonces, aplicar políticas especiales, afirmativas, que transformen las condiciones necesarias para generar igualdad (o equidad).

Si en términos de segregación y discriminación el potencial de igualdad de oportunidades según género está presente, éste no es el caso respecto de las situaciones laborales en las cuales los derechos humanos básicos (el derecho a la integridad física y a la libertad de movimiento) están en peligro. Por un lado, las situaciones de trabajo semi-servil y las migraciones forzadas para ejercer la prostitución, situaciones que están en la mira internacional en la actualidad, y que no son fácilmente reversibles. Por otro, el acoso sexual en el mundo laboral que comienza a ser reconocido como violación a los derechos humanos, pero que todavía no termina de salir de la invisibilidad.

En América Latina el acoso sexual vinculado a situaciones laborales es una experiencia muy extendida, aunque no se sabe con certeza su magnitud. Predominan el silencio, la invisibilidad, el ocultamiento y la culpabilización de la víctima. Como en los casos de la violencia doméstica y la violación, el reconocimiento social del fenómeno y la provisión de servicios de apoyo y ayuda a víctimas son importantes. Pero sin su encuadramiento legal y la penalización de los responsables, sin encontrar los medios para legitimar la denuncia queda como acto privado, reprobado por algunos, permitido o aún festejado por otros. Sólo con un Estado que valida los derechos humanos de las y los ciudadanos se puede llegar a garantizar la "igualdad de oportunidades" en el mundo laboral partiendo de un reconocimiento explícito de las diferencias entre mujeres y hombres en las relaciones de género.

La lógica de la diferencia: deberes y relaciones

Hay todavía mucho camino por recorrer en pos de esta igualdad frente a la ley (Valdés et al., 1995). La igualdad literalmente entendida, sin embargo, puede ser engañosa o insuficiente en muchas situaciones: frente al embarazo y la maternidad de una trabajadora ¿se requiere igualdad –o sea negar la diferencia entre hombres y mujeres– o un tratamiento "especial"? O, para llevar el tema a otro campo, ¿qué significa igualdad de derechos en la educación de un niño/a o discapacitado/a o cuya lengua materna (sic) no es la de la escuela pública oficial?

El énfasis en la norma de la igualdad refuerza una concepción basada en el derecho universal natural: reafirma que todos los seres humanos son iguales *por naturaleza*. Es efectivo políticamente en tanto permite combatir ciertas formas de discriminación, afirmar la individualidad y poner límites al poder. Sin embargo, la otra cara de la realidad social se impone: los individuos no son todos iguales y, en última instancia, ocultar o negar las diferencias sirve para perpetuar el sobreentendido de que hay dos clases de personas, esencialmente distintas, las "normales" y las "diferentes" (es decir, inferiores). Mantener la ilusión de la igualdad y plantearla en términos de derechos universales tiene sus riesgos: puede llevar a una formalización excesiva de los derechos, aislándolos de las estructuras sociales en que existen y cobran sentido. En ese paradigma, el pasaje de lo universal hacia lo social, histórico y contingente se torna difícil.

Uno de los grandes aportes del feminismo ha sido la profunda crítica y el desenmascaramiento de los supuestos del paradigma dominante, que toma a los hombres (occidentales) como punto de referencia universal y que transforma a las mujeres (y a otro/as) en diferentes o invisibles. La crítica feminista al "androcentrismo" de la visión dominante de la igualdad ha sido clara y explícita (Facio, 1991; Bunch, 1991) debido a que, cuando se habla de igualdad de los sexos, generalmente se está pensando en "elevar" la condición de la mujeres para acercarla a la del hombre, paradigma

de "lo humano" (Facio, 1991). Al hacer esta crítica, el feminismo se ha movido en un espacio contradictorio: el reclamo de derechos iguales a los de los hombres y un tratamiento igualitario por un lado; el derecho a un tratamiento diferenciado y a la valorización de las especificidades de la mujer por el otro. Estamos aquí en presencia de una nueva *tensión inevitable entre el principio de la igualdad y el derecho a la diferencia*. Reconocerla tiene un beneficio importante, ya que estimula el debate y la creatividad y ayuda a evitar los dogmatismos.

Los avatares de la terminología preferida para plantear cuestiones conceptuales y estrategias políticas reflejan esta tensión. El reconocimiento de la diferencia llevó, en primera instancia, a reemplazar la noción de igualdad por la de equidad. Pero muy pronto se hizo evidente que la noción de equidad, con su trasfondo cualitativo, contingente y respetuoso de la diversidad y el pluralismo cultural puede ser utilizada, fácilmente, para justificar y enmascarar situaciones indefendibles de opresión y de desigualdad entre hombres y mujeres.

Hay otra dimensión de la tensión entre igualdad y diferencia, que requiere atención y análisis. En efecto, la crítica de la universalización de la visión masculina corre el riesgo de caer en simplificaciones peligrosas. El peligro está en responder a la supremacía machista (con pretensión universalista) con una supremacía femenina/feminista (también con pretensiones de universalidad) que no puede conceptualizar la diferencia sin jerarquizarla, esta vez en sentido inverso (Minow, 1990). Este peligro se hace evidente en el análisis de la categoría *mujer*, que debería ser reemplazada por el análisis de *las mujeres*.

Existe una enorme diversidad de experiencias, diferencias de raza, de clase, de nacionalidad, de etnia, de edad, entre mujeres. En los inicios del movimiento feminista, LA MUJER parecía cobrar vida. La reflexión sobre la condición femenina se hacía contrastándola con la condición masculina, es decir, se trataba de descubrir y nombrar la diferencia de género. Necesariamente, las diferencias entre mujeres quedaban relegadas cuando de lo que se trataba era de incorporar una perspectiva diferente al análisis y a la práctica social. Por el propio crecimiento de la actividad social y política sobre el tema, por la experiencia ganada en la práctica de acciones de desarrollo dirigidas a mujeres, así como por la creciente madurez y el decantamiento histórico del movimiento (que ya lleva más de veinte años, con la renovación generacional que el paso del tiempo implica), las diferencias ENTRE mujeres aparecen como un nuevo eje articulador del análisis.

¿Cuáles son las diferencias que cuentan? Mujeres urbanas y rurales tienen demandas y oportunidades diferentes; las diferencias de clase son enormes y tienden a crecer con la polarización social en aumento en la región. La heterogeneidad socioeconómica dentro de cada país, región o ciudad, es bien conocida, aunque muchas veces esté oculta por la dificultad que tienen las mujeres pobres de hacerse presentes en el espacio público (nacional e internacional). Esta dimensión de la dife-

rencia, sin embargo, tiene sus intermediarias/os y voceras/os en los agentes de promoción del desarrollo y en algunas estadísticas e índices que alertan sobre esta polarización.

La pobreza en sí, sin embargo, no genera actoras colectivas o identidades fuertes, con una voz directa en la esfera pública. Lo que sí es cada vez más visible en los encuentros internacionales es otra dimensión de las diferencias entre mujeres: las minorías religiosas, las diferencias étnicas y raciales, que se constituyen en criterios de identidad. Las mujeres negras o las indígenas buscan sus propios espacios de construcción de identidad y de formulación de agendas y estrategias, cuestionando los mecanismos de representación y de articulación de demandas que fueron generadas por las mujeres (educadas, blancas, urbanas) que se habían convertido en voceras de los intereses de LA MUJER. Además de reclamar por su pobreza y por la discriminación, hay una afirmación del derecho a mantener su propia forma de vida y su propia cultura. Y esto, a su vez, implica distintas formas de comprensión de su condición y nuevas formas de plantear demandas relacionadas con ciertos derechos universales de las mujeres, como por ejemplo los derechos sexuales y reproductivos (Barrig, 1996).

Además de estas diferencias entre mujeres de distintas clases sociales, de grupos étnicos dominantes y oprimidos, con distinto bagaje cultural e histórico, hay otro criterio de diferenciación entre mujeres: la edad y la cohorte. Aquí se combinan dos fuentes de heterogeneidad: el curso de vida, o sea, las diferencias entre mujeres según la etapa de la vida que transitan (niñas, jóvenes, adultas en el momento reproductivo, adultas mayores, viejas), y el impacto de los diversos momentos históricos, que marcan patrones de vida e interacción específicos según cohorte: "nuestras abuelas" y "nosotras"; las jóvenes de hoy y las de ayer; el diferente sentido de ser madre; la aceptación social de la elección de preferencia sexual, libertades y restricciones que se van transformando.

Si estas dimensiones etarias cruzan las categorías de la diversidad social, las dimensiones étnicoculturales tienden a superponerse, sin ser idénticas, a las brechas sociales. De ahí que, al hablar de igualdad de derechos, de ciudadanía, o de oportunidades, además de mirar las diferencias entre mujeres y hombres, o las diferencias entre mujeres de distintos países, hay que atender a las diferencias entre mujeres dentro de un mismo país, región o ciudad.

Lo público y lo privado: la violencia doméstica

El paradigma dominante de los derechos humanos se construye en base a una diferencia: los derechos civiles y políticos de los individuos se sitúan en la vida pública; quedan fuera las violaciones a estos derechos en la esfera privada de las relaciones familiares y esto es especialmente importante para la ciudadanía de las mujeres.

La violencia doméstica es un tabú, invisible y complejo. Oculta bajo el manto de la privacidad, las prácticas violentas dentro de la familia, cuyas víctimas son casi siempre mujeres, pero también niñas, niños y ancianos, surgen a la luz en la década de los años ochenta. En nuestra cultura es muy difícil reconocer y hablar de la violencia doméstica (inclusive la sexual). La complicidad de víctimas y victimarios es enorme.

El abuso de las mujeres fue caracterizado muchas veces como expresión emocional de los hombres o como manifestación simbólica del poder que resulta de la necesidad de demostrar la masculinidad. Al coartar la libertad de las mujeres y al crear un clima de terror y de sometimiento que agudiza la desigualdad de género y la dependencia de las mujeres, el círculo de la violencia doméstica fortalece las barreras estructurales que limitan las opciones de las mujeres. Y es que a diferencia de las estructuras de dominación y de desigualdad política entre hombres, las formas de dominación de los hombres sobre las mujeres se efectivizan social y económicamente *antes* de la operatividad de la ley, sin actos estatales explícitos, en contextos íntimos definidos como vida cotidiana. La "privacidad" de la familia es utilizada como justificación para limitar la intervención del Estado en esta esfera. En los hechos, la dicotomización de las esferas pública y privada lleva a mutilar la ciudadanía de las mujeres (Romany, 1994). Se manifiesta aquí una *tensión irresoluble entre el respeto a la privacidad y la intimidad por un lado, y las responsabilidades públicas por el otro*, que debiera llevar a una redefinición de la distinción entre lo *público* y lo *privado e íntimo*, distinción que ha funcionado en el plano simbólico y jurídico, pero no en la práctica, ya que el Estado moderno siempre ha tenido un poder de policiamiento sobre la familia (Donzelot, 1979; Jelin, 1982).

Dado el reconocimiento social y la indignación moral que la violencia doméstica está generando en los últimos años, el antiguo "respeto (cómplice) a la privacidad" se transforma en urgencia de intervención cuando hay violaciones a los derechos humanos en el ámbito privado, porque el respeto a la privacidad dentro del contexto familiar no puede justificar la impunidad legal para la violencia hacia las mujeres. En este punto, si el tema de los derechos de las mujeres deja de ser planteado como demanda de igualdad y se encuadra en las demandas vinculadas al principio de antisubordinación, el papel del Estado se transforma: la obligación afirmativa de éste de proteger los derechos humanos básicos de sus ciudadanos se convierte en el criterio para definir la responsabilidad estatal cuando se presenta la contradicción entre el respeto a la privacidad y la defensa de las víctimas de violencia (Romany, 1994).

Esto no elimina la tensión o contradicción. La intervención de éste en el mundo privado tiene dos caras: la defensa de las víctimas y de las/os subordinadas/os del sistema patriarcal y la intervención arbitraria, el control y aún el terror, tan presente en la vida cotidiana durante las recientes dictaduras (y en las prácticas de criminalización de la pobreza en muchas "democracias"). Las reacciones sociales a ambas son necesariamente diferentes: mantener como privado, protegido de la inter-

ferencia estatal, lo referido a la intervención arbitraria del Estado; intervención y garantía estatal frente a aquello que refuerza la subordinación de género y patriarcal.

El derecho al propio cuerpo

Sabemos que el cuerpo de la mujer, al tener la capacidad de gestar la vida, cobra un valor social muy especial. La necesidad del control del cuerpo de la mujer proviene de la simultaneidad de la propiedad privada y la transmisión hereditaria de la propiedad. Cuerpo que da placer sexual, cuerpo que da hijos. Cualquier intento de ejercer poder sobre la reproducción implica apoderarse y manipular el cuerpo de las mujeres, sea en forma privada o pública (políticas de población, ideologías y deseos de paternidad). El deseo de las mujeres puede contar, o no. Y con la historia de la sexualidad, pasa algo semejante: el placer es del hombre, la mujer "sirve".

Transformar este conjunto de prácticas e ideas no es fácil. La cultura pesa: el machismo en todas sus formas se combina con el culto a la madre dedicada y sufriente, cuya contrapartida es el horror que despierta la mujer estéril. Unidos al tabú de nombrar, de hablar, de mencionar la sexualidad. Oculta y prohibida en la palabra, real y cotidiana en la práctica (no pocas veces violenta), tornar visible la sexualidad y exponer la opresión sexual de la mayoría de las mujeres ha sido un logro significativo de la última década. El reconocimiento público y político de esta forma de opresión y de los cambios a impulsar ha sido más lento y controvertido. La fuerte presencia de la Iglesia Católica y del tradicionalismo ideológico, el enraizamiento de prácticas y de ideologías que culpabilizan a la víctima ("¿no será que ella incitó a la violación?"; "si tuvo relaciones sexuales y no se cuidó, que sufra las consecuencias"; "es irresponsable tener tantos hijos...") han obstaculizado y puesto freno a proyectos de cambio legal, así como a propuestas de servicios de salud reproductiva y de educación sexual.

El industrialismo y la modernidad trajeron cambios substanciales en la modalidad de apropiación del cuerpo femenino, sin eliminarla: hay nuevos desarrollos tecnológicos para prevenir embarazos y para combatir la esterilidad, se genera un nuevo ideal de familia con pocos hijos (inclusive con terminologías como "calidad y no cantidad", "altruismo en vez de egoísmo" en la motivación para tener hijos) y los medios de comunicación masivos convierten al cuerpo de la mujer (joven y bonita, rubia, alta) en un objeto de consumo. En todos estos cambios, sólo muy recientemente se han empezado a oír las voces de las mujeres reclamando poder y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sobre las formas del ejercicio de la sexualidad.

En las últimas dos décadas, la lucha de las mujeres en el campo de la sexualidad y la reproducción se viene dando con mucha fuerza, con sentidos y significados complejos y contrapuestos, a veces aparentemente contradictorios, nunca unívocos. De hecho, la expresión *derechos reproductivos*, enarbolada como reivindicación del movimiento de mujeres, alude a una aparente contradicción entre la demanda de au-

tonomía y la demanda de la igualdad entre sexos: "Los derechos reproductivos son los derechos de las mujeres a regular su propia sexualidad y capacidad reproductiva así como a exigir que los hombres asuman responsabilidad por las consecuencias del ejercicio de su propia sexualidad" (Azeredo y Stolcke, 1991).

Tomemos la primera parte de la frase. ¿Cómo se ejercen esos derechos? ¿Quién los garantiza? Para regular su sexualidad y capacidad reproductiva, o sea el control sobre el propio cuerpo, el primer requisito es que no se ejerza violencia sobre el cuerpo de la mujer. Para ello, el doble imperativo es que los otros (hombres) no se consideren dueños de ese cuerpo, y que las mujeres tengan poder para resistir la coacción o la imposición por parte de esos otros. En última instancia, la garantía de que el cuerpo de la mujer no será sometido a prácticas sin su consentimiento y voluntad implica el reconocimiento de sus *derechos humanos básicos*: es el derecho a la vida, a la libertad, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la tortura y el trato cruel (Declaración Universal, artículos 3, 4 y 5). En este sentido, la violación es una forma extrema de violencia corporal. Pero también lo son la imposición no consentida de métodos anticonceptivos (de manera más dramática, los quirúrgicos irreversibles) y su opuesto, la negación a contar con servicios de salud que aseguren la capacidad de regulación de la sexualidad y la reproducción.

La distancia entre esta afirmación y la realidad cotidiana para millones de mujeres en América Latina es enorme. La violación es una práctica que pocas veces resulta castigada: el derecho de la mujer violada a interrumpir un embarazo no está reconocido en casi ningún país; la sexualidad de las mujeres pocas veces es ejercida como práctica de libertad.

En cuanto a la reproducción, el ideal de la libertad y autodecisión por parte de las mujeres sólo puede realizarse si están dadas las condiciones para poder hacerlo. La realidad social, nuevamente aquí, dista mucho del ideal. Las políticas de población, sean éstas pro-natalistas o controladoras, implican una planificación demográfica de la fecundidad, para lo cual es central el control del cuerpo de las mujeres. Una cosa es cuando, a partir del acceso generalizado a información y educación sexual y reproductiva, se establecen incentivos para orientar las elecciones reproductivas; otra muy diferente cuando se imponen estrategias reproductivas que poco toman en cuenta los deseos y la elección de las propias mujeres. Tanto la ausencia de educación y de medios de planificación de la fecundidad como los programas de control de natalidad semi-compulsivos (programas de esterilización, distribución desinformada de anticonceptivos) refuerzan la condición de la mujer como objeto, como cuerpo a ser manipulado y sometido.

El énfasis reciente en las nuevas tecnologías reproductivas y la urgencia de legislar sobre las condiciones de su aplicación dan al tema de los derechos reproductivos una nueva actualidad, esta vez centrada en la cara opuesta, es decir, en el tratamiento de la esterilidad y las manipulaciones tecnológicas para lograr la con-

cepción y gestación "asistidas". La paradoja es que, mientras la problematización de los derechos reproductivos (métodos y prácticas anticonceptivas) es relevante fundamentalmente para los países periféricos y para las clases populares, las prácticas conceptivas (la fertilización "asistida") se desarrollan y aplican en los países centrales y en las clases altas de los periféricos.

Tanto detrás de los programas de control de población como detrás del desarrollo y la aplicación de las técnicas conceptivas hay una conceptualización de la persona, del individuo y de la familia típicamente occidental: la visión de la familia como genética, naturalizadora de desigualdades sociales. En realidad, "las nuevas tecnologías reproductivas responden al deseo de paternidad", a la obsesión por tener un hijo propio, de la propia sangre, donde la sangre es el vehículo simbólico que une a las generaciones y que transporta las esencias de las personas. Como dice Stolcke, un "deseo de paternidad biológica por medio de una maternidad tecnológica" (Stolcke, 1991).

Volvamos a la autonomía y a la igualdad desde las cuales, contradictoriamente, se plantea el tema de los derechos reproductivos. Las mujeres reivindican "este cuerpo es mío". ¿Hay alguna manera de conciliar la demanda de ser quien elige, decide y controla el uso de anticonceptivos, el embarazo y la gestación, y al mismo tiempo pedir que los hombres asuman, en pie de igualdad las consecuencias del ejercicio de su propia sexualidad? O sea, ¿su responsabilidad en la paternidad? Ambas demandas parecen necesarias, y las dos están orientadas en dirección a lograr relaciones más equitativas entre los géneros. La resolución de esta contradicción es, necesariamente, negociada.

En este punto, el tema se abre a nuevas preguntas. En primer lugar, los derechos reproductivos ¿son derechos de las mujeres o derechos enraizados en las relaciones de género? ¿Son derechos individuales o de la pareja? ¿Quién puede ser árbitro o instancia de justicia para dirimir conflictos? Reconocer que las mujeres no pueden ser ajenas al control de sus propios cuerpos es un paso fundamental desde la perspectiva de los derechos humanos básicos. Esto implica también el reconocimiento de que hasta ahora, la pareja ha sido asimétrica, en tanto los hombres han tenido (y siguen teniendo) más poder para pautar sus propios comportamientos sexuales y los de sus parejas. Si teóricamente existe la posibilidad, en el extremo, de transformar la demanda de autonomía de las mujeres en alguna forma de hegemonía en las decisiones reproductivas, negando el lugar del hombre, la realidad actual es la opuesta. La subordinación y la opresión sexual de las mujeres, la falta de libertad en cuanto al control sobre sus cuerpos, requiere de acciones afirmativas para contrarrestarlas.

La (¿inevitable?, ¿inherente?) tensión entre las mujeres-madres decidiendo cuándo, cómo y de quién tener hijos, y la incorporación de la paternidad como derecho paralelo al de la maternidad, es otro nivel del problema, que requiere también de profundización analítica. La co-responsabilidad materna y paterna en el cuidado de

los hijos requiere que los padres tengan voz en la decisión del cuándo y el cómo de la concepción y gestación de sus hijos. Y esto vuelve a plantear la necesidad de pensar la dimensión relacional de la pareja y de la sociedad en el tema de los derechos reproductivos, para así superar la visión de una lucha entre las unas y los otros.

Pensar los derechos reproductivos como derechos individuales o de la pareja presenta otra cara paradójica. La sumatoria y combinación de una multiplicidad de decisiones individuales y de parejas tiene consecuencias sociales de largo plazo, a través de las tasas de natalidad y el crecimiento de población, lo cual transforma al tema en objeto de políticas nacionales e internacionales. Tener más o menos hijos/as es, idealmente, una opción de la persona o de la pareja con sus costos y beneficios. La intervención del Estado a través de políticas de población puede modificar el balance entre costos y beneficios, a través de incentivos diferenciales. Pero, ¿cómo establecer las prioridades? Cuando se toman decisiones sobre el gasto social, los intereses de clase, de género, de profesiones y de empresas se entremezclan. La complejidad del fenómeno, sin embargo, no debe obstruir la capacidad crítica: ¿qué recursos utilizar para garantizar cuáles derechos reproductivos? Formular cuestiones de esta naturaleza lleva implícitamente a un cuestionamiento de las formas habituales de decidir políticas sociales. Implica también una propuesta de ejercer las responsabilidades ciudadanas a través de la participación en el espacio público de debate y decisión. De hecho, de lo que se trata aquí, –y en general en el campo de las políticas– es de transformar las políticas del Estado en políticas públicas, es decir, de todas/os.

La conquista de estos derechos y el ejercicio de estas responsabilidades no son sencillos ni están asegurados. Primero, hay una traba cultural: la socialización de género y la identidad de las mujeres siguen fuertemente asociadas con la maternidad y con el control de la sexualidad y la capacidad reproductiva por parte de otros. Segundo, una traba material e instrumental: la autonomía de cada mujer para decidir personalmente sobre su sexualidad y reproducción sólo es posible cuando están dadas las condiciones mínimas (en términos educacionales, económicos, sanitarios, entre otras) para poder ejercerla.

Bibliografía

Alvarez, Sonia. 1990. *Engendering Democracy in Brazil: Women's Movements in Transition Politics.* Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Arendt, Hannah. 1970. *The Origins of Totalitarianism.* Nueva York: Harcourt, Brace & World.

Azeredo, Sandra y Verena Stolcke. 1991. Introduçao. En: Sandra Azeredo y Verena Stolcke, eds., *Direitos Reproductivos.* Sao Paulo: Fundaçao Carlos Chagas.

Barrig, Maruja. 1994. The Difficult Equilibrium between Bread and Roses: Women's Organizations and Democracy in Peru. En: Jane S. Jaquette, ed., *The Women's Movement in Latin America: Participation and Democracy.* Boulder: Westview Press.

_____ . 1996. Mujer y desarrollo: nosotras no éramos todas. En: Narda Henríquez, ed., *Encrucijadas del saber. Los estudios de género en las ciencias sociales.* Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Benhabib, Seyla. 1996. 'Nous' et 'les Autres'. Complex Cultural Dialogue in a Global Civilization. Trabajo presentado en la Conferencia Multiculturalism, Minorities and Citizenship, Florencia, European University Institute.

Bunch, Charlotte. 1991. Hacia una revisión de los derechos humanos. *Ediciones de las Mujeres* N° 15: La mujer ausente: Derechos humanos en el mundo. Isis Internacional.

Dawn. 1992. Environment and Development: Grassroots Women's Perspectives. Documento presentado en UNCED 92, Río de Janeiro.

Donzelot, Jacques. 1979. *The Policing of Families.* Nueva York: Pantheon Books.

Facio, Alda. 1991. El principio de la igualdad ante la ley. *El Otro Derecho*, vol. 8.

Heller, Agnes. 1990. General Ethics. Oxford: Basil Blackwell.

Jaquette, Jane S., ed. 1994. *The Women's Movement in Latin America: Participation and Democracy.* Boulder: Westview Press.

Jelin, Elizabeth. 1982. *Familia y unidad doméstica: mundo público y vida privada.* Buenos Aires: Estudios CEDES.

_____ . 1996. La construcción de la ciudadanía: entre la solidaridad y la responsabilidad. En: Elizabeth Jelin y Eric Hershberg, eds., *Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina.* Caracas: Nueva Sociedad.

Jelin, Elizabeth, ed. 1987. *Ciudadanía e identidad. Las mujeres en los movimientos sociales en América Latina.* Ginebra: UNRISD.

Koonz, Claudia. 1987. *Mothers in the Fatherland. Women, the Family and Nazi Politics.* Nueva York: St. Martin's Press.

Lefort, Claude. 1987. Los derechos del hombre y el Estado benefactor. *Vuelta*, julio.

León, Magdalena, ed. 1994. *Mujeres y participación política. Avances y desafíos en América Latina.* Bogotá: TM Editores.

Minow, Martha. 1990. *Making all the Difference: Inclusion, Exclusion and American Law.* Nueva York: Cornell University Press.

Moghadam, Valentine M., ed. 1994. *Identity Politics & Women. Cultural Reassertions and Feminisms in International Perspectives.* Boulder: Westview Press.

Oliveira, Rosiska Darcy de y Thais Corral, eds. 1992. *Terra Femina.* Rio de Janeiro: IDAC/REDEH.

Romany, Celina. 1994. State Responsability Goes Private: a Feminist Critique of the Public/Private Distinction in International Human Rights Law. En: Rebecca J. Cook, ed., *Human Rights of Women. National and International Perspectives.* Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Schirmer, Jennifer. 1988. Those who Die for Life Be Called Dead: Women and Human Rights Protest in Latin America. *Harvard Human Rights Yearbook*, vol. 1.

Schutz, Alfred. 1974. Algunas ambigüedades de la noción de responsabilidad. En: *Estudios sobre teoría social.* Buenos Aires: Amorrortu.

Stavenhagen, Rodolfo. 1990. *The Ethnic Question. Conflicts, Development and Human Rights.* Tokio: United Nations University Press.

_____ . 1996. Derechos indígenas. Algunas cuestiones conceptuales. En: Elizabeth Jelin y Eric

Hershberg, eds., *Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina*. Caracas: Nueva Sociedad.

Stolcke, Verena. 1991. Derechos Reproductivos. En: Sandra Azeredo y Verena Stolcke, eds., *Direitos Reproductivos*. Sao Paulo: Fundaçao Carlos Chagas.

UNDP. 1995. *Human Development Report 1995*. Nueva York: UNDP.

Valdés, Teresa. 1990. *Mujeres y derechos humanos: "menos tu vientre"*. Santiago: FLACSO. Documento de Trabajo, Serie Estudios Sociales N° 8.

Valdés, Teresa et al. 1995. *Mujeres latinoamericanas en cifras. Tomo comparativo*. Santiago: FLACSO/ Instituto de la Mujer (España).

Valdés, Teresa y Weinstein, Marisa. 1990. *Mujeres que sueñan. Las organizaciones de pobladoras en Chile: 1973-1989*. Santiago: Libros FLACSO.

van Gunsteren, Herman. 1978. Notes on a Theory of Citizenship. En: Pierre Birnbaum, Jack Lively y Geraint Parry, eds., *Democracy, Consensus and Social Contract*. Londres: Sage.

Vargas, Virginia. 1994. El movimiento feminista latinoamericano: entre la esperanza y el desencanto. En: Magdalena León, ed., *Mujeres y participación política. Avances y desafíos en América Latina*. Bogotá: TM Editores.

WCCD (World Commission on Culture and Development). 1995. *Our Creative Diversity. Report of the World Commission on Culture and Development*. Paris: UNESCO/UN.



El maternalismo en las políticas sociales*

Rosario Aguirre

Las discusiones sobre la ampliación de los derechos ciudadanos de las mujeres tienen lugar en el marco del impacto de la crisis del Estado de bienestar y de los procesos de globalización que acentúan la heterogeneidad y las desigualdades sociales, poniendo en cuestión los postulados de democracia y participación. Se inscriben en el debate que tiene como eje la redefinición de las relaciones entre Estado y mercado, la forma en que los recursos sociales deben ser asignados y apropiados, la determinación de quiénes ejecutarán ese reparto y los criterios y los actores que intervendrán en el mismo.

Está en el centro de estas discusiones la ubicación y papel de diferentes actores sociales, empresas, trabajadores, mujeres y hombres y la redefinición de su acceso a recursos y al bienestar. Se ha comenzado a percibir la necesidad de repensar los principios organizadores de la solidaridad y la concepción misma de los derechos sociales.

La idea central es que –en este contexto– probablemente se presente una nueva oportunidad para introducir el enfoque femenino en la cuestión social, sobre bases distintas a las que se plantearon a comienzos del desarrollo de los estados de bienestar cuando predominó el reclamo por parte de las mujeres del reconocimiento de la función social de la maternidad.

El análisis de la construcción social de la maternidad –aspecto clave para comprender la construcción social y cultural de las diferencias entre hombres y mujeres– y su vinculación con los derechos sociales, en especial con el derecho al trabajo, conduce a comprender el enfoque del Estado sobre los modelos de trabajo y familia

---

* La primera versión de este documento fue discutida en la reunión del Proyecto Alfa La Ciudadanía Social de las Mujeres en América Latina, realizada en Bruselas en enero de 1997.

subyacentes en las políticas que promueve, así como las dificultades para considerar las interrelaciones entre la producción, la reproducción social y cultural y los trabajos de cuidado realizados por las mujeres.

Interesa llegar a determinar las implicancias que esto tiene en el reconocimiento de los derechos sociales de las mujeres por parte del Estado.

El trabajo aspira a aportar elementos para comprender las dificultades que se presentan para que las mujeres gocen de un estatus ciudadano completo.

En primer lugar, da cuenta de la literatura feminista que cuestiona las teorías sobre la ciudadanía y los supuestos de género implícitos en las políticas sociales.

En el segundo punto se analizan las alternativas planteadas a la concepción liberal del ciudadano. En particular los fundamentos maternalistas de la ciudadanía de las mujeres y la propuesta de conceptualizar la ciudadanía social como servicio.

En tercer lugar, se presentan –a través de la propuesta de Fraser– algunos elementos para pensar la cuestión de la interpretación de las necesidades de las mujeres, en tanto base para la definición y el ejercicio de los derechos sociales.

Por último, se plantea la necesidad de analizar la experiencia latinoamericana reciente en relación a los fundamentos maternalistas de las nuevas políticas sociales, en el marco de los procesos de ajuste estructural y reforma del Estado en diferentes escenarios de integración regional. Se destaca al mismo tiempo la emergencia de acciones de movilización, presión política y recursos discursivos que tienden en la región a vincular la ciudadanía participativa con la ciudadanía política de las mujeres.

Estado de bienestar y políticas sociales

Un importante conjunto de autoras feministas (Orloff, 1993; Hernes, 1990; Leira, 1992; Andrew, 1992) han entrado en el debate sobre los estados de bienestar y las políticas sociales. Critican la literatura sobre el tema a partir de los elementos de género implícitos en las políticas de Estado que no consideran el género en sus conceptos de clase, ciudadanía y economía.

Estos trabajos hacen ver que los estados regulan las relaciones de género en el mercado laboral, en la familia, entre otras. Si bien puede haber desacuerdo entre las autoras sobre las causas de las desigualdades entre los géneros, se demuestra que las políticas y programas sociales afectan la situación material de las mujeres, determinan las relaciones de género, estructuran el conflicto y la participación política, y contribuyen a la formación y movilización de identidades y conflictos específicos.

A partir de la clásica conceptualización sobre la ciudadanía de T.H. Marshall, la preocupación fundamental de las autoras feministas son las desigualdades resultado de la *generización* de la ciudadanía, sin dejar de considerar, además, las desigualdades estructurales producidas por la clase y la raza.

Orloff (op. cit.) hace una interesante reflexión sobre las dificultades de comuni-

cación entre los estudiosos de las políticas sociales y las investigadoras feministas. Sin entrar a considerar los problemas derivados del aislamiento teórico e institucional de los estudios de género, Orloff pone el acento –para explicar la incomunicación– en las diferencias de las estrategias analíticas perseguidas por unos y otras. Muchos de los análisis de las políticas sociales son estudios sectoriales en los que no se discuten los marcos conceptuales. Se trata, por lo general, de información empírica sobre ingresos y consumos que no es adecuada para dar cuenta de las relaciones de poder. Por su parte, los marcos analíticos de los estudios de género, por lo general, presentan argumentaciones de orden abstracto tomando poco en cuenta la utilización de material empírico. La apertura de líneas de debate sobre los marcos conceptuales y los hallazgos empíricos, sin duda que aportaría beneficios y permitiría el diálogo.

Existe un grupo importante de investigadores que trata de oficiar de puente para dar cuenta de qué manera las políticas sociales de los estados modernos de bienestar benefician de forma diferencial a diversos grupos sociales, lo cual, a su vez, presenta variaciones de acuerdo al país y la época.

Si bien Orloff parte del marco analítico de la corriente de *recursos de poder*[1], critica esta postura en tanto no explica qué pasa con el género. Sin embargo, considera que el interés de esta corriente por las características cualitativas de las políticas sociales sirve para investigar las relaciones de poder. El centro de su argumentación es que para realizar un adecuado análisis del contenido y de los efectos de las políticas sociales se deben tomar en cuenta las verdaderas diferencias de género en el trabajo productivo y reproductivo y en el acceso a los derechos civiles y políticos, analizando la forma en que estas diferencias influyen en la lucha y las demandas de beneficios al Estado en su calidad de ciudadanos hombres y mujeres. Reconoce, por supuesto, la importancia que cobran igualmente las relaciones étnicas y generacionales.

Trabaja tres aspectos diferentes para incorporar el género en las elaboraciones realizadas por la corriente de *recursos de poder*:

1. Amplía la dimensión Estado-Mercado para el análisis de las políticas sociales incorporando la familia y el trabajo no remunerado de las mujeres en el suministro del bienestar social, además de la división sexual en el trabajo.

2. Amplía el análisis de las consecuencias de las políticas sociales sobre la estratificación social para incorporar las relaciones de género, en especial el tratamiento del trabajo remunerado y no remunerado.

---

1. Durante la última década los académicos del Instituto Sueco de Investigación Social, bajo la dirección de Korpi y Esping Andersen, han formulado un esquema para el análisis comparativo de los sistemas estatales sociales que se centra en tres dimensiones claves: las relaciones Estado-Mercado; la estratificación social; los derechos sociales de ciudadanía. Siguiendo la tradición de Marshall distinguen los diferentes derechos de ciudadanía: civil, política y social. Con Marshall, sostienen, se pasa de la mitigación de la pobreza a políticas sociales modernas, tales como la seguridad social y los beneficios universales basados en la ciudadanía. El esquema analítico de las políticas sociales en los estados modernos, en esta concepción, se relaciona con la forma como los estados modifican las relaciones entre las clases.

3. Critica la dimensión de los derechos sociales de ciudadanía debido al supuesto implicíto de la división sexual de tareas y la consideración de que los beneficios tienen un efecto diferencial sobre hombres y mujeres.

Propone otras dos dimensiones que ofician de clave a fin de captar el efecto de las políticas sociales sobre las relaciones de género: el acceso al trabajo remunerado, y la capacidad de formar y mantener un hogar autónomo.

En cuanto a la incorporación del género a la dimensión Estado-Mercado, Orloff destaca que la diferente manera de encarar la provisión de servicios de cuidado de niños y ancianos, y las licencias de maternidad en los distintos tipos de Estado, influyen en las capacidades de las mujeres para incorporarse al mercado de trabajo. Ello explica en parte los modelos de empleo de las mujeres como, por ejemplo, su *preferencia* por el trabajo a tiempo parcial o el trabajo zafral o precario.

La incorporación del género a la dimensión de la estratificación social, en este esquema analítico, resulta de estudiar de qué forma se presentan diferencias significativas entre mujeres y varones en las políticas sociales relativas a la seguridad social y a los programas de asistencia social.

Los programas sociales especiales a los que acceden las mujeres en los EE.UU. –observación que se podría extender a los programas focalizados dirigidos a mujeres en situaciones críticas en países latinoamericanos– exigen probar carencias de ingresos y estar solas. Estos son menos legítimos que los dirigidos a los hombres, con menos fondos y que tienden a estar más orientados al monitoreo del comportamiento y los ingresos de sus beneficiarios.

También las mujeres son mayoría en los sistemas de seguridad social, con excepción del seguro de desempleo. Las mujeres se incorporan en forma indirecta en virtud de las jubilaciones de sus maridos. Las esposas, con o sin hijos, que gozan de la seguridad social, a diferencia de las mujeres que reciben asistencia social, son consideradas *titulares de derechos*, en lugar de beneficiarias, en tanto su vínculo con un trabajador que recibe cobertura les da derecho a recibir el mismo tratamiento y los mismos beneficios. Las recientes modificaciones de la legislación relativa a la previsión social en muchos países latinoamericanos pueden incluso haber restrigido los derechos de las esposas, con fundamento en el principio de igualdad.

Por otra parte se establecen diferencias entre mujeres, ya que las que son esposas de trabajadores del sector no estructurado de la economía tienen menos posibilidades de ser titulares de estos derechos. También se acentúa la diferencia entre familias biparentales y familias monoparentales puesto que éstas, en el mejor de los casos, estarían protegidas por el sistema de asistencia social.

Otra dimensión de la ciudadanía social que Orloff analiza es la capacidad de las mujeres de formar y mantener un hogar autónomo o el grado de libertad que poseen de contraer matrimonio y mantenerlo para obtener apoyo económico. Se trata de analizar hasta qué punto el Estado promueve o no la autonomía económica de las

mujeres a través de diferentes medidas y mecanismos.

Entonces la incorporación del género en los derechos de ciudadanía social –siguiendo la argumentación de Orloff– significa mostrar que los beneficios sociales que dependen de la ciudadanía afectan de forma diferente a hombres y mujeres. Y ello es así porque difieren sus modelos participativos en el trabajo remunerado y no remunerado.

Y esto tiene que ver con la organización social de las tareas domésticas y asistenciales. Por lo tanto, es preciso mostrar que el acceso a los servicios no es realmente un derecho de ciudadanía, en tanto está condicionado por la participación en el mercado de trabajo, la edad, la etnia, el estado civil, la presencia de hijos.

Orloff reconoce que debido a que las mujeres no ejercen sus derechos políticos, al no participar en la creación y administración de las políticas, es poco probable que para ellas las políticas sociales se traduzcan en ciudadanía social.

Los fundamentos

El maternalismo ha sido utilizado como un término genérico que cubre un conjunto de argumentos discursivos y, por otra parte, como prácticas vinculadas a determinadas políticas y programas sociales fundados en necesidades y capacidades especiales de las mujeres relacionadas con sus roles tradicionales en la esfera doméstica.

El maternalismo tiene una larga historia en los debates de la política social. La sociología histórica ha recurrido a este concepto para explicar variaciones en el comportamiento político, cultural y social de las mujeres. Sobre todo ha sido empleado por historiadoras norteamericanas (Wiener, 1993) como paradigma para el análisis histórico del Estado y las políticas sociales.

Existe en EE.UU. un intenso debate alrededor de las posiciones de las teóricas maternalistas. Elshtain (1982) y Ruddick (1989) proponen una noción de ciudadanía construida sobre los valores maternales de la mujer, derivados de sus prácticas y que apunta a la transformación de la vida pública hacia una dirección más humana. Destacan cómo desde los valores maternales se resiste el poder del Estado, tal como ha sucedido en el caso de las madres argentinas de Plaza de Mayo.

Esta valoración de la maternidad está en pugna con la posición que considera que es sumamente difícil establecer en forma convincente una interdependencia indiscutible entre la maternidad biológica y la capacidad de cuidar niños pequeños o de brindar cuidados en general. Si la tendencia a criar y cuidar está vinculada con la biología, debería determinarse la influencia de la biología sobre el comportamiento social. Se argumenta que la maternidad biológica no comprende necesariamente un sentimiento de amor y cuidado hacia el niño y que ésta difiere según la cultura y la clase. Evidencias empíricas muestran que existen reacciones muy distintas hacia el embarazo, el parto y la lactancia.

Otras autoras como Dietz (1985), Phillips (1991) y Mouffe (1992) consideran que el enfoque de las diferencias maternales refuerza visiones esencialistas de las mujeres y no conducen a una política democrática. Dietz y Phillips han asumido una separación drástica entre las actividades en la esfera social y la ciudadanía política. Dietz llama a las mujeres a comportarse como ciudadanos generalizados y a abordar sus temas en los ámbitos existentes de acción pública.

En los debates realizados con ocasión de la primera reunión de la Red Alfa sobre Ciudadanía Social de las Mujeres, la pertinencia del concepto apareció vinculado al tema de la potenciación de las mujeres desde una perspectiva de derechos y obligaciones. En ese sentido el maternalismo aparece como opción que tiende a poner el énfasis en las responsabilidades de las mujeres en la reproducción de la vida cotidiana.

Otra manera de dar cuenta de las actividades de las mujeres supone pasar de la maternidad a la noción de ciudadanía social como servicio, de forma de fundamentar la expansión de la participación democrática a las políticas y programas de bienestar social.

En general los problemas referidos al ámbito privado, por definición, quedan excluidos de los temas de debate y negociación políticos. Es sumamente sugerente este enfoque desarrollado por Sarvasy (1994), que introduce la conceptualización referida a los servicios de cuidado como trabajo y como prácticas alternativas de ciudadanía que podrían ser usadas para ampliar la democracia de hoy. Considera que la perspectiva maternalista no capta la variedad de actividades que las mujeres necesitan volcar en la ciudadanía, ni hace visible la contribución de quienes enfrentan la subordinación y la exclusión mediante el desarrollo de sus habilidades de servicio. El maternalismo constituiría un marco de trabajo muy estrecho para dar cuenta de la participación social en los servicios.

Esta noción de servicio va más allá de la maternidad y se refiere a varios niveles de acción: el servicio interpersonal, el servicio a la comunidad a través de una red de agencias públicas y privadas, y los servicios del Estado.

Para desarrollar políticas más independientes y adecuadas, el mejor fundamento es el servicio y no el maternalismo dado que, como resultado de la tradición política republicana, *el servicio ya está conectado a los honores y recompensas asociados a la ciudadanía.*

Sarvasy sostiene que la noción global de participación política necesita ser expandida para incluir la actividad de servicio. La participación en los servicios podría ser organizada dentro del contexto de los mecanismos democráticos responsables.

Se apoya en la noción de ciudadanía pluralista de Hernes en tanto la despoja de las restricciones y abstracciones de lo político para permitir una variedad de ámbitos de acción política y autodeterminación colectiva. La ciudadanía pluralista no es necesariamente una experiencia fragmentaria. Mediante diferentes formas de participa-

ción –asambleas, elecciones, vecindad, servicio– el ciudadano y la ciudadana podrán desarrollar en forma más completa una noción de bienestar social público.

Considera que la tradición democrática de servicio social ciudadano, continúa hoy en día en los EE.UU. en tensión con formas burocráticas de servicio social. El desafío es lograr –como dicen las feministas democrático-sociales– que estos servicios adquieran estatus de ciudadanía para, así, encontrar otra base para realizar reclamos al Estado, conjuntamente con la participación en el mercado laboral.

Esta manera de ver las actividades de servicio remite a considerar la lógica de los servicios como diferente a la lógica del mundo productivo y a tener en cuenta el papel del género y la desvalorización del trabajo realizado en ellos. Da luz sobre la cuestión de las tensiones entre vocación y profesionalización presentes en el desempeño de profesiones tales como enfermería y docencia (Kergoat, 1991; Aguirre, Espino y Batthyany, 1997). Este enfoque le otorga una importancia fundamental en la transición hacia una forma más justa de democracia, a la redefinición de ciudadanía y a la organización de la entrada de las mujeres en la vida pública, sin que ello signifique restar importancia al modelo de ciudadano trabajador.

Esta relación entre ciudadanía social y *potenciación de las mujeres* puede servir para la comparación de distintas situaciones de transición a la democracia. Se trataría de ver de qué manera se fortalecen sus expresiones de ciudadanía social y política a través de mecanismos democráticos de participación y responsabilidad en los servicios.

Una creciente aunque aún reducida bibliografía feminista sobre el cuidado advierte que en éste están presentes los derechos de quienes reciben los cuidados y también está en juego el valor atribuído a la igualdad de género.

La interpretación de las necesidades y los derechos sociales

Fraser (1991) ha realizado una contribución importante para aclarar cómo se construye el lenguaje de las necesidades en los países de Europa Occidental y en Estados Unidos y para analizar cómo se llega a explicitar necesidades, a formular demandas que permitan superar los obstáculos para el ejercicio efectivo de los derechos existentes y a abrir perspectivas para *un cambio social igualitario y democrático.*

El discurso de las necesidades es –sostiene la autora– un medio para formular y debatir las demandas, y tiene que ver con el conflicto político a través del cual las desigualdades se elaboran y cuestionan simbólicamente.

Fraser plantea interpretar los discursos sobre las necesidades de los ciudadanos en los estados de bienestar en relación con los desplazamientos de las fronteras entre las áreas de la vida *política, económica* y *doméstica*. Le interesa el punto de vista de la política de interpretación de las necesidades, el salto desde las necesidades explicitadas en forma general como básicas a las elaboraciones más específicas. Trata de ver no los satisfactores de las necesidades sino las interpretaciones sobre las

necesidades. En este debate pueden estar presentes las interpretaciones y los intereses de los grupos dominantes. De allí que resulte relevante ubicar los lugares de la sociedad y las instituciones que desarrollan las interpretaciones autorizadas de las necesidades y las relaciones sociales vigentes entre los interlocutores o co-intérpretes.

Identifica tres momentos en la política de las necesidades: la lucha por establecer el estatuto político de la necesidad o clasificarla como un tema no político; la lucha por la interpretación de la necesidad, su definición y la determinación de con qué satisfacerla; la lucha por la satisfacción de la necesidad, la lucha por asegurar o impedir la disposición correspondiente.

Por otro lado, encuentra que existen diferentes recursos discursivos disponibles para los miembros de una colectividad dada, enfrentados a sus demandas. Los lenguajes oficialmente reconocidos con los que se pueden argumentar las demandas: por las necesidades, los derechos, los intereses. Los términos disponibles para ejemplificar concretamente demandas en esos discursos: términos terapéuticos, administrativos, religiosos, feministas.

El marco conceptual que nos propone da especial énfasis a las *fuentes de argumentación* aceptadas para juzgar demandas en conflicto: expertos, intermediarios, votación por mayoría, interpretaciones de las personas cuyas necesidades están en cuestión; las *convenciones narrativas* disponibles para construir las historias que son constitutivas de identidades sociales; los *modos de subjetivación*, esto es, formas mediante las cuales varios discursos ubican a las personas a quienes se dirigen como sujetos de un tipo específico, dotados de ciertas capacidades de acción, como víctimas o como activistas, entre otras.

El discurso sobre las necesidades se presenta entonces como un espacio en contienda, donde los grupos con recursos discursivos desiguales compiten por establecer como hegemónicas sus interpretaciones respectivas sobre lo que son las legítimas necesidades sociales. Los grupos dominantes articulan sus interpretaciones con la intención de excluir o cooptar a sus contrincantes, y los grupos de oposición articulan su interpretación con la intención de modificar las interpretaciones dominantes.

Considerando lo que pasa en las sociedades capitalistas avanzadas plantea que las necesidades *fugitivas* –que han salido de los que llama enclaves doméstico y económico oficial– al entrar a la esfera social pueden traducirse en demandas para la acción gubernamental.

Cuando los movimientos sociales politizan necesidades previamente despolitizadas, enfrentan intereses organizados y discursos de los expertos en y alrededor del Estado.

La resolución de la argumentación sobre las necesidades se produce a través de la participación de las personas cuyas demandas están en cuestión, y/o los técnicos a través de diferentes mecanismos.

En relación al debate sobre necesidades y derechos Fraser ve la posibilidad de

traducir las demandas justificadas de necesidades en derechos sociales. Cuando las demandas de necesidades están separadas de las demandas de derechos pueden darse –dice– "formas de paternalismo". Son las burocracias que trabajan en la planificación y en los programas sociales las que determinan por sí mismas las necesidades, siendo los asistidos convertidos en clientes. En la literatura sobre el desarrollo se plantea cómo lograr que éstas respondan a las identidades concretas de aquéllos con quienes trabajan.

A partir del análisis de las prácticas recientes –referidas a incorporar el género en los proyectos de desarrollo y en las acciones de capacitación realizadas a nivel público y privado– se viene desarrollando un interesante y acalorado debate centrado, fundamentalmente, en la noción de intereses y necesidades (Moser, 1991; Kabeer, 1994; Anderson, 1992, 1996).

Académicas y analistas feministas del desarrollo han hecho una aguda crítica a las políticas de desarrollo mostrando que se centraban en un defectuoso modelo de hogar. Este estaba sustentado en la teoría sociológica convencional que presenta como base de la organización social a la familia nuclear con un jefe de familia masculino, responsable de la generación de ingresos, y una esposa que es la principal responsable de dispensar cuidado y bienestar a la familia.

Por su parte, la teoría económica de raíz liberal y la política económica fueron objeto de crítica al promover la idea de un hombre de perfil económico con intereses propios, compitiendo en el mercado, complementada con una política social que ha adoptado y busca promover la idea de una madre altruista, preocupada por el hogar y la comunidad.

Las analistas feministas del desarrollo han estado fuertemente preocupadas por establecer la definición de necesidades como base de las intervenciones y por desarrollar metodologías e instrumentos para el diagnóstico y evaluación de proyectos. Una evaluación de este debate conduce a plantear la relación entre necesidades y derechos como necesaria para garantizar la ciudadanía social de las mujeres

Fundamentos maternalistas de las nuevas políticas sociales

En varios países latinoamericanos los clubes de madres, impulsados en el marco de las políticas desarrollistas de los sesenta, expresaron la ideología maternalista, difundida desde hacía varias décadas. Existen estudios que muestran cómo esa ideología fue alimentada por la Iglesia Católica y el importante papel cumplido por el *marianismo* como representación cultural que se erige en símbolo de la identidad femenina (Montecino et. al., 1988; Fuller, 1996).

En la década de los ochenta encontramos un importante conjunto de estudios de casos que dan cuenta de las acciones colectivas de mujeres de sectores populares que, frente a la crisis económica y al agudizamiento de carencias básicas, salieron al ám-

bito vecinal prestando variados servicios (comedores, merenderos, clubes de madres, entre otros).

En algunos países donde los gobiernos dictatoriales violaron los derechos humanos, las mujeres-madres, a partir del rol materno y en ejercicio de su ciudadanía política, se convirtieron en el símbolo de la necesidad de justicia y transparencia en las políticas de seguridad interna y orden público.

Los mencionados estudios han permitido polemizar acerca del sentido y las significaciones de las reivindicaciones y demandas en cuanto a su potencialidad transformadora. Se valoran estos espacios en tanto que otorgan la posibilidad de que problemas individuales de las mujeres de estratos populares sean encarados como problemas sociales. Desde otra mirada, se analiza en qué medida son formas de asociación que se insertan en sistemas de relaciones sociales preexistentes, basadas en relaciones clientelísticas, en las que pueden provocar tensiones y, por lo tanto, potenciales transformaciones.

Desde una perspectiva macrosocial –a partir del análisis de un variado conjunto de estudios de casos– Jelin (1987) interpreta que estas acciones dan cuenta de "una lucha por la ampliación de la ciudadanía reivindicando, al mismo tiempo, las especificidades y el reconocimiento social de las mismas; una lucha política –en términos del acceso a los mecanismos de poder– pero también cultural, de búsqueda de identidades diferenciadas".

Otras interpretaciones muestran el peso de la ideología maternalista y la instrumentalización de lo femenino por el Estado, enfatizando la dificultad para la constitución de sujetos políticos autónomos.

Uno de los casos mejor estudiados ha sido el movimiento de Comedores y el Programa de Vaso de Leche en Perú de los años ochenta. Anderson (1991), interpretando la presencia de las mujeres en la vida organizativa barrial en el Perú en esa década acuñó el término "encierro comunal" para poner en evidencia que, a pesar de haber salido del "encierro doméstico", esta participación tenía sus propias limitaciones al constituir una fuerza de trabajo no remunerada, impulsada por una ideología maternalista y de compromiso social.

A pesar de que –como muestra Granados (1996) en su reciente estudio sobre el proceso de este movimiento barrial en los noventa–, muchas mujeres lograron romper ese encierro y pasaron a ser políticas, sin embargo, habrían quedado *fijadas* a las demandas por alimentos. No se llegó en este período, como acota Anderson en el prólogo del libro de Granados, a otorgar a los programas alimentarios prioridad política en la lucha contra la pobreza, ni se logró el reconocimiento social del aporte de las mujeres como un trabajo de servicio con valor económico.

Surgen otras interrogantes en los noventa que tienen que ver con los cambios regresivos en los sistemas distributivos en el marco de la disminución de los *recursos de poder* de los trabajadores. No disponemos aún de estudios que den cuenta de las

desigualdades entre hombres y mujeres provocadas por las reformas de los sistemas de seguridad social y los programas sociales que recientemente se han implantado en varios países. Deberíamos determinar cuáles han sido las consecuencias del decaimiento o de las modificaciones en las medidas protectoras a las mujeres y a otros grupos vulnerables, que muchas veces invocan el principio de igualdad.

La presencia de las madres trabajadoras ha significado una profunda restructuración del mercado laboral y de las familias, proceso que ya tiene varias décadas. El estudio de las formas en que las madres combinan sus compromisos laborales y el cuidado infantil, cuando reciben poco o ningún apoyo del Estado, mostraría cómo logran mantenerse en el mundo laboral y la adopción de nuevas formas de maternidad, en tanto que el estudio del tipo de apoyo estatal al cuidado y generación de ingresos permitiría dar cuenta de las políticas y su alcance desde el punto de vista de los derechos sociales y la ciudadanía.

Las nuevas políticas sociales referidas a los servicios que se implementan en los noventa con posterioridad a los procesos de ajuste estructural –al tiempo en que se empiezan a conformar distintos escenarios de integración regional– tienen a las mujeres-madres como el blanco de programas de emergencia dirigidos a aliviar la pobreza, especialmente la desnutrición infantil. Se disponen aún de pocos estudios que analicen cómo el Estado organiza la reproducción en esta nueva etapa y de cómo la prioridad en la pobreza conduce nuevamente a que las madres desempeñen un papel mediador entre las familias y los servicios.

En una investigación realizada recientemente en Chile por Provoste (1995), se identifican las condiciones de acceso y participación de las mujeres pobres en programas sociales en el nivel comunal. Encuentra como uno de los principales problemas la tensión entre equidad social y equidad de género. Los programas tienden a tratar a las mujeres sólo como pobres y se orientan a ciertas categorías de mujeres definidas como las más desprotegidas. Esa tensión se expresa en lo que llama la "maternalización de la política social", en dos aspectos: se observa un mayor acceso a los servicios sociales cuando las mujeres son madres y, por otro lado, surge la confusión entre objetivos y beneficios dirigidos a las familias (en los programas de salud, cuidado infantil, subsidios asistenciales) y a las mujeres, destacándose el papel mediador que cumplen las madres en las políticas contra la pobreza.

En mayor o menor medida los programas sociales dirigidos a las mujeres de sectores populares, generalmente ejecutados con apoyo de la cooperación internacional, están orientados por este enfoque.

Junto a la protección social a las mujeres pobres surgen acciones colectivas que pugnan por el reconocimiento de sus derechos sociales. Las acciones colectivas de las mujeres latinoamericanas –articuladas regionalmente– vinculadas a la movilización y presión política para el cumplimiento de los compromisos asumidos por los gobiernos en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, supone un proceso complejo

de definición de necesidades y determinación de cómo satisfacerlas. Se plantean necesidades salidas de la esfera doméstica que entran en la esfera social y se traducen en demandas para la acción gubernamental abriéndose un campo de confrontación en el que participan diferentes interlocutores: expertos, técnicos de la burocracia estatal, otros actores sociales, políticos, entre otros (Vargas, 1996; Garrido, 1994). Es en este escenario que probablemente se desarrollen interpretaciones no maternalistas sobre lo que son las legítimas necesidades sociales de mujeres y varones.

Esto nos plantea el desafío de generar nuevos conocimientos que sirvan de sustento a la formulación y debate de demandas. Ni la bibliografía sociológica tradicional derivada del estructural funcionalismo acerca de la familia, como tampoco los debates feministas acerca del trabajo doméstico, han dado cuenta de la complejidad que supone introducir los cambios derivados de la generalización de las actividades económicas de las mujeres en términos de derechos sociales.

En el período de postguerra se ha observado empíricamente una transformación estructural del mercado laboral y también de los modelos de familia, lo cual conduce a muchas autoras a reconsiderar también los conceptos de maternidad.

Las investigaciones contemporáneas muestran que las mujeres desean el trabajo remunerado porque les da una independencia e influencia dentro del matrimonio y la familia. El acceso igualitario al mercado de trabajo y salarios equitativos sigue siendo un reclamo constante de los movimientos de mujeres.

Por lo tanto, esta dimensión debe ser complementada con otra que refiere al análisis de hasta qué punto el Estado promueve o no el derecho de las mujeres a la autonomía económica.

Las políticas sociales que garanticen este derecho comprende la formulación de una conceptualización de los servicios de cuidado. La diferenciación institucional de estos servicios introduce una serie de requerimientos, lo cual plantea la necesidad de analizar un conjunto de normas relativas al contenido y a la calidad del cuidado a brindarse. Lo cual puede implicar nuevas propuestas de participación política de las mujeres (no sólo de las más pobres) y también de los hombres, especialmente en los ámbitos locales.

Ello conduce a problematizar desde la teoría social las diferentes interpretaciones circulantes en el saber *experto* sobre la relación de las políticas sociales y las familias, la maternidad y el rol que cumplen las madres y los padres. Se aportarían así líneas de debate y construcción de argumentos para colocar elaboraciones específicas sobre las necesidades de cuidados en la agenda pública, de forma que éstas adquieran estatus político y puedan discutirse las diferentes formas de satisfacerlas. Y de este modo contribuir a efectivizar el derecho al trabajo en lo relativo al acceso y a la capacidad de las mujeres de formar y mantener un hogar de forma autónoma.

Bibliografía

Aguirre, R., Espino, A., y Batthyany, K. 1997. *El personal de enfermería del Hospital de Clínicas.* Montevideo: Facultad de Ciencias Sociales. CSIC. Documento de Trabajo.

Anderson, J. 1996. Construyendo una perspectiva de análisis desde el género. Taller Latinoamericano de Formación de Formadores/as en Género. Río de Janeiro, 22 al 26 de octubre.

_____ . 1994. Ni bienestar, ni equidad: los fundamentos de la política social peruana. En: Varios autores, *Pobreza y políticas sociales en el Perú.* Lima: Universidad del Pacífico. Taller de Políticas y Desarrollo Social.

_____ . 1992. *Intereses o justicia.* Lima: Entre Mujeres.

_____ . 1991. El sueño de la casa sin cocina. En: Guzmán, V. et al., comp., *Una nueva lectura: género en el desarrollo.* Lima: Entre Mujeres.

Andrew, C. 1992. El costo de la filantropía estatal. En: Chejter S., comp., *El sexo natural del Estado.* Montevideo: Altamira-Nordam.

Barret, M. y M. McIntosh. 1995. *Familia vs sociedad.* Bogotá: TM ed.

Bock, G. 1994. Pobreza femenina, derechos de las madres y estados de bienestar (1890-1950). En: *Historia de las mujeres,*. G. Duby y M. Perrot. El siglo XX. La mujer nueva. Madrid: Taurus.

Bock, G. y P. Thane, comps. 1991. *Maternity and Gender Policies: Women and the Rise of the European Welfare States (1880s-1950s).* Londres: Routledge.

Dietz, M. 1985. Citizenship with a Feminist Face. The problem with Maternal Thinking. *Political Theory.* Vol 13, N° 1, febrero.

de Swaan A. 1992. *A cargo del Estado.* Barcelona: Pomares Corredor.

Elshtain, J. 1982. Antigone's Daughters. *Democracy.* 2:46-59.

Feijóo, M. 1994. La trampa del afecto: mujer y democracia en Argentina. En: *Mujeres y participación política.* Bogotá: TM. De.

_____ . 1992. La vida cotidiana de las mujeres madres en el marco de la crisis. En: A.M. Fernández, comp., *Las mujeres en la imaginación colectiva.* Buenos Aires: Paidós.

Fraser, N. y L. Gordon. 1994. Dependency Demystified: Inscriptions of Power in a Keyword of Welfare State. *Social Politics.* Spring.

Fraser, N. 1995. Multiculturalidad y equidad entre los géneros: un nuevo examen de los debates en torno a la "diferencia" en EE.UU. *Revista de Occidente.* Octubre.

_____ . 1991. La lucha por las necesidades. *Debate Feminista.* Año 2. Vol. 3. Marzo.

Garrido, Lucy. 1994. Las Mujeres del Sur. Documento subregional: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Montevideo: Cotidiano Mujer.

Gautier, A. y J. Heinen. 1993. *Le sexe des politiques sociales.* Paris: Côté-femmes.

Glazer, N. 1992. *Los límites de la política social.* Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Gordon, L. 1993. Gender, State and Society: a Debate with Theda Skocpol. *Contention,* Vol. 2. N°3. Spring.

Gordon, S. 1995. Equidad y justicia social. *Revista Mexicana de Sociología* 2. UNAM.

Granados, A. 1996. *Madresantas y maquiavelas bulliciosas. Mujeres y negociación política.* Lima: Calandria.

Hernes, H.M. 1990. *El poder de las mujeres y el Estado de bienestar.* Madrid: Vindicación Feminista.

Hochschild, A. R. 1995. The Culture of Politics: Tradicional, Postmodern, Cold-Modern, and Warm-Modern Ideals of Care. *Social Politics,* Fall.

Jaquette, J. Sin fecha. Género y justicia en el desarrollo económico. *Propuestas* N° 4. Documentos para el Debate. Lima: Entre Mujeres.

Jelin, E. 1987. Ciudadanía e identidad: una reflexión final. En: E. Jelin, comp. *Ciudadanía e identidad. Las mujeres en los movimientos sociales latinoamericanos.* Ginebra: UNRISD.

Jónasdóttir, A. 1993. *El poder del amor. ¿Le importa el sexo a la democracia?* Madrid: Cátedra. Universidad de Valencia. Instituto de la Mujer.

Kabeer, N. 1994. *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought.* London: Verso.

Kergoat, D. 1991. La coordination infirmière. *Cahiers du GEDISST* 2. IRESCO-CNRS.
Lagrave, R.M. 1994. Una emancipación bajo tutela. Educación y trabajo de las mujeres en el siglo XX. En: *Historia de las mujeres,*. G. Duby y M. Perrot. El siglo XX. La mujer nueva. Madrid: Taurus.
Lefaucheur, N. 1994. Maternidad, familia y Estado. En: *Historia de las mujeres*. G. Duby y M. Perrot. El siglo XX. La mujer nueva. Madrid: Taurus.
Leira, A. 1992. *Welfare States and Working Mothers. The Scandinavian Experience*. Great Britain: Cambridge University Press.
Lépine, S. 1990. L'Etat et les allocations familiales, une politique qui n'a jamais vraiment démarré. *Recherches Féministes*, vol. 3, N° 1.
Lo Vuolo, R. y Barbeito, A. 1993. *La nueva oscuridad de la política social. Del Estado populista al neoconservador.* Buenos Aires: CIEPP. Miño y Dávila Ed.
Marshall, T.H. 1950. *Citizenhip and Social Class and Other Essays*. Cambridge: Cambridge University Press.
Marques-Pereira, B. y Bizberg, I., coord. 1995. La citoyenneté sociale en Amérique Latine. Francia: L'Harmattan. CELA-IS.
Marques Pereira, J. 1993. La reducción de la intervención social del Estado. En: *Democracias posibles*. Buenos Aires: G. Couffignal, FCE.
Millán, R. 1995. Cultura de la justicia y cultura política. *Revista Mexicana de Sociología* 2, UNAM.
Moser, C. 1991. La planificación de género en el Tercer Mundo: Enfrentando las necesidades prácticas y estratégicas de género. En: Guzmán, V. et al., comp. *Una nueva lectura: género en el desarrollo.* Lima: Entre Mujeres.
Mouffe, Ch. 1992. *Dimensions of Radical Democracy Pluralism, Citizenship*. Londres: Community, Verso.
Offe, C. 1990. *Contradicciones en el Estado de Bienestar*. Madrid: Alianza Universidad.
Orloff, Ann Shola. 1993. Gender and the Social Rights of Citizenship: the Comparative Analysis of Gender Relations and Welfare States. *American Sociological Review*, vol. 58, June, pp. 303-308.
Phillips, Anne. 1991. *Engendering Democracy*. Oxford: Basil Blackell.
Provoste, P. 1995. *La construcción de las mujeres en la política social*. Santiago: Instituto de la Mujer.
Rosanvallon, P. 1995. *La nueva cuestión social. Repensar el Estado de providencia.* Argentina: Manantial.
Ruddick, Sara. 1989. *Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace*. Boston: Beacon Press.
Saraceno, Ch. 1994. The Ambivalent Familism of the Italian Welfare State. *Social Politics*. Spring.
Sarvasy, Wendy. 1994. From Man and Philanthropic Service to Feminist Social Citizenship. *Social Politics. International Studies in Gender, State and Society*. Fall.
Sen, Amartya. 1995. *Nuevo examen de la desigualdad*. Madrid: Alianza Económica.
Sineau, M. 1994. Las mujeres en la ciudad: derechos de las mujeres y democracia. En: *Historia de las mujeres*. G. Duby y M. Perrot. El siglo XX. La mujer nueva. Madrid: Taurus.
Tilly, L. y Scott, J. 1987. *Les femmes, le travail et la famille*. Paris: Rivages.
Valdés, T. 1988. *Venid, benditas de mi Padre*. Santiago: FLACSO.
Vargas, G. 1996. *Reflexiones en torno a la agenda feminista post-Beijing*. Lima: fotocopiado.
Weiner, L. Y. 1993. Maternalism as a Paradigm. Defining the Issues. *Journal of Women's History*, Vol.5. N°2.


CON CARIÑO
LA MUSICA
DE UN ABUELO

¿Pueden los ciudadanos tener familia?

Jeanine Anderson

Los esfuerzos por explicitar el significado de los conceptos de lo público y lo privado son centrales en la teoría política como en el feminismo y los estudios académicos de género. La utilidad misma de estos conceptos tiene que precisarse mejor. Ciertamente habría que examinar con mucho cuidado la tendencia común a desplegarlos como si fueran residuales el uno del otro, con la implicancia de que, entre los dos, comprehenden el mundo entero.

El tema es amplio, complejo y es mucho lo que se ha escrito al respecto. Además, hay un elemento, no siempre tomado en cuenta, que agrega otras capas de complejidad. Nos referimos a la manera en que la familia actúa como un concepto que se interpone entre lo público y lo privado, planteando un reto aún mayor para su análisis y comprensión.

En el presente escrito pretendo levantar algunos aspectos de estos viejos problemas en los debates sobre democracia, ciudadanía y género. Aquí se asume una actitud fuertemente cuestionadora con respecto a una categorización del mundo en la cual la familia está colocada siempre en el campo de lo privado y donde lo público es separado tajantemente de lo anterior. Para ello, pongo a consideración un conjunto de datos y evidencias extraídos de un asentamiento popular en Lima, Perú.

Una conclusión es que la familia está muy subteorizada en el feminismo y en los estudios de género. Al mismo tiempo, mucha de la supuesta teoría en torno a la familia, desarrollada en las ciencias sociales y en el pensamiento político occidental, se desvanece bajo una mirada crítica sensibilizada a los estereotipos de género que subyacen a ella. Este escrito pone en duda, por ejemplo, el postulado de que las relaciones establecidas en la familia son cualitativamente diferentes de otros tipos de relaciones entre actores sociales y que, por tanto, la familia es un tipo de asociación

radicalmente diferente de las asociaciones que reconocemos como parte de la sociedad cívica y el espacio público. Una de las ideas contradictorias que permea las discusiones de lo público y lo político asigna un valor positivo a la participación en este segundo tipo de asociaciones, mientras que la participación en el primer tipo –familias– parece estar reñida con el ejercicio ideal de la ciudadanía. De allí viene el título de mi reflexión: ¿pueden los ciudadanos(as) tener familia?

Ciudadanos sin ataduras

El problema

Toda teoría política contiene, explícita o implícitamente, una determinada concepción de los sujetos que forman parte de la polis, la comunidad política. Una tarea fundamental de quienes trabajan sobre lo político desde el feminismo y desde los estudios de género, ha sido explicitar los presupuestos que se esconden en el pensamiento político con respecto al género de los miembros de la polis y a los roles de género que cumple cada quien. Es indudable que la filosofía política de raíz europea –la única tradición legitimada en los países latinoamericanos– visualiza al ciudadano normativo como un ciudadano varón. Para algunos, las mujeres están descalificadas como ciudadanas simplemente por ser mujeres. Para otros, aunque las mujeres son y deben ser ciudadanas, su condición de género las condena a ser ciudadanas menores, auxiliares, limitadas por diferentes formas de minusvalidez.

Otro de los subtextos de toda teoría política se refiere a la familia. Es evidente la íntima relación que existe entre la visión que se tiene de la mujer y la visión de la familia. Es precisamente la forma de integración de la mujer y del varón en la familia (para ser más exacta, la forma cómo se construye social e ideológicamente esta integración) lo que acarrea una determinada integración de cada género en el sistema político. Con frecuencia se infiere que hay una relación histórica entre la ampliación de la ciudadanía y la reducción del tamaño y el ámbito de acción de la familia. En apariencia, estos dos procesos se dieron en paralelo en Europa y Norteamérica, por lo que podría pensarse que la reducción del grupo familiar, su nueva composición nuclear, y el alejamiento de este núcleo de las otras ramas de un grupo de parentesco mayor, era una suerte de condición necesaria para que *el ciudadano* pudiera emerger de acuerdo a la imagen hegemónica vigente: esto es, una figura solitaria, autoconducida, íntegra y no influida por ataduras comprometedoras. Esta imagen de ciudadano se trasluce en la vasta mayoría de tratados sobre la ciudadanía en los cuales son conceptuados como seres autónomos, individuos que ocupan un cuerpo y que poseen una historia y una trayectoria personal. A partir de ese cuerpo y esa historia individual proyectan su futuro, identifican sus intereses y actúan políticamente.

Por otro lado, los derechos de ciudadanía atañen a individuos que poseen las características señaladas. Admitir la posibilidad de fronteras borrosas entre un indivi-

duo y otro pondría en duda la naturaleza de dichos derechos y levantaría preguntas sobre la forma de ejercerlos. Más aun, los ciudadanos deben tener la capacidad para formar una opinión propia, lo cual permite que el criterio de uno se sume al criterio de otro, matizándolo y ampliándolo. Un exceso de compenetración entre ciudadanos pondría en riesgo un funcionamiento de la democracia en el cual las decisiones respecto al bien común emergen de la diversidad de voces, ninguna que duplique exactamente a otra.

En los textos clásicos de occidente, las mujeres son cuestionadas o abiertamente descalificadas como ciudadanas precisamente por su enraizamiento en, e incapacidad para liberarse de, relaciones de cercanía e intimidad con otros. Hay varias dimensiones de este predicamento que distintas estudiosas y estudiosos han analizado:

1) Independencia/dependencia. Algunos pensadores enfatizan las relaciones de dependencia –psicológica, social y especialmente económica– que las mujeres establecen frente a otros, en particular frente a varones miembros de su familia. Fraser y Gordon (1994) hacen un magistral análisis de la historia del concepto de la dependencia en el pensamiento social europeo y norteamericano. La dependencia significaría para las mujeres un condicionamiento que se opone a algunas de las características fundamentales de los ciudadanos plenos. Una persona dependiente no logra colocarse en la posición ideal del ciudadano que, desde su propia ubicación, discierne y sopesa sus intereses particulares y los intereses generales. Se asemeja al planteamiento de Kohlberg en el sentido de que las mujeres no forman juicios éticos con la misma capacidad de generalización que los hombres y, por lo tanto, son menos "justas", argumento disputado por Gilligan (1982).

2) Contratos explícitos versus contratos implícitos (borrosos). La idea del contrato es fundamental en el pensamiento político occidental, tal como lo demuestra Pateman (1988) en su importante texto *The Sexual Contract*. En algunas versiones, los ciudadanos contratan entre ellos para establecer un determinado orden de las cosas; en otras, contratan con el Estado para garantizar el cumplimiento de obligaciones libremente asumidas y la correspondiente defensa por éste de sus derechos. La esencia de un contrato es la limitación nítida y explícita de las obligaciones a las que ambas partes se comprometen para efectos del intercambio que el contrato establece y ampara. Pero las mujeres aparecen como seres involucrados en relaciones de intercambio que no tienen límites definidos. La familia implica un entramado de obligaciones mutuas abiertas y, hasta cierto punto, sujetas a los azares del destino. Una mujer, al convertirse en madre, no puede saber si su hija será *normal*: es decir, una persona que se desarrolla y alcanza la madurez suficiente como para funcionar en forma autónoma luego de un determinado número de años. Puede ser que esta hija demande cuidado y atenciones de la madre durante el resto de su vida. En ese sentido también las mujeres son *desordenadas* –calificación que trabaja Pateman (1989) en otro conocido texto suyo, *The Disorder of Women*– y desordenadoras en relación con

un orden político que pretende regirse por normas y procedimientos fijos y reconocidos públicamente. Las mujeres participan de contratos implícitos, algunos de los cuales son, en apariencia, sin límites. La polis requiere ciudadanos en condiciones de cumplir sus contratos con los otros ciudadanos y con el Estado, sin que se interpongan otras obligaciones que pueden contradecirse con las primeras y que son impredecibles e incontrolables.

3) Condicionamientos emocionales. Varias líneas de pensamiento asumen que las relaciones familiares son comprometedoras emocionalmente de un modo que ningún otro tipo de relación humana lo es. En el extremo del panorama están los sociobiólogos, quienes esgrimen argumentos respecto de la manera en que la selección natural actúa sobre genes que buscan asegurar su continuidad (sobrevivencia) en el tiempo, y sobre cómo esa situación redunda en arreglos sociales en los que las personas reconocen afinidad con quienes son genéticamente más cercanos. Sin llegar a tales extremos, para buena parte de la filosofía social y política occidental, las lealtades que se crean a través de las relaciones de parentesco son visualizadas como irracionales (no razonadas) e irresistibles. Aunque quisieran hacer lo contrario y aunque hacerlo serviría mejor a sus propios intereses, las personas son arrastradas a asignar prioridades y prestar los servicios que sus vínculos familiares les exigen. Los sistemas democráticos de gobierno estipulan leyes y normas que justamente pretenden mantener bajo control estas tendencias, supuestamente naturales y aún biológicamente determinadas. Bajo esta óptica, se establece una suerte de división del trabajo ético entre varones y mujeres: ellos defienden principios abstractos y universales a costa de los más cercanos; ellas luchan por los intereses de las personas más cercanas y por proteger la relación con estas personas.

4) Sometimiento forzoso a otro. Nuevamente Pateman, en *The Sexual Contract*, ha examinado con especial detenimiento las implicancias de un sistema familiar o de parentesco en el cual la relación conyugal trae implícito el derecho de una de las partes (el marido) a someter a la otra parte (la esposa) con el arma de la violencia, tipificado en el acceso sexual contra la voluntad de la cónyuge. MacKinnon (1987), secunda a Pateman en una línea similar de análisis que interroga una serie de prácticas y arreglos sociales más allá del vínculo conyugal, las cuales parecen encerrar la misma implicancia de derecho masculino de invasión violenta y arbitraria de la intimidad e incluso integridad física de las mujeres. Aunque eso fuera un derecho que los maridos y los hombres ejercieran sólo ocasionalmente y bajo provocación, ciertamente la situación pondría en duda –tal como insiste Pateman– la posibilidad de considerar a las mujeres como miembros de la comunidad política de la misma manera y en las mismas condiciones que los hombres.

Hasta aquí la tradición y el marco de referencia que la cultura occidental establece. Pero el caso es aún más complicado. Diversas fuentes antropológicas, al tratar la forma en que la mujer es visualizada en culturas no occidentales, presentan una

imagen similar a la combinación de ideas subyacentes en el pensamiento político occidental que acabamos de examinar. En un texto clásico, Michelle Rosaldo (1975) plantea como una regla universal de las sociedades humanas no sólo la identificación de la mujer con las funciones reproductivas, sino su inmersión en relaciones con infantes, niños y jóvenes (en general, personas en proceso de maduración, *humanización* y *culturización* todavía no plenamente logradas) las que, por asociación, ponen en cuestión la madurez plena de quienes los nutren y los conducen a la adultez. En el mismo artículo, Rosaldo sostiene que otra consecuencia de este enraizamiento es la percepción de las mujeres como integrantes de grupos familiares que constituyen meros segmentos de la sociedad y que difícilmente pueden superar esta condición para efectos de plantear intereses universales o comunes.

Sin embargo, los hombres también establecen compromisos con grupos primarios. También tienen lealtades frente a una red personal de parentesco, vecindad, amistad, afinidad y compañerismo. A diferencia de las mujeres, los varones suelen ser conceptualizados como seres que –hasta cierto punto– flotan por encima de sus amarres con grupos primarios, preservando siempre una capacidad para distanciarse emocionalmente. Pueden de manera más fácil mantener bajo control voluntario y racional sus obligaciones y lealtades de acuerdo a la construcción hegemónica de la masculinidad en las sociedades occidentales. Pero la existencia de determinadas construcciones culturales no constituye una prueba suficiente de las diferencias entre varones y mujeres en esta conexión. Podría constatarse, en esta área también, una brecha grande entre la simbolización de los géneros y las prácticas sociales en las cuales ambos están operando y llevando adelante sus vidas. Esta es una de las posibilidades que quiero explorar. Entretanto, queda reforzada la idea de que aquí hay un problema que estamos llamadas a tematizar, analizar y teorizar.

Asociaciones familiares y no familiares

Hombres y mujeres en asociaciones

Las fuentes antropológicas parecen sustentar el juicio de que los hombres tienen mas facilidad para establecer asociaciones y con más frecuencia que las mujeres. En una diversidad de culturas históricas y actuales, los varones se agrupan en organizaciones militares, grupos de caza, organizaciones políticas, grupos de trabajo, hermandades religiosas, asociaciones dedicadas a actividades deportivas o a juegos competitivos, pandillas y clubes diversos. Hasta cierto punto, la frecuencia con que se observa a los varones en este tipo de asociaciones puede ser un artefacto de su especialización en actividades como la defensa del grupo, las tareas de gobierno, la administración de las leyes y la administración pública en general, en particular, en sociedades intermedias (agrícolas, horticulturales).

No es casual que Sanday (1981), en su estudio comparativo del poder femenino y dominio masculino, dirija una mirada atenta a toda la evidencia que se refiere a la formación y las funciones de organizaciones de mujeres, de varones y mixtas en las 180 culturas que ella compara y analiza. De hecho, la dominación masculina pasa por un control por los hombres de organizaciones políticas, judiciales y militares. En muchas sociedades, mantienen un monopolio sobre este tipo de asociaciones. Aunque insiste en su importancia y su relación con el ejercicio de poder por las mujeres, Sanday acepta la menor frecuencia con que establecen asociaciones en culturas no occidentales. Considera que la presencia de tales asociaciones femeninas se ubica como último peldaño (el más difícil que se dé en la realidad) en su "escala de poder y autoridad femenina".

Cierta evidencia antropológica sugiere que las asociaciones de los hombres se diferencian de las asociaciones de mujeres según dimensiones de formalización y reconocimiento público. Es indudable que las organizaciones militares tenían y tienen una estructura jerárquica con claras líneas de mando. En muchos textos antropológicos, las organizaciones masculinas se retratan, en términos weberianos, como impersonales y racionales, como asociaciones cuyos fines explícitos –económicos, políticos y otros– predominan sobre los fines sociales y expresivos.

Un interesante estudio de dos antropólogas, Kathryn March y Rachelle Taqqu (1986), pone en cuestión varias de las verdades aceptadas acerca de la formación de asociaciones extra-familiares por varones y mujeres en sociedades no occidentales. El libro revisa una gran cantidad de información sobre la constitución de asociaciones entre mujeres en diferentes países y tradiciones culturales del mundo en desarrollo y, de ese modo, matizan las versiones que han hecho de esto casi una exclusividad masculina. En una vasta gama de contextos socioculturales, las mujeres establecen asociaciones rituales, económicas, recreativas, políticas, artísticas y gremiales. Muchas de las formas de organización femenina que se constatan en el mundo mezclan estas funciones en diversas combinaciones y proporciones. El hecho que sólo recién, bajo la influencia del feminismo académico, se haya descubierto la riqueza de las formas organizativas femeninas en culturas tradicionales, es sin duda una nueva evidencia del sesgo masculino que permea el registro etnográfico.

Recordando una distinción hecha por Bujra (1979) en una colección anterior sobre el mismo tema, March y Taqqu trabajan dos grandes categorías de asociaciones femeninas: unas que están claramente animadas por proyectos propios de las mujeres y otras que asumen un carácter de tipo defensivo frente al poder y dominio masculinos. Ejemplos del primer tipo serían las asociaciones de comerciantes al por menor y mayoristas-transportistas de larga distancia en sociedades del oeste de Africa; las asociaciones de bailarinas, músicas y artistas de teatro en algunas culturas tradicionales asiáticas; las agrupaciones de especialistas de la salud (parteras, curanderas, chamanes femeninas) en numerosas partes del mundo. Un ejemplo del segundo tipo,

asociaciones femeninas de carácter defensivo, son las redes vecinales que están listas para intervenir en defensa de una mujer cuyo esposo se muestre violento, sea alcohólico o no provea a la familia. Otro ejemplo son las organizaciones de prostitutas que se apoyan mutuamente previniendo el asedio de la policía y/o de los clientes. Como este segundo caso sugiere, los dos tipos de asociaciones, propositivas y defensivas, frecuentemente se combinan en una misma organización.

El estudio de March y Taqqu, así como otros en esa misma línea, dan evidencia de cómo la vida asociativa de las mujeres es otro de los ámbitos donde se manifiesta el histórico sesgo androcéntrico de las ciencias sociales, determinando el subregistro de hechos asociados a las mujeres en todos los casos donde éstas nadan a contracorriente de las expectativas de los analistas occidentales. Lo cierto es que la base empírica para mucho de lo que se dice sobre la participación en organizaciones, tanto de hombres como de mujeres, refleja un alto grado de selectividad a nivel de la observación de los hechos. Las asociaciones de mujeres no sólo han sido subestimadas sino que ha habido una lectura sesgada de su importancia y funciones.

Con la constatación de la participación de mujeres en redes y asociaciones extra-familiares en una diversidad de contextos, se impone la tarea de volver sobre su participación en la familia a fin de reevaluar el significado de ésta en la vida de las mujeres y –aspecto sobre todo pertinente para el presente trabajo– la relación y semejanza entre su participación en grupos familiares y grupos que trascienden[1] a la familia.

Lo doméstico, la familia y los nudos del feminismo

La familia es un tema difícil para el feminismo y para los estudios académicos de género. A pesar del mucho debate que se ha dado alrededor de esta institución, la construcción de teoría en torno al tema es una tarea que está lejos de agotarse. Se observa una palpable ambivalencia y ambigüedad, hecho que no sorprende si consideramos la opresión que las mujeres han sufrido en las variadas formas de familia. La ambivalencia y ambigüedad se dejan percibir, una vez más, en varios trabajos que tratan de la familia y el ámbito de lo doméstico en una publicación reciente, *Feminism Beside Itself* de Elam y Wiegman (1995). Esta colección reúne artículos que, desde dentro del feminismo, echan una mirada crítica a sus contradicciones, complejidades y nudos no resueltos.

Pese al reto que ello significa, los temas de la democracia y la ciudadanía tendrían que discutirse en íntima vinculación con el tema de la familia. Moller Okin (1989) pone énfasis en cómo la familia funciona como el lugar y el grupo humano

---

1. Este tipo de fraseo –en el cual la familia se trasciende, se amplía o se supera– es utilizado continuamente en los análisis de la familia. No es inocente en la medida en que trae la implicancia de que la familia es algo estrecho y restringido que necesita ampliación (una especie de mal necesario) y, en definitiva, algo terrestre que se contrapone a la trascendencia.

donde los niños aprenden –o simplemente dejan de aprender– criterios de justicia. En la familia moderna, normativamente *democrática* y liberada de las peores expresiones del autoritarismo patriarcal, las personas adquieren un sentido de derecho propio y ajeno o, inversamente, pierden el momento para adquirirlo. Practican las virtudes democráticas de la discusión razonada, la puesta de acuerdo, la negociación y la transacción. Cuando la familia funciona de la manera que se asume actualmente como deber ser, las personas se ejercitan en el reconocimiento de las diferencias y el respeto al *otro*. Aunque esto no es un argumento de mayor prominencia en los análisis de Habermas y otros que han desarrollado su pensamiento, la convivencia en la familia permite practicar las habilidades identificadas con la actuación de las personas en la "esfera pública" habermasiana. Pensar que esto sólo puede ocurrir en asociaciones extra-familiares parece simplemente prejuicioso: ¿qué razón *ex ante* lo justifica?

Familias normativas, familias comunales

Parte de las dificultades que tenemos para teorizar adecuadamente la familia se deben a la tendencia dominante de restringir la discusión sólo a algunas de las formas y lógicas familiares presentes en las sociedades humanas. No se trata únicamente de rescatar formas exóticas de parentesco y familiaridad relacionadas a sociedades africanas, sur asiáticas y no occidentales en general. Se trata inclusive de dar igual valor y representación a maneras diversas de organizar familias y los significados asociados a ellas en la gran familia en culturas de raíz europea.

En esta línea, Ilona Ostner, estudiosa alemana de la política social, hablando en un seminario sobre la investigación comparada en torno a los Estados de bienestar (1997), hizo una merecida crítica a la preeminencia normativa del sistema familiar de los países escandinavos y anglosajones en la mayoría de los debates. Los sistemas liberales y social demócratas (en la clasificación de Esping-Andersen de los Estados de bienestar) asumen una preeminencia normativa por sobre los sistemas comunitarios identificados con el sur de Europa y algunos países asiáticos. La idea implícita es que la familia del norte de Europa y los países de influencia anglosajona (EE.UU., Australia, Canadá) –esa familia pequeña, radicalmente nuclearizada y de funciones drásticamente recortadas– es de alguna manera superior a las formas de familia con plena vigencia en otras regiones de Europa; que de alguna manera, con el avance de la modernidad y la postmodernidad, la familia pequeña está destinada a reemplazar a los sistemas familiares que conservan la vitalidad de un mayor número y amplitud de vínculos.

La reivindicación de formas más comunales de la familia y de un sistema de organización social que hace menos separación entre la familia y otros tipos de relaciones y asociaciones, es importante para quienes nos movemos en sociedades latinoamericanas. Toda la evidencia sugiere la enorme vitalidad de las familias extensas

y de las redes construidas a partir de vínculos familiares en la región latinoamericana. Una de las investigadoras que más ha contribuido a la documentación de las funciones, formas y capacidades de las familias y los sistemas de parentesco en distintas clases sociales y países de América Latina es Larissa Adler Lomnitz. Su texto clásico, *Cómo sobreviven los marginados* (1975), analiza los intercambios de servicios y ayuda que toman lugar en el interior de redes de parentesco y vecindad en un barrio pobre en Ciudad de México. En otro importante estudio (1987), compartido con Marisol Pérez-Lizaur, sigue las ramas, interconexiones y fortunas de una gran familia burguesa del mismo país.

Al mismo tiempo hay que resistir la tentación de idealizar la familia latina, como la propia Adler Lomnitz y otros autores han demostrado. Decir que los vínculos existen no equivale a decir que sean vínculos siempre felices, solidarios y no problemáticos. Reconocer que pueden existir fracturas, decepciones y faltas al ideal sólo refuerza mi argumento de que la familia es como cualquier asociación, cuestionando los planteamientos que la consideran cualitativa *y esencialmente* diferente de otro tipo de asociaciones humanas.

¿Pueden separarse *familias* de *asociaciones*?

La evidencia revisada sugiere que existe un continuo en lo que se refiere a las formas de asociación de hombres y mujeres, continuo que va imperceptiblemente de las formas íntimas de asociación familiar hasta, en el otro extremo, las organizaciones altamente formalizadas y burocráticas. Según esto, el ámbito del parentesco no es esencialmente distinto de otras clases de organización. Ello es concordante con el enfoque que propugnan algunos economistas "institucionales" contemporáneos interesados en la explicación de conductas que pasan por la lógica de grupos a diferencia de un *Homo economicus* individual. Entre ellos están Amartya Sen (1990) y Gary Becker (1981) quienes, desde posiciones radicalmente distintas, han contribuido a una revisión de la relación que se establece entre cónyuges.

El contenido preciso de los vínculos que establecen el parentesco y la familiaridad varía de un grupo cultural a otro. En la tradición occidental estos vínculos se caracterizan, idealmente, por una especial cercanía emocional, la obligación de ayudar, la permanencia en el tiempo (de allí sus implicancias para la proyección de futuro que hace cada individuo), la posibilidad de hacer y atender demandas que van más allá de la simple reciprocidad. Schneider, antropólogo especialista en los sistemas de parentesco, cuando pretende captar lo específico de estos vínculos en todas las sociedades humanas, abstrae de ellos la noción –expresada en una poética frase– de "diffuse and enduring solidarity (solidaridad difusa y perdurable)".

Podemos aceptar que las relaciones familiares en todas las sociedades y tradiciones culturales tengan ese carácter que, dicho sea de paso, deja la mayor parte de su

contenido siempre a merced de la variabilidad cultural. Sin embargo, no se ha comprobado que estas mismas cualidades no sean parte de los vínculos que se establecen en otros tipos de asociaciones. En realidad, los vínculos en grupos primarios familiares son solamente un caso específico respecto de aquellos que se establecen en otros grupos. Para la mayoría de los seres humanos, la familia y el grupo de parentesco va deslizándose gradualmente en grupos mayores: clanes, tribus, grupos de identidad étnica o racial, grupos de afinidad, clases sociales *para sí*, asociaciones diversas, partidos políticos, nacionalidades.

Tales lucubraciones dan un nuevo sentido a la proposición de que la sociedad civil emerge de un sustrato de la familia y grupos primarios. Usualmente se asume que esta emergencia implica un corte abrupto y radical con la familia; incluso, significaría su rechazo. No obstante, hay otra manera de concebir el enraizamiento de las asociaciones cívicas en lazos familiares, esto es, no colocar a ambas en contraposición sino asumirlas precisamente como un continuo ininterrumpido. Este nuevo planteamiento tiene implicancias para la agenda de investigación que nos trazamos. Se trataría de estudiar los elementos más estrechamente asociados a los lazos familiares y las formas como vuelven a aparecer en asociaciones cívicas, económicas y políticas. Al mismo tiempo –ampliando lo iniciado por los economistas institucionales y de la corriente de la Nueva Economía Doméstica– se trataría de ubicar en las asociaciones familiares los elementos de racionalidad y elección tradicionalmente identificados como exclusivos del mundo organizativo extra-familiar.

Mi argumento implicaría que el comportamiento de los y las líderes de las organizaciones de la sociedad civil no sería cualitativamente diferente de su comportamiento en grupos familiares y primarios. Un conjunto de datos de un barrio popular en Lima permite probar esta hipótesis. Al mismo tiempo, hace posible examinar la relación entre organizaciones familiares y otras del ámbito local que muestra el típico (para ciudades peruanas) complemento de asociaciones vecinales abocadas al mejoramiento de la comunidad y del bienestar de quienes viven allí. La siguiente sección desarrolla este punto.

La prueba: un barrio peruano

Introduciendo Leoncio Prado

En mi actividad como investigadora, la comunidad barrial de Leoncio Prado, ubicada al sur de Lima, ocupa un lugar central. Muchos de mis nudos teóricos y prácticos los he sometido a prueba en esta colectividad de unas mil familias donde he tenido la oportunidad de realizar estudios desde 1978 hasta la actualidad. Estos estudios, de índole teórica y práctica, me han permitido mirar un mismo problema desde diferentes ángulos y en referencia a distintos sectores de la población. Aquí voy a

ceder una vez más a la tentación de examinar la relación entre lo doméstico y familiar y la ciudadanía, tal como se la ejerce en el ámbito de la comunidad.

Leoncio Prado es bastante típico entre los asentamientos barriales de Lima en tanto se originaron en procesos de ocupación informal. La zona comenzó a ser poblada a partir de 1970, lo que le da algo más de un cuarto de siglo de historia de organización interna y de una relativa abundante dotación de infraestructura básica y social. Como en otros barrios pobres de la ciudad, este proceso de acumulación y mejoramiento se ha sustentado en múltiples organizaciones de pobladores que se encargaron de la labor de gestión, obtención de recursos, tramitación de contratos y licencias, construcción de obras, programas comunitarios, entre otras actividades.

La dirigencia barrial como ejercicio de la familiaridad

Un primer aspecto a poner bajo la lupa es el sentido de la dirigencia en organizaciones barriales tal como es vivida por los pobladores de Leoncio Prado. Quiero discutir con una larga tradición –de lejos la tradición predominante– en las ciencias sociales peruanas, que asemeja el rol y el medio de acción de los dirigentes barriales al modelo del sindicato y los aleja, implícitamente, de los ámbitos del parentesco. En la mayoría de los análisis no existe siquiera la posibilidad de que el posicionamiento de los y las dirigentes en las organizaciones tuviera algo que ver, aun remotamente, con lo familiar.

Esta visión depende de un acercamiento altamente selectivo de la realidad. Sin embargo, escuchando la voz de ex dirigentes que hablan de su *período* en un cargo de responsabilidad, se recoge un tono de casa, de familiaridad, a veces incluso de riñas domésticas cuando los miembros de las organizaciones no se conducen como debe ser.

Una dirigenta mujer de un comité del programa de desayunos infantiles conocido como Vaso de Leche, por ejemplo, habla de la siguiente manera de su turno en la repartición de la leche y de las dificultades que enfrentó:

> Solamente no me daban apoyo en cuanto a los pedidos de las mamás. A veces otros, como son paisanos (migrantes del interior, específicamente de la zona andina), me cerraban la puerta y a veces tenía que rogarles para darle a los niños. A veces para el programa de leche no querían participar. Yo tenía que rogarles, decirle que esto es bien. Así, conversándole todos participaban. Hasta mientras que yo funcionaba como dirigente, todos han participado. Una vez que ha habido cambio, ya las mamás se han retirado, que no se comprendían con las demás señoras.

La percepción de esta dirigenta de tener que conducir y corregir a las bases de la organización (madres de familia cuya función organizacional era la aparentemente sencilla tarea de recoger los suplementos alimentarios que el Programa proporciona-

ba para sus hijos pequeños) alcanza un patético punto máximo en la fiesta de Navidad. Tradicionalmente las organizaciones de barrios pobres en las ciudades peruanas procuran celebrar esta fecha con la preparación de chocolate caliente y el reparto de un trozo de panetón:

> Hay una fecha, en Año Nuevo, en Pascua. Yo les llamé a todas las mamás que salieran para dar chocolateada en la puerta del local comunal. Con sus tazas que hicieran cola. No hicieron cola nada; no me hicieron caso. Yo tenía que venir a la manzana con mi balde, con mi panetón, tocando la puerta. A todos tenía que darle y de paso nos dio chocolates para los niños. Tenía que repartir sus chocolates, su panetón y su leche. A la última hay que rogarles.

Un dirigente varón comenta en términos comparables su experiencia en el papel de coordinador de la organización vecinal a nivel de la manzana, donde residen entre 30 y 35 familias que adelantan intereses comunes:

> (¿Qué fue lo más duro que le tocó vivir en ese año de dirigente?) Bueno, de desempeñarse pues. A buscar a todos los dirigentes, a juntarnos. A veces venían, a veces no venían. Nos encontramos con 4 o 5 no más y éramos como 24 personas que teníamos que reunirnos. No están (estaban) ahí. Uno tiene que ir a llamar a su casa, a dejar una esquela, así.

Otro hombre, también en base a su experiencia como coordinador de la organización de la manzana, recuerda como había ido a "sacar de la cama" a algunos vecinos renuentes a asistir a las reuniones. "Pero he cumplido; lo he hecho", dice.

Buena parte de la actividad de los dirigentes se aboca a dos funciones que ayudan a sustentar la interpretación alternativa –o, cuando menos, ampliada– de su rol que propongo aquí. Una de estas funciones es la educación de los demás y la otra es la resolución de conflictos. Tanto mujeres como hombres recuerdan su *período* como dirigentes en términos de lo que aprendieron. Pero además recuerdan con satisfacción la sensación que tuvieron de poder trasladar sus conocimientos hacia las y los miembros de sus organizaciones. Sus nuevos conocimientos equivalen a un curso de Realidad Peruana, tal como se enseña en la universidad: cómo funciona la sociedad peruana, cuáles son los diferentes grupos que contiene, cuál es el nivel y estilo de vida de todos ellos, cómo se manipula el sistema político, quién controla recursos de diferentes tipos, cuáles son los procedimientos que dan acceso a distintas puertas.

La tarea de enseñar a los demás muchas veces se confunde con la función que tienen los y las dirigentes de resolver los conflictos de unos y otros. Frente a una pregunta sobre quiénes son los dirigentes, mujeres y varones que más recuerdan, las personas entrevistadas hablan de aquellos/as que muestran capacidades como: dar consejos, actuar como una guía, imponer disciplina, dar soporte y apoyo e intermediar en las relaciones entre los vecinos. El buen o la buena dirigente *comprende*: se

muestra paciente, incluso dispuesto o dispuesta a torcer las reglas en casos de personas vecinas que tienen problemas especiales para cumplir con sus cuotas o la parte del trabajo comunal que les toca. La dirigencia, bien ejercida, implica actuar con la sabiduría de un o una pariente mayor.

Las organizaciones barriales: del parentesco a lo cívico-político

La otra línea de evidencia para problematizar la relación entre la familia y el ámbito doméstico, por un lado, y lo político, por el otro, concierne a las organizaciones presentes en el barrio de Leoncio Prado. Pareciera que este asentamiento –pobre, como nota dominante, y en proceso de consolidación– es bastante representativo de muchos otros. Inclusive, una segunda investigación (Anderson, 1996)[2] que más directamente habla sobre la red de organizaciones en la comunidad abarcó a un asentamiento contiguo, Ollantay, nacido casi simultáneamente con Leoncio Prado.

En ambos asentamientos existe una variedad de organizaciones de todo tipo. Hay un total de 31 organizaciones en Leoncio Prado[3] y un total de 34 en Ollantay, aunque es incluso algo más pequeño en términos del número de lotes de viviendas que contiene. Uno de los resultados más importantes de este estudio, desde la perspectiva de la acción y de la formulación de estrategias a nivel de proyectos de desarrollo y proyectos políticos que pretenden involucrar a los pobladores urbanos, es haber demostrado que la vida organizativa de estas comunidades es bastante más diversa y compleja de lo que se pensaba.

De toda la gama de organizaciones presentes se ha optado por examinar los clubes de fútbol, opción muy poco usual en el análisis que se hace del fenómeno barrial en el Perú, pero hay fuertes razones para ello. Una es su peso numérico: en Leoncio Prado, los 7 clubes de fútbol constituyen el 22 por ciento de todas las organizaciones detectadas y en Ollantay, los 14 clubes de fútbol agrupados en una liga con directiva propia constituyen el 44 por ciento del panorama organizativo.

Tampoco puede decirse que los clubes de fútbol son organizaciones pequeñas mientras que las otras –comedores, por ejemplo– son organizaciones con una cantidad importante de miembros, cosa que anularía la ventaja numérica de los clubes. La verdad es que todas son pequeñas, excepción hecha de la asociación de vendedores

---

2. El análisis de la red de organizaciones era una responsabilidad particular que me recaía como parte de una investigación mayor cuyo co-director fue Luis Soberón. Agradezco el apoyo de la Fundación Ford para esa investigación y del IDRC para la realización del estudio sobre la dirigencia. Esta segunda investigación abarcó una serie de temas relacionados con los géneros y las generaciones en el proceso de desarrollo local.

3. La definición de organización no está libre de ambigüedades y nuevas arbitrariedades. Para que un grupo fuera considerado organización tenía que cumplir con tres requisitos básicos: contar con un nombre que le diera personalidad en el asentamiento, tener por lo menos dos años de funcionamiento y tener una mínima formalización de su vida institucional mediante un estatuto o reglamento y un libro de actas o algo equivalente.

del mercado y las asociaciones de padres de familia que corresponden a centros educativos. Dado el peso numérico de los clubes de fútbol, éstos son el modelo de asociación que un gran sector de pobladores y pobladoras tienen en su entorno y en los cuales han participado directamente.

Una razón aún más fuerte del por qué los clubes de fútbol son importantes desde el punto de vista de mi argumento son las funciones que asumen (la membresía es de la pareja). De ninguna manera su actividad está restringida a la realización de partidos de fútbol. Tal es así que uno de los puntos que con mayor frecuencia aparece en las agendas de sus reuniones es el lavado de las camisetas y el cuidado de la pelota y de las zapatillas de los jugadores de semana en semana, entre partido y partido. El lavado de las camisetas es un punto especialmente conflictivo. En algunos casos los esposos pretenden comprometer a sus esposas e hijas *in absentium* para esta pesada tarea, pero la mayoría de las veces ellas están presentes para las discusiones respecto del turno, lo cual no siempre garantiza su cumplimiento.

Además del fútbol, los clubes auspician otros tipos de actividades deportivas, como partidos de voleibol donde participan las familiares mujeres. Pueden haber partidos infantiles, juveniles y de hombres adultos que, siendo socios del club, no tienen el nivel de habilidad que se requiere para integrar el equipo. Luego, cada partido va acompañado de la venta de bebidas y viandas y generalmente termina en una reunión donde la cerveza fluye y los platos de comida están a disposición. Puede concluir en un baile donde participan todos los miembros de las familias socias y de otras allegadas.

Varios clubes tienen un núcleo de miembros que comparten un mismo pueblo de origen. Decir que proceden de un mismo lugar en la sierra es prácticamente equivalente a decir que son parientes puesto que las comunidades campesinas andinas son marcadamente endogámicas Muchas veces los clubes asumen el carácter de hermandades religiosas y festejan anualmente el santo patrón o la patrona de su pueblo de origen. Sacan en andas la imagen por el asentamiento y las inmediaciones y auspician una fiesta al estilo serrano. De allí hay un paso corto a las funciones que asumen algunos clubes que mantienen un vínculo permanente con una parroquia, esto es, contribuir con dinero y fuerza de trabajo en obras de bien común, dentro y ocasionalmente fuera del asentamiento. Es más, algunos cumplen funciones económicas importantes para familias cuya economía rara vez alcanza un nivel suficiente de estabilidad y holgura. Se constituyen en asociaciones de ahorro o cooperativas de crédito y organizan fondos mutuos para efectos de afrontar colectivamente enfermedades y entierros.

Indudablemente, frente a la variedad de actividades que estas asociaciones abarcan, el nombre de club de fútbol es insuficiente aunque esa es la etiqueta que usan los propios pobladores. Queda claro que los miembros son hombres y mujeres, de diversas edades. Las mujeres son socias activas: asumen cargos directivos incluido el car-

go de presidenta. Algunas connotadas dirigentas peruanas del movimiento de comedores y de la organización metropolitana del programa Vaso de Leche hicieron su etapa de aprendizaje en clubes barriales de fútbol. Las mujeres valoran altamente la posibilidad de tener a sus esposos e hijos varones ocupados en actividades de recreación bajo la vista y bajo cierto control de ellas. Pero también gozan de la festividad y del fútbol mismo. Varias cuentan con los partidos dominicales para realizar la venta de potajes, bebidas gaseosas y cerveza y así ganarse un ingreso adicional.

Estos clubes de fútbol –así como miles de otros similares en toda Lima– presentan una gran ambigüedad si se trata de clasificarlos de acuerdo a un esquema rígido que pretenda separar lo cívico de lo familiar. No obstante, en este sentido, ellos ejemplifican lo que es una característica común a casi todas las organizaciones de Leoncio Prado y Ollantay y, por extensión, a los barrios pobres de las ciudades peruanas. La mezcla de vínculos y proyectos familiares y comunitarios con vínculos que se establecen racionalmente en función de un conjunto de objetivos, es la norma. Además, a nadie le molesta ni le llama la atención. Para los pobladores, el hecho de que un comedor esté constituido por un conjunto de familias estrechamente interconectadas vía múltiples relaciones de parentesco no lo hace menos autónomo ni menos organización que otro. Es deseable vivir cerca de los familiares y tener la posibilidad de apoyarse en ellos. Los migrantes del campo a la ciudad procuran asentarse en un mismo barrio con sus parientes y eso conlleva su participación compartida en una serie de organizaciones que se abocan al mejoramiento del lugar.

Conclusiones

Los y las ciudadanos necesariamente tienen familia. Se afilian a una diversidad de grupos familiares, comunitarios y otros los cuales plantean demandas previas y distintas pero no reñidas, esencialmente, con las demandas de participación ciudadana. Más bien, matizan, enriquecen, diversifican y dan sentido a la participación ciudadana.

Siendo esto así, el parentesco y la familia necesitan ser teorizados e integrados en los debates sobre el género y la ciudadanía, pero no como un asunto que solamente atañe a mujeres o que atañe a las mujeres de una forma particular. Los hombres ciudadanos también tienen lealtades y obligaciones primarias que afectan el tipo de ciudadano que son. El significado de su inserción en la familia y el impacto de esta inserción sobre su rol ciudadano, de ninguna manera se agota en imaginarlos como patriarcas que imparten órdenes a mujeres (cónyuges) cuya propia condición de ciudadana se pone en duda por eso. Los hombres también son *atados* y comprometidos por sus lazos familiares.

Nuestra meta debería ser llegar a un plano donde el análisis de diferentes tipos de asociaciones humanas nos deje en condiciones para hablar con exactitud sobre el

ejercicio de las capacidades que supone la ciudadanía. Son capacidades, por ejemplo, involucradas en la construcción de intereses, la formación de juicios y criterios, la designación de representantes y la representatividad.

La noción de sociedad civil tiene un componente de familia y sistema de parentesco que varía de un contexto cultural a otro. Es necesario *desempacar* esta noción, extrayendo el componente familiar y sometiéndolo al análisis en las condiciones concretas de las sociedades latinoamericanas. Para ello hay que superar los temores, el respeto exagerado, la sensación de impenetrable complejidad y la ambigüedad del significado de la familia tradicional en los proyectos feministas.

Bibliografía

Adler Lomnitz, Larissa. 1975. *Cómo sobreviven los marginados*. Siglo Veintiuno Editores.

Adler Lomnitz, Larissa y Pérez-Lizaur, Marisol. 1987. *A Mexican Elite Family, 1820-1980*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Becker, Gary S. 1981. *A Treatise on the Family*. Harvard University Press.

Bujra, Janet M. 1979. Introductory: Female Solidarity and the Sexual Division of Labour. En: Caplan, Patricia y Bujra, Janet M., comp., *Women United, Women Divided*, pp. 13-45. Indiana University Press.

Elam, Diane y Wiegman, Robyn, comp. 1995. *Feminism Beside Itself*. Routledge.

Esping-Andersen, Gosta. 1990. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge: Polity Press.

Fraser, Nancy y Gordon, Linda. 1994. Dependency Demystified: Inscriptions of Power in a Keyword of the Welfare State. *Social Politics*, Spring.

Gilligan, Carol. 1982. *In a Different Voice*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

Kohlberg, Lawrence. 1981. *The Philosophy of Moral Development*. Harper and Row.

MacKinnon, Catharine A. 1987. *Feminism Unmodified. Discourses on Life and Law*. Harvard University Press.

March, Kathryn S. y Taqqu, Rachelle L. 1986. *Women's Informal Associations in Developing Countries. Catalysts for Change?* Westview Press.

Moller Okin, Susan. 1989. *Justice, Gender, and the Family*. Basic Books, Inc.

Ostner, Ilona. 1997. EE.UU.: Universidad de Wisconsin, febrero.

Pateman, Carole. 1989. *The Disorder of Women*. Stanford University Press.

_____ . 1988. *The Sexual Contract*. Stanford University Press.

Phillips, Anne. 1991. *Engendering Democracy*. Pennsylvania State University Press.

Rosaldo, Michelle Z. 1975. Woman, Culture, and Society: A Theoretical Overview. En: Rosaldo, Michelle Z. y Lamphere, Louise, comp., *Woman, Culture & Society*, pp. 17-42. Stanford University Press.

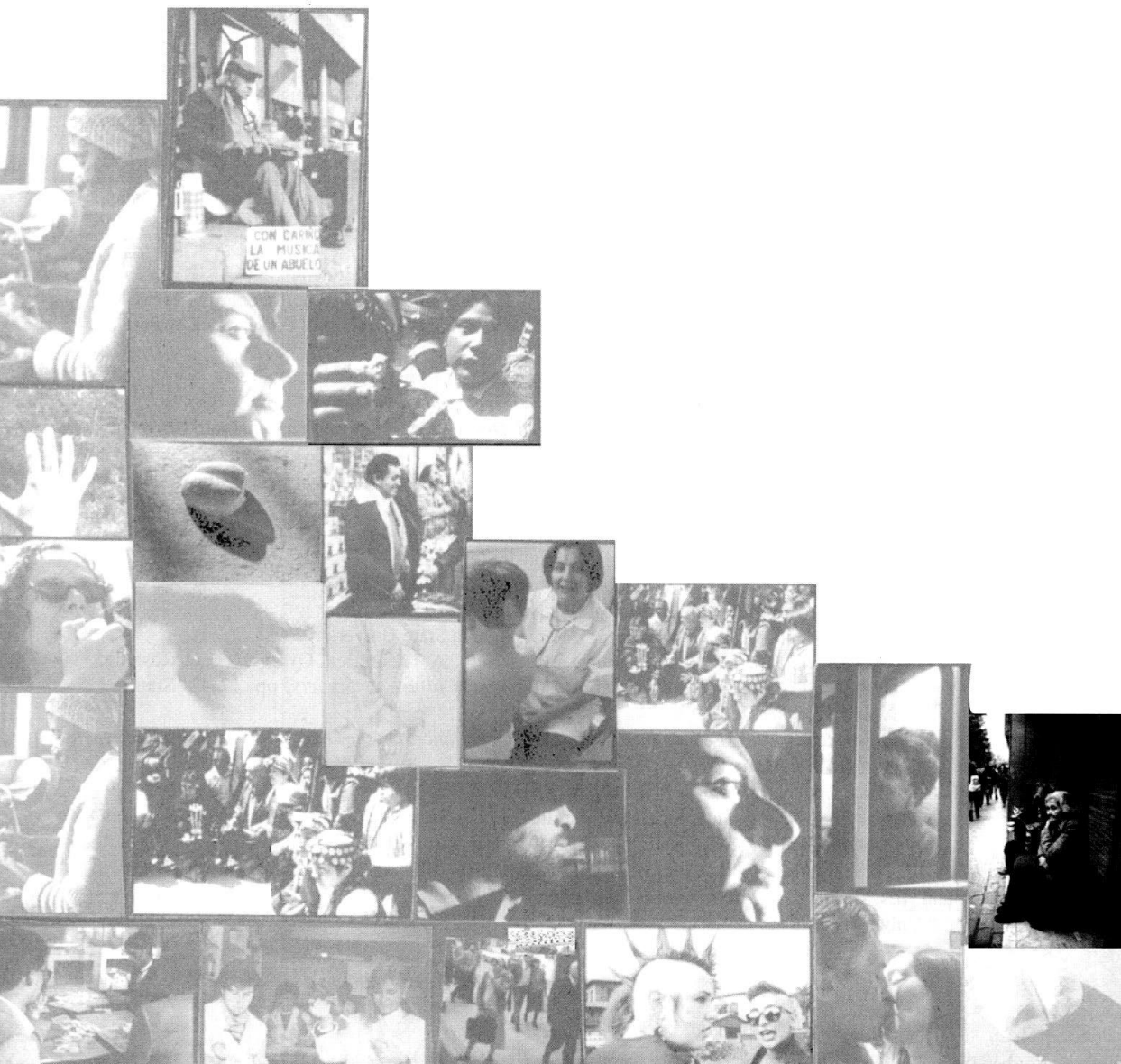
Sanday, Peggy Reeves. 1981. *Female Power and Male Dominance. On the Origins of Sexual Inequality*. Cambridge University Press.

Schneider, David. 1984. *A Critique of the Study of Kinship*. University of Michigan Press.

Sen, Amartya. 1990. Gender and Cooperative Conflicts. En: Tinker, Irene, comp., *Persistent Inequalities. Women and World Development*, pp. 123-149. Oxford University Press.

Weiss, Penny A. y Friedman, Marilyn, comp. 1995. *Feminism & Community*. Temple University Press.

Young, Iris Marion. 1990. *Justice and the Politics of Difference*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.


CON CARIÑO
LA MUSICA
DE UN ABUELO

Los derechos reproductivos como derechos ciudadanos

Bérengère Marques-Pereira

En este momento de restructuración económica y sociopolítica y de globalización, la política de la ciudadanía vuelve a ser una apuesta importante, como en cada momento de ruptura histórica. Democracia política, democracia social y liberalización económica son, sin ninguna duda, las claves de un período de recomposición de las relaciones sociales y de las relaciones de fuerza. Los debates en torno a la ciudadanía se transforman, por lo tanto, en un elemento mayor de la política.

Los movimientos sociales, los partidos políticos y los grupos sociales luchan y negocian para que sus propias definiciones de ciudadanía sean inscritas en la agenda política de modo de institucionalizarlas en las políticas públicas y en las distintas estructuras. Al respecto hay, al menos, tres problemas que están en juego. Por una parte, quién puede ser ciudadano, por otra, cuáles son los derechos y deberes de los ciudadanos y, finalmente, cuál es la capacidad del ciudadano para influir en el espacio público.

La postura ciudadana

Mientras que en los países europeos los derechos civiles precedieron a los derechos políticos, en los latinoamericanos los derechos políticos fueron frecuentemente adquiridos antes que los civiles. Mientras que en Europa las libertades y los derechos civiles precedieron a la democracia moderna, en América Latina la democracia aparece como una condición del desarrollo de los derechos civiles y de las libertades políticas. En la mayoría de los países latinoamericanos, la transición democrática parece acabada: las elecciones libres y más o menos limpias, la restauración de las libertades públicas y de los derechos humanos, el pluralismo político, la canalización

del riesgo de regresión autoritaria, son avances democráticos reales. Estos progresos políticos de los años ochenta fueron correlativos a una dinámica de extensión, por lo menos formal, de los derechos sociales.

La ciudadanía está formalmente basada en el respeto de la universalidad de la ley, pero la máxima brasileña "a los enemigos la ley, a los amigos, todo" sigue siendo válida en la mayoría de los países latinoamericanos. En efecto, la subsistencia del patrimonialismo, del clientelismo, del corporativismo o del paternalismo constituyen obstáculos a la ciudadanía. Por lo tanto, no es sorprendente que la política de la ciudadanía sea tan importante en la región.

Es en este contexto que se inscribe la ciudadanía social de las mujeres. Esta es reconocida, cada vez más, por las organizaciones internacionales como uno de los motores esenciales para un desarrollo sustentable en América Latina. La crisis de la década de los ochenta puso en evidencia la contribución de las mujeres en las actividades productivas y reproductivas. Su presencia en el mercado de trabajo, en particular en el llamado *sector informal* así como la extensión de sus jornadas de trabajo, se ha hecho hoy día evidente, en contrapartida a la falta de servicios sociales y a la disminución de los gastos sociales. Algunas organizaciones internacionales toman en cuenta el ajuste invisible que representa el trabajo productivo y reproductivo de las mujeres (UNICEF, 1987) y consideran que se desperdicia su contribución al desarrollo debido a las discriminaciones abiertas o encubiertas de que son objeto, las cuales impiden su acceso a los niveles político, social y económico (PNUD, 1995). Actualmente, la maximización del aporte femenino al crecimiento pasa por respuestas institucionales que, lejos de ignorar las relaciones de género, deben entenderlas como una realidad incontrovertible de un desarrollo en términos de equidad, participación y ciudadanía (CEPAL, 1995).

Desde esta óptica, las mujeres se visualizan como actoras y ya no como una simple categoría de la población potencialmente integrada al desarrollo. Tal perspectiva ha permitido subrayar el carácter relacional y político del desarrollo, haciendo resaltar cómo la redistribución de los recursos de poder pesa tanto o más en la construcción del sujeto político femenino (Razavi y Miller, 1995). Hoy en día es evidente que las mujeres juegan un papel central en la calidad de las familias, en particular las familias pobres (Jelin, 1991). Esta posición estratégica de las mujeres ha permitido concebirlas como destinatarias finales de programas sociales y sobre todo tomarlas como el actor social intermediario por excelencia entre la familia y la acción pública (León, 1993). Es decir, que la relación de las mujeres respecto del Estado y los poderes públicos es esencial. Conviene en este punto recordar que no se puede considerar a las mujeres sólo como clientes de servicios y programas sociales u objetos de políticas sociales (Aguirre, 1992). Ellas han actuado como actores sociales para obtener respuestas institucionales consiguiendo, al menos, la creación de consejos al interior de los aparatos del Estado. Por otra parte, hay que destacar que esta dinámica va

acompañada de una producción de conocimientos elaborados por los movimientos de mujeres (Valdés, 1993).

Así, la ciudadanía constituye uno de los motores del desarrollo. En efecto, éste no se reduce al crecimiento económico y no es concebible sin un desarrollo cultural que se base tanto sobre la construcción de un sujeto social y político femenino como sobre la representación de sí, en tanto que actor que persigue hacer visibles las relaciones de género hasta ese momento ocultas (Jelin, 1993). En relación a este punto, la trayectoria política de las mujeres latinoamericanas es notable. Efectivamente, su acción es tridimensional: un movimiento feminista con reivindicaciones altamente parecidas a aquellas de las mujeres europeas, canadienses y estadounidenses; un movimiento de mujeres que se movilizó contra las dictaduras y el autoritarismo protestando particularmente contra la violación de los derechos humanos; un movimiento popular que traduce estrategias de sobrevida en reivindicaciones sociopolíticas (Jacquette, 1989). Este es el contexto en el cual se inscriben los derechos reproductivos como derechos de ciudadanía.

La referencia a T.H. Marshall

Las autoras que trabajan en ciencias políticas o en sociología política y que tratan la ciudadanía social parten, a menudo, de la referencia al famoso ensayo de Marshall (1950) *Citizenship and Social Class*. Marshall elabora una noción compleja de ciudadanía que trata en conjunto los derechos civiles, políticos y sociales, los cuales no son separados ni separables aunque se hayan constituido históricamente según una secuencia cronológica precisa. Este conjunto de derechos constituye un estatuto social que determina el sentimiento de pertenecer a la comunidad nacional y favorece la participación en la vida social. Para Marshall, este estatuto otorgado a los miembros de pleno derecho de la comunidad nacional no es solamente el producto de una lucha contra la exclusión. Existe en la medida en que se reconoce públicamente como legítimo.

Aunque hoy día el contexto no es el mismo, el interés en la perspectiva marshaliana es la sociologización del concepto de ciudadanía. Antes de Marshall, el concepto era tributario de la teoría política o de la filosofía política liberal y republicana. Después de Marshall, el concepto de ciudadanía se considerará como un proceso de construcción social en el cual las relaciones existentes en el área política son importantes. En este sentido conviene establecer una distinción entre ciudadanía formal y ciudadanía real. La primera puede definirse por la pertenencia a un Estado-Nación, mientras que la segunda se refiere a una participación política y cívica. Así, la ciudadanía no se reduce a un problema de soberanía nacional, sino que está relacionada con una dinámica de democratización.

Varios sociólogos han criticado la descripción lineal hecha por Marshall en lo

que se refiere al establecimiento de los derechos y su carácter pasivo, como si las luchas sociales no hubieran sido necesarias para obtenerlos (Giddens, 1985; Turner, 1990, 1993). Este modelo también fue criticado por su carácter etno-céntrico y macho-céntrico. En efecto, la dinámica interactiva entre los derechos civiles, sociales y políticos debería ser estudiada desde el punto de vista de los contextos nacionales y la diferenciación de género (Bottomore, 1992; Turner, 1990). La consideración de las relaciones de género conlleva la intención de subrayar que una lectura de la historia de la ciudadanía de las mujeres contradice la periodización de Marshall a propósito de la adquisición de los derechos –civiles en el siglo XVIII, políticos en el siglo XIX y sociales en el siglo XX– (del Ré, 1994). Por otra parte, se sostuvo que la ciudadanía debería ampliarse e incluir hasta una cuarta generación de derechos: los derechos reproductivos (Barbalet, 1988; Held, 1989). Los derechos reproductivos están relacionados con la libertad de reproducción y el trabajo de reproducción, es decir aborto, anticoncepción, trabajo doméstico, entre otros.

Esta ponencia trata el problema metodológico en la extensión de la ciudadanía hasta una cuarta generación de derechos, cuya naturaleza es diferente. En efecto, se trata de derechos de lo que se podría llamar la *generación*: el hecho de dar a luz, educar, entre otros. Estas tesis no son la expresión de una indeterminación metodológica a propósito de los niveles de la ciudadanía. Al contrario, se trata aquí de un problema de intermediación política. Esta mediación se desarrolla a través de la construcción de un nuevo actor político, el cual se construye gracias a las luchas y a las negociaciones por el reconocimiento de su propia definición de ciudadanía.

Relaciones de género e identidad de género

Es útil subrayar lo que me parece define las relaciones de género y la identidad de género antes de desarrollar una tesis acerca de los derechos reproductivos.

Delphy (1982) es quien define con mayor claridad los alcances de la noción de género. Según esta autora, el género se funda en tres principios: el de la división entre lo masculino y lo femenino; el de la jerarquía, es decir la relación estratégica de poder entre ambos sexos, y el principio de la variabilidad, en el tiempo y en el espacio, de la división sexual del trabajo. El concepto de género no hace referencia al sexo biológico sino a las relaciones de sexo. No es una variable sino un concepto que permite establecer relaciones entre elementos que interactúan para generar la diferencia. También es una perspectiva teórica que concibe lo sexual como un sistema de diferenciación social productor de desigualdad, el cual se articula con otras estructuras de construcción diferencial de los sujetos sociales y políticos. No se pueden jerarquizar las relaciones de clase y de sexo como si una relación pudiese estar más viva que otra (Kergoat, 1984). Como lo subraya Jacquet (1995), el concepto de género es a la vez interactivo y transversal. Es interactivo en la medida que las actividades de uno de los

géneros se definen y se analizan con respecto a las actividades del otro.

Por otra parte, el género atraviesa todas las esferas de la sociedad, productiva y reproductiva, económica, social, cultural y política, privada y pública. Respecto a esta proposición, se impone precisar lo cotidiano. Cappellin expone que la categoría analítica de lo cotidiano permite sobrepasar la dicotomía entre producción y reproducción. Lo cotidiano destaca las interacciones culturales en su relación con las mediaciones sociales y políticas. Estas interacciones culturales están en el centro de la construcción de la ciudadanía de las mujeres a través de la constitución de un sujeto político femenino. El surgimiento de los problemas sociales, que vuelven visibles las relaciones de género anteriormente invisibles, se pueden abordar a partir de lo cotidiano (Cappellin, 1993). Esta visibilidad, en el caso de las mujeres, se debe a la politización de lo cotidiano: "no se politiza ni el empleo, ni las relaciones familiares. Se politiza lo cotidiano" (Cappellin, 1992). Desde esta perspectiva, se reivindica una ciudadanía de lo cotidiano, rechazando cualquier perspectiva esencialista. Es fundamental recordar que el sustrato ontológico del ser humano debe ser distinguido de sus cualidades. Por lo tanto, lo que importa es la variabilidad fundamental de la identidad de género. Esta puede ser contradictoria y siempre es contingente.

Así, la identidad individual y colectiva de las mujeres, no reducible a la posición de clase o de género, depende de lo que Laclau (1986) y Mouffe (1979) llaman una "articulación hegemónica" en la cual la complejidad de lo cotidiano deja entrever posiciones heterogéneas y prácticas fragmentadas. Cervantes (1993) distingue tres ejes que definen la identidad de género de las mujeres: la maternidad y el ser madre, el matrimonio y el ser esposa o compañera, la profesión y el ser trabajadora de la producción o del hogar. Por mi parte, añadiría un cuarto eje: la capacidad o no de transformarse en un ser que tiene el control de su vida, que tiene el dominio de su destino, sea desde el punto de vista sexual y reproductivo, sea desde el punto de vista civil o social. Tal capacidad es de naturaleza política.

Algunas reflexiones metodológicas

Las reflexiones de Cervantes (1995) sobre los derechos reproductivos nos entregan un marco cognoscitivo para abordar el problema. En efecto, es necesario señalar que en los "derechos reproductivos" encontramos la presencia de dos componentes. "Por un lado, la reproducción como evento o acción calificada y acotada por el concepto de derecho. Por otro, los derechos como condición jurídica que confieren una titularidad específica y protectora del evento que le otorga su referente: la reproducción". Desde aquí se desprenden varias rutas de investigación para abordar la formación del discurso político a propósito de la reproducción:

1. "¿Cuáles son las dimensiones, partes o aspectos de la reproducción que han sido reconocidos legalmente y transformados en derechos? ¿Por qué han sido estas

dimensiones, partes o aspectos de la reproducción y no otros? ¿Cómo ha ocurrido este proceso histórico de reconocimiento legal y de transformación en derechos?".

2. "¿Qué dimensiones, partes o aspectos de la reproducción forman parte de agendas políticas? ¿Qué vías de lucha se visualizan como políticamente efectivas? ¿Qué procesos de institucionalización se sugirieron apropiados?" (Cervantes, 1995).

Las interrelaciones

Actualmente estamos en presencia de una reivindicación de ampliación de la ciudadanía a nuevas generaciones de derechos, por ejemplo, los derechos reproductivos. ¿Conviene en adelante tenerlos en consideración para poder hablar de una *plena ciudadanía* o esto significaría introducir una indeterminación metodológica en el concepto de ciudadanía?

Según la perspectiva de Marshall, los derechos reivindicados no son derechos de la ciudadanía. Son tales los que el Estado garantiza. Pero esta no es la única característica de los derechos de la ciudadanía. Por una parte, estos comprenden deberes para cualquier persona que los ejerce. Por otra parte, los derechos de la ciudadanía imponen una obligación al Estado. Los derechos civiles y políticos son la expresión de derechos-libertades que el individuo posee frente al Estado el cual ve limitada su autoridad; los derechos sociales son la expresión de derechos de acreedor que los individuos poseen sobre el Estado, esto es, beneficios que deben ser garantizados por las políticas sociales (Macpherson, 1985).

Si se considera al individuo como sujeto, es decir, actor de su historia y agente de las estructuras, y si se tiene en cuenta las relaciones de género, entonces importa considerar una cuarta generación de derechos: los derechos reproductivos. Se trata de una nueva generación desde el punto de vista de su formación. Pero no son separables de los otros, especialmente si se enfoca la libertad reproductiva como un derecho civil, político y social.

Como *derecho político*, la libertad reproductiva está ligada a las luchas de los movimientos de las mujeres, esto es, a la afirmación de un nuevo sujeto político que lucha y negocia para conseguir el reconocimiento de una identidad colectiva basada en la visibilidad de las relaciones de género (Marques-Pereira, 1989, 1993). Así, el derecho al aborto, por ejemplo, representa la conquista del control de su destino y la lucha contra el proceso de instrumentalización de las mujeres, procesos que representan las políticas demográficas que igualmente promueven la natalidad o su control, que prohiben el aborto pero permiten la esterilización forzada (Barquet, 1992).

Como *derecho civil*, la libertad reproductiva está ligada al principio de individualización del liberalismo clásico, es decir a la capacidad del individuo de disponer de sí mismo lo que, en este caso, representa la superación de las determinaciones del cuerpo (Marques-Pereira, 1989, 1993). Por un lado, el derecho de las mujeres a deci-

dir sobre su cuerpo es un problema de integridad física y mental; por otro, la penalización del aborto representa la intromisión del Estado o de la jerarquía eclesiástica en asuntos individuales, privados y de conciencia (Barquet, 1992).

Como *derecho social*, la libertad reproductiva está ligada a las políticas de salud pública. Es necesario recordar que los derechos sociales dependen de la existencia de ciertas condiciones para objetivarse. Sin hospitales, sin una red de centros de salud pública, por ejemplo, es imposible el ejercicio del derecho a la salud. Los derechos sociales implican, inherentemente, deberes y responsabilidades para los gobiernos pues deben proveer los medios o asegurar que éstos existan en aras de que la población pueda ejercer sus derechos y que este ejercicio sea pleno (Cervantes, 1995).

La libertad reproductiva aparece así como cristalización de los derechos-libertades frente al Estado y de los derechos de acreedor sobre el Estado. En este sentido, la libertad reproductiva ilustra claramente la interrelación entre los niveles civil, político y social de la ciudadanía, lo que permite a las mujeres definir el destino de sus vidas. Más allá de esta interrelación, se puede preguntar si la libertad reproductiva representa la manifestación de una reivindicación por una "ciudadanía diferenciada" (Kymlicka y Wayne, 1994)[1].

Es verdad que el derecho a ser propietario de su cuerpo se reivindicó como un derecho a la diferencia, pero también se trata de una demanda de igualdad social entre las mujeres para el acceso a los servicios que practican el aborto *medical* y la anticoncepción.

En suma, la libertad reproductiva es parte de una reivindicación por el derecho de las mujeres a ver sus necesidades tratadas específica y colectivamente, libertad reproductiva que representa una extensión de los tres niveles de la ciudadanía.

Una cuarta generación

La libertad reproductiva representa la emergencia de una cuarta generación de derechos. Por una parte, la naturaleza de estos derechos es diferente: los derechos reproductivos pueden ser considerados como los derechos de la *generación*. Por otra parte, estos derechos fueron solamente posibles gracias a las luchas emprendidas por varias fuerzas sociales y políticas, pero también por un nuevo actor político, el actor feminista. Esta lucha desafía la separación de los ámbitos público y privado que impone la política.

Aquí se plantea uno de los dilemas de la problemática de las relaciones de género: igualdad versus diferencia. Desde nuestra perspectiva, éste es un falso dilema, porque la igualdad no contradice la diferencia sino que se opone a la discriminación, mientras la diferencia contradice la similitud. Lo que sí constituye un dilema real es

1. Para una noción más elaborada de "ciudadanía diferenciada", ver Iris Young, 1990. *Justice and the Political Difference*. Princeton: Princeton University Press.

el eje universalismo/particularismo: ¿cómo hacer para que el reconocimiento de las diferencias actúe como revelador de derechos universales? ¿Cómo separar las diferencias de las discriminaciones? ¿Cómo separar los derechos universales de la uniformidad?

Estas reflexiones no son la expresión de cualquier indeterminación metodológica a propósito de la relación entre los derechos reproductivos y la ciudadanía. La ampliación de la ciudadanía comporta dos sentidos: la extensión de los derechos existentes a nuevas categorías de personas y la inclusión de nuevos elementos en la definición de ciudadanía. En este último sentido, la incorporación de nuevos derechos a los derechos existentes no es un simple problema racional sino, como se ha señalado, de una mediación política por un nuevo actor social: las mujeres.

Tal proceso todavía es ambiguo. En efecto, aunque las mujeres se asocian en movimientos sociales, grupos de intereses o de presión, dentro o fuera de los partidos políticos y en organizaciones sindicales, no constituyen una fuerza social autónoma ni son interlocutoras de pleno derecho. De allí que la representación y la representatividad de las mujeres como sujeto político necesite integrarse a los procesos de concertación que institucionalizan un "paradigma societal" (Jenson, 1989) en lo que se refiere a la ciudadanía. Tales son los términos según los cuales conviene tratar la construcción del sujeto político de género.

Dinámica en construcción

Una perspectiva que considere la ciudadanía como una dinámica en construcción exige evitar el reduccionismo de los derechos de la ciudadanía a un conjunto preciso de derechos. Al evitar tal reducción, la idea de ciudadanía aparece más bien relacionada con una práctica organizacional a la vez conflictual y consensual (Marques-Pereira, 1989): práctica conflictual en tanto ligada al poder y a las luchas por el reconocimiento de cuáles son los actores considerados como protagonistas de reivindicaciones legítimas y práctica consensual en tanto participación en la representación y formulación de políticas públicas. Se trata aquí de un consenso sobre las reglas del juego, reglas que definen las modalidades de resolución de los conflictos.

Tal enfoque permite distinguir dos dinámicas en la construcción de la ciudadanía. Por una parte, como estatuto formado por un conjunto de derechos y deberes, la ciudadanía se basa en una lógica de competencias (edad, nacionalidad, género, entre otras). Por otra, como forma de participación en la vida social y como conciencia de pertenecer a la sociedad, se basa en un conjunto de prácticas de organización que permiten el ejercicio de alguna influencia sobre el espacio público.

En este sentido, la construcción social de la ciudadanía se basa en la construcción de un sujeto político que tiene "el derecho a tener derecho" (Arendt, 1972; Jelin, 1995; Lefort, 1981), representar y ser representado.

La representación de las identidades colectivas oscila entre dos dinámicas: la de homogeneización y la de diferenciación. Las dinámicas de homogeneización consolidan los procesos de identificación que permiten a los individuos reconocerse como pertenecientes a un grupo social. Igualmente les permite afirmar su identidad individual gracias a su identidad colectiva. Las dinámicas de diferenciación consolidan la construcción social de las diferencias a través de la heterogeneidad de las relaciones jerárquicas de dominación.

Sin embargo, la construcción de un sujeto político femenino necesita una dinámica de individuación. Esta dinámica no se confunde con el individualismo liberal sino que corresponde, más bien, a condiciones de ser y de actuar como sujetos políticos. Se trata de ser un individuo que "tiene los medios para adquirir un estatuto personal sin tener que, constantemente, referirse a sí mismo como miembro de una categoría social (...) para poder plantearse y actuar como sujeto político" (Lamoureux, 1989).

Buscando un ideal de individuación, el feminismo lleva el problema de la diferencia al debate político y, diluyendo la línea divisoria entre lo privado y lo público, impulsa una democratización del conjunto de las relaciones sociales. Particularmente desemboca en una politización de lo social y en una socialización de la política. Una politización de lo social: la representación de la identidad colectiva de las mujeres se inserta en un proceso de publicidad de la reproducción. Una socialización de la política: esta representación se inscribe en una demanda de reconocimiento de la diversidad de lo social, un reconocimiento político de la diferencia.

En esta lucha hacia la construcción de un sujeto político es sustantiva la referencia al interés general, porque éste es uno de los medios fundamentales para legitimar las posiciones y proposiciones de los actores acerca de la representación de sus intereses e identidades colectivas. La referencia al interés general trasciende las relaciones de fuerza, oculta las diferencias, constituye un mecanismo esencial de la homogeneización de los intereses y esconde las jerarquías y los conflictos. Sin embargo, la referencia al interés general también proviene de la diferenciación de los intereses, sobre todo cuando éstos se definen como inmanentes a las relaciones de fuerza. Por lo tanto, el interés general se inserta en la lógica de la diferenciación de los actores entre ellos. Esta diferenciación reconoce las jerarquías y las desigualdades inherentes a las divisiones sociales. Es en este sentido que se da la articulación entre representación de intereses y representación de identidades.

Está claro que las diferentes representaciones del interés general, movilizadas en el discurso político acerca del derecho al aborto, están relacionadas a las relaciones de poder que varían según las situaciones nacionales. Sin embargo, existen dos discursos políticos ampliamente internacionales: el de la jerarquía eclesiástica y el del feminismo. El primero se caracteriza por la intolerancia, mientras que el segundo se caracteriza por la permisividad. En este conjunto se puede subrayar una movilización de representaciones que pueden ser contradictorias e incluso antagónicas entre sí.

Representaciones antagónicas

La posición del Vaticano

Por lo contrario, desde la perspectiva hegemónica de la Iglesia Católica, la línea de pensamiento sobre sexualidad y reproducción se caracteriza por la intolerancia hacia posiciones diferentes, particularmente las laicas, las católicas minoritarias y las feministas católicas.

En su encíclica *Humanae Vitae*, el Papa Paulo VI reafirmó categóricamente la prohibición de la anticoncepción y valorizó la abstinencia periódica. La Iglesia Católica siempre encontró dificultades para enfrentarse al libre arbitrio del hombre y, aún más, de la mujer, porque la autonomía de los seres humanos transforma la naturaleza y desmiente la existencia de un orden divino, natural e inmutable. El desarrollo de la paternidad y maternidad responsables contradice la moral sexual y familiar de la Iglesia que se funda en las leyes biológicas de la procreación. Así, el Vaticano reprueba la anticoncepción y, aún más, el aborto. El aborto se define como un pecado y un crimen, porque el supuesto inicial es la animación inmediata del producto de la concepción. Esto es el interés general definido por el Vaticano. El valor imprescriptible de la vida embrionaria muestra en qué medida la Iglesia busca resistir la evolución de las costumbres para codificar los comportamientos sexuales: el derecho del embrión a ser reconocido constituye el límite al ejercicio de una paternidad responsable. Es necesario recordar que el discurso del Vaticano sobre la sexualidad no se centró sobre el aborto. Lo que está en juego es una revalorización de la moral cristiana que no se presenta como una obligación sino como una adhesión a un Dios de amor. Desde esta perspectiva, la mujer es indiferenciada y un instrumento del destino divino: su sexualidad es considerada inseparable de la procreación.

Esta posición fue un hecho de actualidad importante. Como subraya María Consuelo Mejía: "En su calidad de observador permanente en las Naciones Unidas, desde la Conferencia de Río 92 hasta Beijing 95, el Vaticano ha recurrido a todos los mecanismos de presión política a su alcance para impedir el consenso esencial del organismo internacional en los asuntos relacionados con los derechos de las mujeres y su reproducción, sacrificándolos a la agenda teológica de la Iglesia. Nunca contento con los logros alcanzados en El Cairo en materia de sexualidad, planificación familiar y aborto, intentó con vehemencia echar atrás estos acuerdos en la Plataforma de Acción que se discutiría en Beijing" (Mejía, 1995).

Reivindicaciones y conquistas feministas

Las reivindicaciones feministas, resultado de mayo de 1968, se desarrollaron alrededor de problemas que eran considerados como tabú: por ejemplo, el aborto.

Estas reivindicaciones expresan aspiraciones relacionadas con la calidad de vida y la autodeterminación de las mujeres. Ellas ponen en evidencia los lazos entre la reproducción biológica de los individuos y la reproducción social de las relaciones de género. Las tesis feministas subrayan las discriminaciones de las relaciones sociales que estructuran la maternidad. Dentro de este marco, la autonomía de decisión de la mujer que interrumpe su embarazo se inserta en una lucha contra las relaciones de subordinación. Por lo tanto, la autonomía de decisión de la mujer está legitimada de la manera siguiente: son las mujeres, y no los padres, los médicos, el Estado o la Iglesia, quienes asumen las consecuencias del embarazo y las responsabilidades de la educación de los hijos. Son las mujeres, y no los padres, los médicos, el Estado o la Iglesia, quienes sufren de las condiciones socioeconómicas que constituyen el marco de la procreación, del embarazo y de la maternidad.

El feminismo lucha contra las discriminaciones de clase que dividen a las mujeres que abortan en dos categorías de población: por un lado, las que recurren al aborto clandestino y, por otro, las que tienen los recursos materiales y culturales suficientes para no sufrir de los riesgos penales y médicos ligados al aborto clandestino. El feminismo también lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. La reproducción biológica está considerada como ligada a la reproducción social y, más particularmente, al trabajo doméstico y a la división sexual del trabajo. Desde esta perspectiva, la penalización del aborto reduce a la mujer a la procreación y la transforma en un objeto, la instrumentaliza.

Así, las aspiraciones a la autodeterminación tienen que ver con una representación liberal del interés general que es el respeto a la privacidad frente al poder del Estado o de la Iglesia. Estas aspiraciones también tienen que ver con una representación socializante del interés general, es decir, la lucha contra las discriminaciones de clase. Sin embargo, la representación más fuerte del interés general es la que liga los derechos reproductivos a los derechos humanos (Jelin, 1993). Está claro que ésta pone en cuestión el carácter androcéntrico de los derechos humanos que toma al varón como único paradigma de lo humano y se presenta como sistema universalizable para toda la humanidad o neutral en términos de género. Como enfatiza Alda Facio, dar una perspectiva de género a la práctica y teoría de los derechos humanos no es simplemente agregar nuevos derechos a la lista de los derechos fundamentales del hombre: lo que importa es reconceptualizar los derechos humanos "desde una perspectiva que cuestione lo masculino como parámetro, al mismo tiempo que presenta una visión de las mujeres, no como única, sino para visibilizar la experiencia femenina con el fin de lograr una visión más integral del género humano (...). Podremos lograr una igualdad en la diferencia con una visión no androcéntrica de lo que son los intereses, necesidades y aspiraciones de los seres humanos en todas sus versiones y con todas sus diferencias. Es decir, podremos entender la igualdad de una manera nueva que parte de que todos los y las humanos/as somos igualmente diferentes, sin

que un determinado sexo, raza, etnia, (...) sea el parámetro o modelo de lo humano" (Facio, 1991).

Aquí se hace necesario recordar algunas conquistas importantes para las mujeres en Beijing. Particularmente, se puede señalar: el reconocimiento de que los derechos de las mujeres son derechos humanos; el llamado a los gobiernos para que se desarrollen códigos éticos en conformidad con los acuerdos internacionales que reafirmen el deber de los prestadores de servicios de salud de referir a las usuarias a los servicios apropiados cuando solicitan, por ejemplo, un aborto en los países en donde es legal.

La cláusula de conciencia reclamada por el Vaticano no fue integrada al texto de la Plataforma de Acción aprobada en Beijing; tampoco lo fue la referencia a los valores religiosos, éticos y culturales nacionales en tanto obstaculizarían la puesta en práctica de los avances logrados.

Por otra parte, la noción de derechos sexuales fue implícitamente (no de manera explícita) integrada al texto: "Los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a controlar y decidir libre y responsablemente en asuntos relacionados con su sexualidad, incluyendo su salud sexual y reproductiva, libres de coerción, discriminación y violencia. Las relaciones igualitarias entre las mujeres y los hombres, en lo que se refiere a las relaciones sexuales y la reproducción, incluyen el pleno respeto a la integridad de la persona, requieren el mutuo respeto, el consentimiento y la responsabilidad compartida de la conducta sexual y sus consecuencias". Del Programa de Acción aprobado en El Cairo, se reafirma lo que se refiere a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos que, partiendo de las definiciones de la OMS, establece el derecho de todas la personas a servicios integrales de salud reproductiva, a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para hacer real la decisión.

En cuanto al aborto, se reafirma el párrafo 8.25 del Programa de Acción de la CIPD en El Cairo: "En ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia. Se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de la mujer, a ocuparse de los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública y a reducir el recurso al aborto mediante la prestación de más amplios y mejores servicios de planificación de la familia. Las mujeres que tienen embarazos no deseados deben tener fácil acceso a información fidedigna y a asesoramiento comprensivo. Se debe asignar siempre máxima prioridad a la prevención de los embarazos no deseados y habría que hacer todo lo posible por eliminar la necesidad del aborto. (...) En los casos en los que el aborto no es contrario a la ley, los abortos deben realizarse en

condiciones adecuadas. En todos los casos, las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos. Se deberían ofrecer con prontitud servicios de planificación de la familia, educación y asesoramiento post-aborto que ayuden también a evitar la repetición de abortos."

Así, se puede afirmar que estas posiciones internacionales son importantes para la vida cotidiana de las mujeres porque representan, política y sociológicamente, la afirmación de un interés general y la construcción de un nuevo sentido común. De hecho, estas posiciones rechazan cualquiera asignación de las mujeres a una maternidad forzada cuyo resultado sea una instrumentalización del cuerpo femenino, rechazo que expresa una autonomía crítica frente al conservadurismo ideológico de la jerarquía católica que postula el respeto de la vida desde la concepción. Por otra parte, estas posiciones aparecen como de interés general en la medida que buscan luchar eficazmente contra el aborto clandestino. La preocupación por la salud pública tiene fuerza de interés general, lo que podría transformar en socialmente admisible la reivindicación feminista del derecho de las mujeres a controlar libremente su cuerpo.

En síntesis, está claro que los derechos reproductivos constituyen una nueva generación de derechos cuando se consideran desde el punto de vista de su formación y no son separables ni separados de los derechos civiles, políticos y sociales. Ello significa no sólo que los derechos reproductivos manifiestan una dinámica interactiva entre los tres niveles de la ciudadanía sino que también manifiestan la emergencia de una nueva generación de derechos cuya naturaleza es diferente de la de otros derechos. La incorporación de nuevos derechos a los ya existentes depende de la presencia de un actor político capaz de representar sus identidades e intereses particulares y legitimarlos como derechos de interés general. De modo conclusivo, los y las titulares de los derechos reproductivos, que es un derecho humano, se convierten en ciudadanos cuando éstos se protegen jurídicamente.

Bibliografía

Aguirre, R. 1992. Políticas sociales, descentralización y acciones colectivas de mujeres: el caso uruguayo. En: Raczynski, Dagmar y Serrano, Claudia, *Políticas sociales, mujeres y gobierno local.* Santiago: CIEPLAN.

Arendt, H. 1972. *Le système totalitaire.* Paris: Le Seuil.

Barbalet, J.M. 1988. *Citizenship.* Bristol: Open University Press.

Bacchi, C. 1996. *The Politics of Affirmative Action.* Londres: Sage.

Barquet, M. 1992. *Derechos reproductivos: mujer y sociedad,* Seminario la mujer y los derechos humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, PIEM, El Colegio de México, mayo, mimeo.

Bottomore, T. 1992. Citizenship and Social Class, Forty Years on. En: Marshall, T.H. y Bottomore, T., *Citizenship and Social Class.* Londres: Pluto.

Cappellin, Paola. 1992. Emploi, famille et débat syndical: la discussion sur la division sexuelle du travail. *Cahiers du CELA-IS,* N° 1.

_____ . 1993. Nouvelles formes de conflictualité sociale et démocratie au Brésil. En: Marques-Pereira, B. coord., *L'Amérique latine: vers la démocratie?* Bruxelles: Ed. Complexe.

CEPAL. 1995. *Programa de acción regional para las mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001.* Santiago.

Cervantes, A. 1993. *Entretejiendo consensos: reflexiones sobre la dimensión social de la identidad de género de la mujer.* México, mimeo.

_____ . 1995. *Derechos reproductivos: hacia la fundación de un campo cognoscitivo,* XX Congreso de la ALAS, México, octubre.

De Barbieri, T. 1991. Sobre la categoría género. Una introducción teórico-metodológica. En: Azaredo, S. y V. Stockle, coord., *Direitos reproductivos.* Sao Paulo: Fundaçao Carlos Chagas.

Delphy, Ch. 1982. Le patriarcat, le féminisme et leurs intellectuelles. *Nouvelles Questions Féministes,* N° 2, octubre.

del Ré, A. 1994. Droits de citoyenneté: une relecture sexuée de T.H.Marshall. En: Beauchesne, M-N. y L Zaid, *Women's Studies, Manuel de Ressources.* Bruselas: Services Fédéraux des Affaires Scientifiques.

Facio, A. 1991. Sexismo en el derecho de los derechos humanos. En: *Mujer y derechos humanos en América latina.* Lima: CLADEM, febrero.

Fraser, N. 1989. Talking about Needs. Interpretive Contests as Political Conflicts in Welfare State Societies. *Ethics,* N° 99, enero.

Giddens, A. 1985. *The Nation-State and Violence.* Cambridge: Polity Press.

Held, D. 1989. *Political Theory and Modern State.* Cambridge: Polity Press.

Jacquet, I. 1995. *Développement au masculin/féminin.* Paris: L'Harmattan.

Jacquette, J. 1989. *The Women's Movement in Latin America.* Londres: Unwin Hyman.

Jelin, E. 1991. *Family, Household and Gender Relations in Latin América.* Londres: UNESCO, Kegan Paul International.

_____ . 1993. *Ante, de, en, y? Mujeres, Derechos Humanos.* Lima: Entre Mujeres.

_____ . 1995. ¿Cómo construir ciudadanía? Una visión desde abajo. *European Review of Latin America and Caribbean Studies,* N° 55, diciembre.

Jenson, J. 1989. Paradigms and Political Discourse: Protective Legislations in France and the United States before 1914. *Canadian Journal of Political Science,* vol. XII, N° 2.

Kergoat, D. 1984. Plaidoyer pour une sociologie des rapports sociaux. De l'analyse critique des catégories dominantes à la mise en place d'une nouvelle conceptualisation. En: *Le Sexe du Travail, Structures familiales et système productif.* Presses Universitaires de Grenoble.

Kymlicka, W. y Wayne, N. 1994. Return to the Citizen: A Survey of Recent Work on Citizenship Theory. En: *Ethics,* N° 104, enero.

Laclau, E. 1986. Os novos movimentos sociais. *Revista Brasileira de Ciencias Sociais,* N° 2.

Lamoureux, D. 1989. *Citoyennes? Femmes, droit de vote et démocratie.* Montréal: Ed. Remue-ménage.

Lefort, C. 1981. *L'invention démocratique*. Paris: Fayard.
León, M. 1993. Avances y limitaciones de la relación entre Estado y mujer en América latina. En: *La mujer latinoamericana ante el reto del siglo XXI*. Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid.
Lister, R. 1995. *Whose Citizenship? The Gendering of Social Rights and Obligations*. Budapest: ESA, 30 agosto-2 septiembre.
Macpherson, C.B. 1985. Problems of Human Rights in the Late Twentieth Century. En: Macpherson, C.B., *The Rise and Fall of Economic Justice and Other Essays*. Oxford: Oxford University Press.
Marques-Pereira, B. 1989. *L'avortement en Belgique, de la clandestinité au débat politique*. Ediciones de la Universidad de Bruselas.
_____ . 1993. La multiplicité des rapports sociaux dans le cheminement d'une décision: le cas de l'avortement en Belgique. En: Gautier, A. y Heinen, J., *Le sexe des politiques sociales*. Paris: Côté-Femmes.
_____ . 1994. Le genre de la représentation. En: Beauchesne, M-N. y Zaid, L. *Women's Studies, Manuel de Ressources*. Bruselas: Services Fédéraux des Affaires Scientifiques.
Marshall, T.H. 1950, (1992). Citizenship and Social Class. En: Marshall, T.H. y Bottomore, T., *Citizenship and Social Class*. Londres: Pluto.
Mejía, M.C. 1995. El Vaticano y la conferencia de Beijing. México, mimeo.
Mouffe, Ch. 1979. Hegemony and Ideology in Gramsci. En: Mouffe, Ch., *Gramsci and Marxist Theory*. Londres: Routledge.
_____ . ed. 1992a. *Dimensions of Radical Democracy. Pluralism. Citizenship and Community*. London: Verso.
_____ . 1992b. Feminism, Citizenship and Radical Democratic Politics. En: Butler, J. y Scott, J., eds., *Feminists Theorize the Political*. London: Routledge.
_____ . 1993. *The Return of the Political*. London: Verso.
Phillips, Anne. 1993. *Democracy and Difference*. Londres: Polity Press.
PNUD. 1995. *Rapport mondial sur le développement humain*. Paris: Economica.
Razavi, Shahrashoub y Miller, Carol. 1995. *From WID to GAD. Conceptual Shifts in the Women and Development Discourse*. Ginebra: UNRISD.
Sledziewski, E. 1994. Fondements philosophiques de la démocratie paritaire. En: Beauchesne, M-N. y Zais, L. *Women's Studies, Manuel de Ressources*. Bruselas: Services Fédéraux des Affaires Scientifiques.
Turner, B.S. 1990. Outline of a Theory of Citizenship, *Sociology*, Vol. 24, N° 2, pp. 189-218.
_____ . 1993. *Citizenship and Social Theory*. Londres: Sage.
UNICEF. 1987. *The Invisible Adjustement*. Santiago de Chile.
Valdés, T. 1993. *El movimiento social de las mujeres y la producción de conocimientos sobre la condición de la mujer*. Santiago: FLACSO.
Young, Iris. 1990. *Justice and the Political Difference*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.



LAS TRABAJADORAS INTERPELAN A LA SOCIEDAD BRASILEÑA*

PAOLA CAPPELLIN

El término del siglo XX hace propicia la ocasión para hacer un balance de los movimientos de las trabajadoras del país. El examen de los caminos recorridos para conseguir formular sus demandas, para concretar grandes movilizaciones y para obtener sus conquistas, nos permitirá entender la manera en que ellas han venido interpelando a la sociedad brasileña y contribuyendo a renovar el contenido de la ciudadanía.

Este es el concepto más vigente en las dimensiones globales de la política y, al mismo tiempo, es el que tiene mayor presencia en los análisis de los estudiosos y en los discursos de los políticos. Sin embargo, con frecuencia aparece usado con significados bastante particulares y diversos. Por nuestra parte, lo usaremos en su sentido más general, vale decir, como conciencia de pertenecer a la sociedad, como capacidad del individuo de sentirse responsable del buen funcionamiento de las instituciones y como la obligación de las instituciones de respetar los derechos de hombres y mujeres (Touraine, 1992).

La modernización de la sociedad brasileña ha afectado de diferente manera a los distintos grupos sociales y ha producido variadas formas y distintos niveles de conflicto. En general, los segmentos de población que llegaron a organizarse y a mantener cierto nivel de movilización obtuvieron proyección política y ganaron espacios de interlocución con las instituciones del Estado; algunos directamente y otros con la ayuda de mediadores que reconocían la legitimidad de sus reivindicaciones.

---

* Extractos del documento *Las trabajadoras interpelan a la sociedad brasileña.* 1997. Trabajo presentado a la Red Internacional de Investigación sobre la Ciudadanía Social de las Mujeres en América Latina. Universidad Libre de Bruselas. (Traducción de Silvia Hernández)

Preciso es recordar que, si bien gran parte de los conflictos todavía emanaban de las relaciones de trabajo, en otras esferas de la vida social comienzan a aparecer nuevos campos de conflictividad (Offe, 1992). En esta perspectiva es posible comprender por qué los movimientos de las trabajadoras en sus reivindicaciones abarcan áreas que no están exclusivamente ligadas con su inserción productiva, sino que se relacionan más bien con su vida familiar.

En el mundo del trabajo los conflictos han enfrentado, muchas veces de manera simultánea, a las organizaciones sindicales, al Estado y a los empresarios. Es interesante observar que tales enfrentamientos no se reducen sólo a las reivindicaciones salariales, sino que se refieren también a las relaciones de la población con la sociedad como un todo.

Nos interesa destacar las contribuciones y el compromiso de las mujeres en el esfuerzo por alcanzar la ciudadanía, poniendo de manifiesto las circunstancias en que ellas hicieron de portavoces de demandas y de exigencias de derechos (Bobbio, 1992).

Reivindicaciones y quejas

Sin pretender rehacer la historia exhaustiva de las demandas formuladas por el movimiento sindical, podemos señalar una ruptura que, grosso modo, destaca el período 79-85 de los anteriores[1].

En los años sesenta las organizaciones sindicales centran sus reivindicaciones en las condiciones de producción, los derechos de los trabajadores y los aumentos salariales. La cuestión salarial es el blanco principal del cuestionamiento, incluso la crítica a las condiciones y a los ritmos del trabajo acaba teniendo como parámetro el salario. Las cuestiones relativas a las condiciones de vida y a la reproducción social de la familia permanecen en segundo plano o mediatizadas por la discusión sobre el salario. Por otro lado, como el Estado mantiene en sus programas sociales y de asistencia la misma filosofía que los gobiernos anteriores, admitiendo como interlocutores sólo a algunas categorías profesionales y a los jefes de las familias legalmente constituidas, la mayoría de las mujeres continúa siendo considerada como sujetos indirectos de ciudadanía.

En el período 1979-1985 crece rápidamente la movilización de diferentes sectores de la sociedad exigiendo la redemocratización del país, abriendo nuevos espacios de conflicto y sacudiendo el inmovilismo de las organizaciones de representación de clase. Las prácticas sindicales comienzan a renovarse. Sus organizaciones pasan por un intenso proceso de cuestionamiento interno y externo. Surgen corrientes sindicales innovadoras y críticas, las que comienzan como Oposiciones Sindicales y terminan siendo identificadas como sindicalismo auténtico o nuevo sindicalismo.

---

1. Moisés, 1982; Humphrey, 1982; Souza Lobo, 1989; Sader, 1991). Sobre la realidad rural ver Souza Martins, 1981; Novais, 1985; Palmeira, 1985; Cappellin, 1989.

El conflicto comienza a salir de los muros de las fábricas y de los límites de las relaciones de trabajo para alcanzar algunas dimensiones relativas a las condiciones de vida, especialmente en las ciudades donde éstas se han degradado rápida y peligrosamente, alcanzando niveles de expoliación y pauperización alarmantes (Korarick, 1988). Es el caso de la población residente en la periferia, la que se organiza en asociaciones de barrio y en movimientos populares, que los gobernantes consideran indeseables y desestabilizadores del orden autoritario. Sin embargo, estas organizaciones y estos movimientos pronto adquieren dimensiones nacionales, reformulando seriamente la representatividad de las instancias sindicales, su capacidad de mediación con el Estado y el carácter central de las luchas económicas. El fructífero diálogo entre las organizaciones sindicales y los movimientos populares trae como consecuencia importantes innovaciones en las formas de la movilización de los trabajadores. Se difunde el uso de las peticiones con recolección de firmas, piquetes de manifestación, manifiestos a la comunidad, audiencias y diálogos directos con los responsables de los poderes públicos, prefecturas, secretarías de administración municipal, estadual e incluso federal. Estos nuevos instrumentos de movilización resultan del intento de articular, en un temario coherente, las reivindicaciones clásicas provenientes del mundo del trabajo y el conjunto de demandas y quejas formuladas en contra de los servicios públicos que atienden las exigencias de la población en los barrios.

Interesantes ejemplos de la confluencia entre las reivindicaciones salariales, las exigencias de cambio en las relaciones y en las prácticas de trabajo y las demandas vinculadas a la condiciones de vida, son las huelgas en las fábricas de azúcar y los pillajes urbanos en los almacenes de alimentos, realizados en 1984 por los trabajadores y trabajadoras temporeros de la caña de azúcar en el municipio de Guariba (Sao Paulo), así como las huelgas de los recolectores de naranjas y los saqueos en el municipio de Bebedouro (Sao Paulo). Las luchas por mejores remuneraciones y por la firma del contrato de trabajo se extienden también, lo que es una novedad, para protestar contra los abusos de las autoridades municipales y estatales, que aumentan exorbitantemente las tarifas del agua potable y del alcantarillado, para exigir transporte gratuito al lugar de trabajo y una adecuada asistencia médica a todos los trabajadores y a sus familias. Las pautas de las reivindicaciones, en esos dos municipios de Sao Paulo, contienen diecinueve puntos y los acuerdos firmados terminan involucrando no sólo a los sindicatos y a los propietarios rurales, sino también a la Secretaría de Obras del Estado de Sao Paulo, la SABESP, y a las municipalidades, que se comprometen a estudiar *tarifas sociales* de agua y alcantarillado (FASE, 1987).

Es importante registrar que no se trata tan sólo del aumento cuantitativo de las plataformas de lucha, sino de la inauguración de un nuevo modelo que articula las condiciones de producción y las modalidades de vida. Es justamente en la confluencia de la herencia histórica del sindicalismo y las luchas por la mejoría de las condi-

ciones de vida donde comienza a percibirse que la población trabajadora, además de ejercer diversas ocupaciones, pertenece a sexos distintos y tiene responsabilidades diferentes en la familia.

Modificaciones del modelo de ciudadanía

La contribución de las mujeres a las ideas reformadoras progresistas tiene raíces históricas antiguas en Brasil. Desde la colonia escuchamos voces que preconizan la abolición de la esclavitud, la instauración de la república, el sufragio universal. El derecho a la ciudadanía política –derecho a voto– se obtiene en 1932, mucho antes que varios países de Europa (Francia, Italia, entre otros). Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que las aspiraciones a la ciudadanía en el mundo del trabajo, que busca proporcionar iguales oportunidades a hombres y mujeres, permanece en un profundo silencio, sólo interrumpido en el período 1979-1985.

En el campo político de la primera mitad de los años ochenta, la preocupación por mejorar las condiciones de vida actúa como palanca que amalgama diferentes sectores sociales que se movilizan por la redemocratización de la sociedad brasileña. Este objetivo permite comprometer y estimular a sectores que por mucho tiempo habían actuado separados. Así como se da una confluencia entre propuestas de renovación de la cultura sindical y los movimientos populares, también hay una convergencia entre los grupos de mujeres trabajadoras, los grupos feministas, algunas organizaciones sindicales, los partidos y algunos sectores que actúan en las instituciones de la administración del Estado. En estos espacios de encuentro, varios grupos llegan, por caminos diferentes, a concebir la necesidad de repensar la división sexual del trabajo. De este modo, muchas quejas y testimonios muestran su capacidad de ser fuente de denuncias y de demandas de nuevos derechos. Tales movimientos consiguen alcanzar los fundamentos de las relaciones sociales al cuestionar los principales espacios colectivos: el local de trabajo, la práctica sindical y la propia familia. Los grupos de mujeres imprimen un nuevo estilo a la reflexión, a la movilización, al debate, distinto de los tradicionales parámetros de la cultura sindical. Consiguen también, lentamente, penetrar en los intersticios de las estructuras de representación tradicionalmente ocupadas por hombres, en los directorios de las organizaciones sindicales, partidos políticos, asociaciones, comités, entre otros.

Crisis de la división sexual en el trabajo y en el sindicato

Es oportuno tener presente que a lo largo de los años ochenta ocurre, a nivel de la sociedad en general, una revisión de la imagen social de lo femenino: se difunden nuevas propuestas que reafirman el principio de equidad entre los sexos y se debaten y disputan modificaciones en el orden cultural y jurídico. Esta revisión se realiza

gracias a la intervención de diferentes segmentos de la sociedad. En este recorrido, a veces tortuoso, aparecen siempre con mayor claridad los lineamientos y los límites de aquello que sería propio de las mujeres, de aquello que les sería reconocido, permitido o atribuido como característico de su *naturaleza social*. Por comparación o contraposición, también podría llegar a comprenderse lo que sería propio de la *naturaleza social del hombre*. Más aún, se consigue hacer conciencia de que cualquier definición de los roles, de la imagen, de la identidad y de los códigos de comportamiento de la mujer es inestable, transitoria y en continua transformación, dado que tales concepciones culturales son el resultado del enfrentamiento entre los valores dominantes difundidos por las instituciones, por un lado, y los anhelos de cambio y las prácticas de contestación y sublevación de los movimientos de mujeres, por el otro.

Los diferentes movimientos de mujeres-trabajadoras alcanzan una fuerte resonancia en la sociedad porque no aceptan la imposición de un rol exclusivamente doméstico, luchan por una inserción profesionalizada en el mercado de trabajo y saben *inventar* nuevas formas de hacer política. Tales movimientos rechazan la rígida institucionalización adoptada por los partidos y por los sindicatos, proclaman enfáticamente su autonomía frente al Estado y muestran que son capaces de modelar, lentamente, un proyecto más actualizado de identidad femenina en la familia y en el trabajo.

Las mujeres de los sectores urbanos están al frente de varias prácticas reivindicativas ya a finales de los años sesenta. Participan, en 1968, del Movimiento Nacional contra la Carestía; en 1970, del Movimiento de Lucha por Salas Cuna; en 1974, del Movimiento Brasileño por la Amnistía; en 1975 crean los Grupos Feministas y los Centros de Mujeres. En las actividades de esos grupos son constantemente evaluados y revisados los roles sociales de las mujeres –el de madre, de esposa, de dueña de casa–, aunque la reflexión sobre el trabajo y la discriminación en el mercado del empleo no esté siempre presente. Hay que reconocer su importante contribución al proceso de redemocratización a través de sus demandas por la modificación de los códigos jurídicos, ya definitivamente superados, y por la promulgación de leyes más coherentes con la efectiva actuación económica y social de la mujer; a través de la crítica a la política salarial promovida por el Estado; a través de la demanda de servicios públicos de apoyo a la madre-trabajadora. Además, provenientes especialmente de grupos de mujeres de clase media, dueñas de casa o profesionales, varias organizaciones aglutinan orientaciones culturales e ideológicas diversas en torno de la lucha contra la violencia, la opresión y la discriminación de la mujer.

En este clima, tanto las trabajadoras urbanas como rurales introducen en su quehacer político un temario de reflexión en el cual la cotidianidad doméstica y del trabajo son el punto de partida para repensar la división sexual del trabajo y las relaciones de poder en las prácticas de representación. Algunas experiencias de movilización culminan en 1986 con la creación de la Comisión de los Asuntos de la Mujer

Trabajadora en el nivel nacional de la Central Unica de Trabajadores; por su parte, Fuerza Sindical instituye en 1992 la Secretaría Nacional de la Mujer, del Adolescente y de la Infancia. En las demandas presentadas por las trabajadoras a la Central Unica de Trabajadores y divulgadas por la prensa militante, resulta clara la continuidad entre las reflexiones elaboradas por las feministas y los anhelos expresados como fruto de las vivencias de las trabajadoras rurales y urbanas. En la Comisión de los Asuntos de la Mujer Trabajadora se perciben los ejes que articulan en la cotidianidad las prácticas familiares, el trabajo y la militancia sindical. El aporte del feminismo es reconocido en los discursos de las trabajadoras dirigentes sindicales.

La voluntad de articular ambos mundos se expresa en la elección del nombre de sus grupos: Movimientos de Mujeres-Trabajadoras. En esta expresión se unen los dos roles sociales que hasta hace poco tiempo se consideraban contrarios al supuesto bienestar de la familia. Esta manera de autodenominarse expresa también la voluntad de oponerse a algunas vertientes políticas del movimiento obrero: en particular a aquellas que consideran fundamental la contradicción entre las clases y secundaria la fundada en la desigualdad de género. En oposición a esa perspectiva, los Movimientos de Mujeres-Trabajadoras se proponen especificar y afirmar la especificidad femenina al interior del enfoque clasista, sin por eso proponer, ni presumir, una alianza solidaria con mujeres pertenecientes a otras clases sociales. Surge entonces la necesidad de reexaminar el modo de ejercer sus diversos roles: de esposa, de madre, de hija, de administradora del presupuesto familiar, de proveedora, de profesional competente. Se cuestionan las atribuciones domésticas y extra domésticas típicas de hombres y de mujeres; se compara lo que significa ser madre o ser padre, ser esposa o ser jefe de familia, ser dueña de casa o ser trabajador proveedor, ser educadora o ser militante sindical. Sus cuestionamientos muestran que, para renovar el concepto de *feminei-dad,* es indispensable renovar también el concepto de *masculinidad,* combatiendo el machismo imperante en sus hogares, en el trabajo y en el propio sindicato. Las expresiones en los foros de la lucha sindical rural ilustran claramente esta búsqueda por establecer la igualdad de género.

Los movimientos de las mujeres rurales

Las movilizaciones de las trabajadoras rurales (Benevides Mesquita, 1991) ilustran muy bien la capacidad de vincular las reflexiones sobre la vida doméstica con las demandas de los movimientos populares. A menudo, tales movilizaciones tienen una consistencia interna frágil; sin embargo, ellas expresan toda la riqueza y las potencialidades creadoras de la crítica a la división sexual del trabajo, llegando a presentar en sus reivindicaciones como trabajadoras una clara confluencia con el ideario feminista.

Durante mucho tiempo prevalecieron ideas que hoy sabemos erradas respecto a las trabajadoras rurales. Se pensaba que era muy difícil movilizarlas, puesto que su

inserción en el mercado laboral se consideraba irregular y provisoria. Además, prevalecía la convicción de que eran las principales depositarias y reproductoras de los valores patriarcales dominantes en la sociedad rural brasileña. Sin embargo, varios estudios de académicos y de militantes muestran que tales ideas ya no corresponden a la realidad. En primer lugar, en lo que se refiere a su participación productiva, lejos de ser temporal e irregular, es masiva y marcada por una prolongada jornada de trabajo, bajos salarios, y ausencia o no aplicación de la legislación del trabajo. En segundo lugar, y respecto a su disposición a luchar, sus movilizaciones ya han alcanzado visibilidad a través de manifestaciones, protestas, petitorios, que reclaman el respeto a la legislación, el acceso a la previsión social, como asimismo el derecho a participar activamente en sus sindicatos.

Las experiencias de vida relatadas por las mujeres rurales denotan que en su cotidiano no existe una clara distinción entre los límites de la casa y del trabajo, entre las actividades domésticas y las tareas agrícolas, entre las responsabilidades de la educación de los hijos y de la vida comunitaria. En el campo, la autoridad del jefe de familia (del padre o del marido) extrapola el espacio doméstico y se impone, muchas veces, negando la participación de las mujeres en las decisiones de las cooperativas, de los bancos, de las asociaciones de productores y de los sindicatos. Por tanto, al realizar sus movilizaciones, las mujeres se enfrentan con la disciplina y las reglas jerárquicas impuestas por la autoridad de los hombres.

La experiencia de movilización de las mujeres rurales no surge de la práctica sindical, sino a partir de reflexiones y discusiones sobre las condiciones de vida realizadas en pequeños grupos, en su mayoría religiosos, ligados a las Pastorales y presentes en todo el territorio brasileño. También en grupos laicos, producto de las movilizaciones para resistir a las expulsiones de las haciendas provocadas por la modernización de la agricultura. Es importante destacar que en todos estos casos son las mujeres las que toman la iniciativa para promover las reuniones, organizarlas y dirigirlas. Es conveniente observar algunas características específicas de esas organizaciones, puesto que ellas han explorado diferentes caminos de lucha y de movilización.

La participación en los grupos comunitarios organizados por la Iglesia Católica, en las diócesis o en las parroquias, rescata las prácticas educativas en el seno de la familia y en la comunidad, donde la mujer se considera la artífice de la solidaridad. Los temas de reflexión se apoyan en la Teología de la Liberación en la Optica de la Mujer. En las propuestas de esta corriente teológica aparece en primer plano la preocupación por la injusticia social que se extiende por América Latina, así como resalta la participación de la mujer en el fortalecimiento de los lazos afectivos: su rol de madre, de esposa, de administradora del hogar. Su identidad se forma, entonces, al interior del núcleo doméstico y se completa en la comunidad católica.

Los grupos de mujeres nacidos en el seno de la Pastoral de la Tierra van más allá del rescate de la identidad femenina ligada al hogar. No olvidan los lazos familia-

res y los problemas de la vida doméstica, sino que los vinculan con las condiciones de vida de los productores rurales, problematizando principalmente la fragilidad y la precariedad del vínculo con la tierra. Estos grupos se han constituido en importante soporte de las luchas y de los movimientos iniciados en los años setenta contra la reestructuración de las grandes haciendas, que conduce a la expulsión de muchos campesinos y a la sustitución de sus cultivos para el consumo por cultivos comercializables o por pecuaria bovina extensiva. Son los grupos de mujeres-trabajadoras los que, hacia el fin de la década, apelan a los sindicatos para que asuman con mayor determinación la defensa y la preservación del vínculo con la tierra, dando a los productores mayor fuerza para enfrentar a los propietarios rurales. Ya en la década de 1980, los debates que se producen en los períodos de elecciones sindicales y el fortalecimiento en el campo de los grupos de Oposición Sindical, estimulan una serie de acciones puntuales y locales que conducen a muchas trabajadoras a transformarse en sindicalistas activas.

Otra importante vía de iniciación en la política son los Clubes de Madres y los Grupos de Mujeres Trabajadoras. Estos nacen como instrumentos para denunciar la ausencia o la precariedad de los servicios colectivos municipales en las poblaciones. El apoyo de profesionales de las principales áreas de debate (educadoras, enfermeras, médicas, asistentes sociales) y los aportes de la reflexión feminista contribuyen a que la discusión temática alcance una articulación de dimensiones antes impensables: mujeres-salud-ciudadanía (Congreso Nacional, 1986). El tema de la salud conduce a las mujeres a movilizarse por los problemas de la maternidad –embarazo, parto, lactancia, enfermedades post-parto, mortalidad infantil y materna, control del cáncer, entre otros– y a formular demandas que reivindican mejores condiciones médico-hospitalarias y asistenciales en sus propios municipios. Es importante señalar que las mujeres que participan en estos grupos no se reúnen en cuanto trabajadoras, sino como ciudadanas-excluidas o usuarias-mal-atendidas de los servicios públicos esenciales. El ritmo y la intensidad de la movilización difieren de una región a otra, pero en todas ellas las mujeres reivindican *derechos* y no favores. Muchos de estos grupos consiguen mantener su capacidad de movilización para cuestiones políticas más amplias, las que emanan de los temarios que dieron origen a su formación.

En el Nordeste, con ocasión de las grandes sequías de 1978 y 1982, frente a los frecuentes atrasos en la implementación de programas de emergencia y a la demora, cuando no desvíos, en la distribución de los alimentos, las mujeres exigen acceso a empleos en los frentes de trabajo, contratos que respeten los derechos previstos en la legislación –salario mínimo integral y previsión social– y reivindican la apertura de salas cuna en los locales de trabajo. Se movilizan en favor de las demandas de los productores rurales que en los períodos de sequía reivindican el acceso a las tierras públicas y privadas regadas para sembrar y alimentarse.

Finalmente, hay otros movimientos en los que las mujeres participan intensa-

mente, y donde sus contribuciones son determinantes: son los movimientos de ocupación de tierras, que estallan con gran fuerza a mediados de los años ochenta, cuando el país se democratiza, y especialmente a partir del lanzamiento del frustrado y frustrante Plan de Reforma Agraria. Organizados por el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) y por otras entidades comunitarias, religiosas y laicas, grupos de familias de agricultores ocupan tierras no explotadas de propiedades públicas y privadas. En la organización básica de estos campamentos las mujeres desempeñan múltiples roles: son productoras rurales, organizadoras de las actividades domésticas y, también, muy activas en las movilizaciones para resistir a la fuerza policial y a la violencia de propietarios o especuladores. La precariedad de los campamentos, donde no existen los servicios mínimos –agua, energía eléctrica, escuela, puesto de salud–, coloca en primer plano las actividades domésticas y evidencia el valor de la capacidad organizativa y la disciplina de las mujeres. Ellas logran mantener estructurado no sólo el espacio doméstico de sus familias, sino también los espacios comunitarios del campamento. Su actuación les permite tejer fuertes lazos de solidaridad femenina y reafirmar su importancia en el núcleo familiar.

Los diversos procesos en los que las mujeres-trabajadoras se organizan y se movilizan llevan a conceder mayor valor a sus contribuciones. Sin embargo, lo que interesa poner de relieve es su definitiva integración en las luchas sociales y su importante papel en la renovación de la propia cultura sindical. En efecto, ellas han permitido poner en práctica algunas transformaciones importantes: han contribuido a la politización de la vida doméstica cotidiana, han desempeñado la función pedagógica de romper el aislamiento de las mujeres en el seno de la familia, han abierto el camino para que se considere importante, legítimo y político el paso de las inquietudes individuales a la reflexión colectiva.

De trabajadoras a dirigentas sindicales

Las organizaciones sindicales aparecen como estructuras con una relativa permanencia, productoras de códigos de conducta, portadoras del poder de mediación en las relaciones de trabajo y con las instituciones reconocidas por la legitimidad democrática. Es comprensible, entonces, que las mujeres-trabajadoras, en búsqueda de renovación de su ciudadanía en el mundo del trabajo, aprecien las relaciones que van estrechando con las organizaciones sindicales. Muchas de ellas ya integran en su vida cotidiana responsabilidades de dirección en la estructura sindical, además del empleo y de las actividades doméstico-familiares. Sin embargo, llegar a formar parte de las direcciones no es ni fácil ni inmediato, todo lo contrario; es el resultado de un lento proceso de socialización política (Oppo, 1980).

Para las sindicalistas rurales, el primer ambiente donde nace y se desarrolla su orientación política es, frecuentemente, la familia. Investigaciones realizadas mues-

tran que los lazos familiares constituyen referencias importantes en la socialización hacia la vida sindical. Para las sindicalistas urbanas, el ambiente de trabajo y las relaciones de amistad y camaradería entre colegas, son los que estimulan el primer contacto con la organización. En general, ya en el primer contacto aparece la voluntad de sindicalizarse.

Es interesante observar que para muchas trabajadoras urbanas y rurales la sindicalización no es particularmente motivada por los servicios y beneficios que puede proporcionar el sindicato, responde más bien al deseo de hacer algo en pro de los demás o de ayudar a algún familiar dirigente o, sencillamente, de conocer la organización por dentro.

La mayoría de las actuales sindicalistas forma parte de una generación políticamente muy activa en el escenario nacional de mediados de la década de los ochenta. El hecho de ser relativamente jóvenes en la vida sindical no debe ser mal interpretado. Participan de las experiencias de los movimientos populares que permanecen al margen del sindicato y consiguen incorporar en sus concepciones políticas una visión más amplia de ciudadanía, discutiendo las condiciones específicas de la profesión y de la vida doméstica cotidiana.

En esa militancia aprenden los principios de lealtad con su clase, lo que dará sentido a su futura carrera en la estructura sindical y, en cierta forma, hará de contrapunto con las prácticas de la militancia de su país, la de los sindicalistas que en los años sesenta encontraban el campo político *bloqueado* (Cappellin, 1994).

Asimetrías e igualdad de género

En el proceso de elaboración de la Constitución de 1988 participaron muchas mujeres, de diferentes segmentos sociales y con distintas aproximaciones hacia la crítica de la desigualdad sexual en el mundo del trabajo y en las relaciones familiares.

En ese intenso debate hay dos importantes procesos que ayudan a fortalecer la conciencia y los argumentos de las mujeres. Por una parte, la necesidad de formalizar los principios de la igualdad en pautas universalmente reconocidas lleva a las mujeres y a sus movimientos a mostrar de manera más impactante las características de las situaciones de discriminación, cuantificándolas mediante estudios y estadísticas. Por otra parte, las mujeres empiezan a valorizar las normas y las leyes, de manera que se ocupan de la elaboración de reglas, medidas y principios capaces de garantizar el equilibrio en la participación de hombres y mujeres en las diferentes esferas de la vida social, exigiendo incluso que estas reglas sean jurídicamente formalizadas a nivel nacional, regional y local.

Los estudios cuantitativos, así como el interés por encontrar nuevos indicadores, acaban por demostrar que los efectos de la discriminación sexual alcanzan niveles significativos, al punto de ser considerados socialmente preocupantes. Pero no son

los estudios académicos o los análisis de vocación feminista los únicos que producen conocimientos en el campo de las relaciones de género. En esta tarea también participan los medios de comunicación de masas, algunos aparatos de la administración pública (ministerios, municipalidades), organizaciones profesionales, centros de estudios sindicales y también las propias organizaciones sindicales.

El primer resultado de este esfuerzo de actualización es la superación de viejas tesis y la formulación de otras nuevas. Se abandona la idea de que, en el mercado de trabajo, las mujeres forman parte del ejército industrial de reserva, entrando y saliendo del mercado al tenor de las coyunturas y de los ciclos económicos. Se demuestra que la segregación ocupacional de las mujeres no se basa sólo en la discriminación sexual, sino que se ve reforzada por la discriminación racial. Se prueba que las dificultades que ellas encuentran para acceder a las distintas carreras profesionales no se deben sólo a sus bajos índices de escolarización o de especialización, en relación a los de los hombres, puesto que persisten serias dificultades incluso en los casos en que los índices son semejantes. Se demuestra la persistencia de las marcadas diferencias salariales entre ellas y los trabajadores. Se registra la alta frecuencia de núcleos familiares con jefa de hogar mujer. Se denuncia la creciente tasa de esterilización definitiva de mujeres, incentivada por los empleadores y, muchas veces, ejecutada sin el consentimiento de las pacientes. Se divulgan las primeras denuncias y los primeros levantamientos en contra del acoso sexual en los lugares de trabajo. Se registra, al mismo tiempo, una menor participación de las mujeres en actos públicos, seminarios y debates promovidos por las asociaciones de categorías profesionales, así como en los congresos y manifestaciones sindicales.

Todos esos conocimientos sirven para producir nuevas demandas y reivindicaciones actualizadas. En este sentido, hay que recordar que con ocasión del Censo Demográfico de 1991, las trabajadoras rurales promovieron en todo el país la campaña *Trabajadora rural, declara tu profesión*, como una forma de incentivar a las mujeres de los productores rurales familiares a no declararse como dueña de casa a los entrevistadores del IBGE, sino como *trabajadora rural.* Esta movilización es el resultado de la comprensión de que las estadísticas nacionales siempre han subestimado la participación activa de las mujeres, produciendo una visión simplificada, cuando no errónea, de todas las actividades emprendidas por ellas, tanto en el hogar como fuera de él. Y su objetivo explícito: corregir los criterios de la contabilidad nacional, en el sentido de adecuarlos a la identidad emergente de la mujeres-trabajadoras rurales. De hecho, ya no se consideran más como dueñas-de-casa que ayudan ocasionalmente a los familiares (hombres) en la agricultura; se consideran agricultoras, profesionalmente activas, corresponsables de las decisiones y de la gestión de las actividades productivas.

Otro ejemplo lo constituyen las demandas que las trabajadoras rurales y urbanas dirigen a sus organizaciones, en el sentido de establecer cuotas proporcionales de

hombres y mujeres para el acceso a cursos, seminarios, pasantías y viajes de estudio, es decir, a todas aquellas actividades de actualización profesional que promueven el intercambio y sirven para prepararse de mejor forma, con el objeto de enfrentar los nuevos desafíos del mundo del trabajo.

Estas preocupaciones amplían la ya larga lista de reivindicaciones destinadas a consolidar la posición de las trabajadoras en los sindicatos. El entusiasmo que pusieron en las campañas de sindicalización en la década del ochenta, es fruto de la percepción de que existe censura (en el medio rural), negligencia y desvalorización (en el medio urbano) hacia el potencial movilizador de las trabajadoras.

En los años noventa, las trabajadoras se proponen corregir otro desequilibrio: la asimetría entre la cantidad de trabajadores delegados sindicales y la de las trabajadoras que delegan su representación. Luego de documentar con estadísticas la impactante disparidad entre el sustancial aumento de mujeres asociadas y su reducida participación en las instancias de dirección, reivindican una mayor participación de las mujeres en la estructura sindical[2]. Los estudios en que basan estas reivindicaciones son elaborados por las propias trabajadoras en sus categorías profesionales (bancarias, metalúrgicas, telefónicas, entre otras), y son apoyadas, también, por investigaciones de diferentes centros de estudios. Estos trabajos no sólo caracterizan la composición por sexo de las directivas sindicales, sino que han llegado a identificar y a hacer conocidas las que se podrían llamar *especialidades* dentro de la carrera sindical, así como las barreras que se ponen a las mujeres (Balçao, 1993).

La gran mayoría de las trabajadoras que llegan a ser elegidas en las directivas, desempeñan las tareas cotidianas; rara vez participan en las negociaciones, y sólo excepcionalmente representan a su categoría profesional fuera de la entidad sindical, aunque tengan un alto nivel educacional, muchas veces superior al de los dirigentes (Cappellin, 1994).

A pesar de estar relegadas a tareas auxiliares, y sometidas a una estratificación jerarquizada, las sindicalistas saben crecer políticamente en sus organizaciones. Al realizar esas tareas burocráticas, consiguen establecer un contacto permanente con los trabajadores al mismo tiempo que desarrollan capacidad para transmitir orientaciones a su clase. Divulgar y comunicar eventos y nuevas directrices se transforma casi en una especialidad de su trabajo político. En varias entidades sindicales, el trabajo de articulación con la Central Sindical, con la Federación, con la Inter-Sindical Municipal, es adjudicado a las mujeres por las directivas. Su trabajo cotidiano pasa a ser un continuo *entrar-y-salir* de las reuniones impuestas por el denso calendario

---

2. La población afiliada a sindicatos o a asociaciones alcanzaba en 1989 a un 17,6% (13,8% a sindicatos y 3,8% a asociaciones): un 74,4% eran hombres y un 25,6% mujeres. Cappellin, P. 1989. Mulheres novos sujeitos políticos. En: *Camuflagem e transparência. As mulheres no sindicalismo*. Sao Paulo: CUT/CEDI.

sindical. Su agenda se repleta de actividades que exigen eficiencia en la coordinación y en la planificación, así como eficacia en la mediación.

Estas actividades proporcionan a las mujeres un capital político que van acumulando lentamente y que acaba fortaleciendo su visibilidad, aunque sólo sea en el interior del sindicato. Las únicas que tienen oportunidad de representar a su categoría en ámbitos externos, negociando con otros actores políticos, son las que ocupan el cargo de presidente en el directorio. Hay estudios que demuestran que la capacidad o la competencia para transmitir los mensajes reivindicativos fuera de su sindicato sólo les es legítimamente reconocida cuando hablan en nombre de las propias trabajadoras.

En los directorios, desarrollan un estilo propio de trabajo sindical, incentivadas por la percepción de que su éxito es resultado de un continuo desafío personal, un esfuerzo muy solitario, sustentado sobre todo en el interés por no decepcionar a quienes las eligieron, y por la persistente preocupación de demostrar a sus concurrentes (los hombres) que son competentes y, por lo tanto, legítimas detentadoras de sus cargos. La estructura sindical invierte muy poco en ellas; y los relatos de las sindicalistas muestran que tienen una clara conciencia de que las responsabilidades se distribuyen de acuerdo a una lógica sexista y su consecuente desvalorización política. Sin embargo, hay varias entidades sindicales en las que las tradicionales barreras de exclusión, en la distribución del trabajo político, están siendo cambiadas por prácticas efectivas de inclusión. De tal manera, las sindicalistas tienen que aprender a bregar de forma cooperativa con relaciones competitivas entre los sexos: el presidente y la secretaria, el vicepresidente y la segunda secretaria, el miembro titular del consejo fiscal y su suplente.

En 1993, la Central Unica de Trabajadores (CUT), luego de dos años de debates promovidos por las trabajadoras, busca reducir las disparidades sexuales abriéndoles un mayor espacio en las directivas, para lo cual introduce la práctica de fijar cuotas mínimas de mujeres como el mecanismo más apropiado para ese fin (Soares, 1993).

El mecanismo de las cuotas no se agota en la legitimidad del equilibrio numérico, se apoya más bien en el principio de la integración democrática de la diferencia de género. Es verdad que esta medida no consigue, por sí sola, resolver el problema de la segregación de los espacios ocupados por las mujeres en la estructura sindical. Pero produce el primer efecto de interferir directamente en el proceso de formación de las listas de candidatos y en el propio proceso de elección, desenmascarando los prejuicios y las desconfianzas de que son objeto las trabajadoras. También actúa como un elemento que legitima la elección de las dirigentas, puesto que responde a la constatación de hechos reales: la objetiva presencia de las mujeres en el mercado de trabajo (40% de la población activa), su efectiva adhesión al sindicato (25% de sindicalización femenina) y su participación en las acciones reivindicativas y en las movilizaciones. El mecanismo de las cuotas reconoce a las trabajadoras competencia política, otorgándoles tal derecho como un principio general.

Las trabajadoras también comienzan a valorar las normas y las leyes como medios capaces de reequilibrar la participación de hombres y mujeres en las diferentes esferas de la vida social. Es por eso que se preocupan del proceso de elaboración de la nueva Carta Constitucional y vigilan de cerca el proceso de dictación de los reglamentos de las leyes ordinarias.

Interpelando a la sociedad

En esta parte propondremos algunos elementos de interpretación con el propósito de completar las reflexiones sobre los transcursos de las movilizaciones, los contenidos de las reivindicaciones en el mundo del trabajo, y los medios para que éstas lleguen a ser consideradas como demandas de ciudadanía.

En primer lugar, la construcción de lo femenino y de lo masculino emerge como un tema de gran riqueza al interior de los conflictos propios del trabajo. La mujer-trabajadora rechaza la prioridad y la exclusividad que se asigna habitualmente al rol de dueña de casa; tampoco reconoce en el trabajo extra-doméstico ninguna *fuerza emancipadora*, ni acepta más la subordinación a una autoridad patriarcal.

Las propuestas de reflexión que surgen del análisis de los movimientos del campo y de la ciudad, nos alertan sobre el extremo simplismo en que se cae al separar el trabajo productivo del trabajo doméstico. Más fructíferos aparecen aquellos análisis que parten de lo cotidiano, dado que en ellos es posible ver la articulación de relaciones estructuradas en diferentes esferas –productiva, reproductiva, de toma de decisiones y de representación político-sindical– sin conceder a ninguna de ellas una posición jerárquica predominante (Heller, 1972). La perspectiva de lo cotidiano, en tanto que nuevo escenario de conflictos, parece más apropiada para comprender los procesos de los movimientos de trabajadoras, en la medida en que sus luchas contra las asimetrías de género rompen también con la primacía de las relaciones de trabajo sobre las doméstico-familiares.

En segundo lugar, y a propósito de la ciudadanía, estamos convencidas de que en el Brasil de hoy aún continúa siendo difícil hablar de mujeres en un sentido general. De hecho, las grandes diferencias y disparidades que se dan entre las mujeres en relación a la disposición de recursos económicos y culturales, hacen que sean también dispares las oportunidades y diferentes las trayectorias. Es por eso que para el análisis de las mujeres-trabajadoras, optamos por centrarnos en la ciudadanía social –aquella que se refiere a los derechos en el mundo del trabajo–, antes que en la ciudadanía política –que radica en la autodeterminación, en la participación y en la libre elección de los representantes políticos– de cuya conquista las mujeres gozan ya desde 1932.

Nos interesa enfatizar la especificidad del estatuto de ciudadanía que produce la participación de las mujeres en el mundo del trabajo. Este involucra los derechos

sociales en el empleo, en tanto esfera pública, y en las relaciones familiares, en tanto esfera privada. En este contexto, la demanda de ciudadanía social se refiere a los cambios promovidos por la igualdad de trabajadoras y trabajadores para acceder al mercado de trabajo, a la carrera profesional, al sistema de previsión social y a los servicios de asistencia. Además, a la introducción de modelos capaces de valorizar la *simetría de género* en la repartición de las responsabilidades, en los procesos de toma de decisiones en la convivencia familiar y, también, en la ejecución de diferentes actividades. Para alcanzar los derechos sociales, las trabajadoras impulsan modificaciones complejas que afectan arraigadas dimensiones culturales de la división sexual del trabajo. Cuestionan su marginalización en la definición de los derechos, intentan abolir la discriminación de género en las relaciones económicas, culturales y sociales, exigiendo, además, la igualdad con los hombres en el ejercicio de las responsabilidades familiares. Estas iniciativas procuran superar las ambigüedades y las tensiones al interior de los estatutos sociales: el de trabajadora y trabajador, el de esposa y marido, el de padre y madre (Saraceno, 1994).

También permiten que las trabajadoras se agrupen y se movilicen, involucrando a varios actores colectivos con poder de mediación y de arbitraje social –sindicatos, centrales sindicales, ONG y el propio Estado– ganando el apoyo de interlocutores influyentes sobre la opinión pública: medios de comunicación, centros de investigación, universidades, grupos feministas, parlamentarios, agencias internacionales, entidades asociativas y confesionales, entre otros. Gracias a la ampliación de este flujo de informaciones, a la elaboración de un lenguaje reivindicativo apropiado a los problemas de las diferencias de género, y debido a la construcción de formas innovadoras de representación, las trabajadoras logran formular principios sociales y jurídicos sobre la igualdad de género. En este sentido, podemos decir que ya desde fines de los años setenta los movimientos de trabajadoras están interpelando a la sociedad. Sin duda, su capacidad de argumentar, de instaurar diálogos, de alcanzar consensos para elaborar nuevas normas y para actualizar valores y mecanismos de socialización, representa una muy importante contribución al proceso de maduración de la sociedad y de profundización de las relaciones democráticas (Touraine, 1992).

Bibliografía

Balçao, N. 1993. Discriminação de género e omissão sindical. En: *CUT, espaço de mulheres e de homens.* Sao Paulo: CUT.

Battaglia, F. 1971. I dirigenti sindacali italiani: alcuni dati. *Rivista Rassegna Italiana di Sociologia,* Milano, N° 2.

Benevides Mesquita, M.V. 1991. *A cidadania ativa.* Sao Paulo: Atica.

Bobbio, N. 1992. *A era dos direitos.* Rio Cumprido: Ed. Campus.

Brito, N.N. y J. Reis Prá. 1987. Movimentos de mulheres no Sul. En: *Mulheres, da domesticidade à cidadania.* Sao Paulo: ANPOCS.

Cappellin, Paola. 1989. Silenciosas e combativas. As contribuições das mulheres na estrutura sindical do Nordeste. En: *Rebeldia e Submissão,* Sao Paulo: Vértice.

_____ . 1989. Mulheres novos sujeitos politicos. En: *Camuflagem e transparência. As mulheres no sindicalismo.* Sao Paulo: CUT/CEDI.

_____ . 1989. Sindicalistas: vontade e decisão de estar na lista política. *Debate Sindical.* Sao Paulo: DESEP-CUT, N° 10, mayo.

_____ . 1994. *Atrás das práticas: o perfil das sindicalistas,* GT Trabalhadores, Sindicalismo e Política, XVIII Encuentro Nacional ANPOCS, Caxambu, (mimeo).

Cappellin, P. y L. Lavinas. 1990. Gênero e classe: mulheres trabalhadoras rurais. En: *Mulheres trabalhadoras rurais: participação e luta sindical.* Rio de Janeiro: CEDI/CUT.

_____ . 1990. Sindicalistas: olhares sobre a relação homem-mulher. En: *Mulheres trabalhadoras rurais: participação e luta sindical.* Rio de Janeiro: CEDI/CUT.

Castro Gomes, A. 1991. A república, trabalho e cidadania. En: *Corporativismo e desigualdade.* Rio de Janeiro: Fundo Editora y IUPERJ.

Delgado, M.B. 1994. Relações difíceis mas promissoras. *Mulheres, Revista Tempo e Presença,* N° 248. Rio de Janeiro: CEDI.

dos Santos, W. 1979. *Cidadania e justiça.* Rio Cumprido: Ed. Campus.

FASE. 1987. *Bóias frias, sangue quente.* Rio de Janeiro.

Foro El Congreso Nacional Mulher e Saúde. 1986. Itapecirica, Brasil.

Heller, A. 1972. *O cotidiano e a historia.* Sao Paulo: Paz e Terra.

Humphrey, J. 1982. *Controle capitalista e luta operaria na industria automobilística.* Petropolis: Vozes.

Korarick, L., ed. 1988. *As lutas sociais e a cidade.* Sao Paulo: Paz e Terra, CEDEC y UNRISD.

Mendonça, V. 1994. *Movimentos de mulheres ou mulheres em movimentos. Percursos das militantes do Brejo paraibano.* Tesis de maestría, UFPB, (mimeo).

Miele, N. 1985. *A mulher na palha da cana.* Tesis de maestría, UFPB, (mimeo).

Miranda de Oliveira, J. O. 1989. O desafio de superar a exclusão. En: *Camuflagem e transparência. As mulheres no sindicalismo.* Sao Paulo: CUT/CEDI.

Moisés, J.A. 1982. O Estado. As contradições urbanas e os movimentos sociais. En: *Cidade, povo e poder.* Petropolis: Vozes.

Novais, R. 1985. A questão agraria e o papel da Igreja Católica na Paraiba. En: *Igreja e a questão agraria.* Sao Paulo: Ed. Loyola.

Offe, C. 1989. *O capitalismo desorganizado.* Sao Paulo: Brasiliense.

Oppo, A. org. 1980. *La socializzazione politica.* Bologna: Il Mulino.

Palmeira, M. 1955. A diversidade da luta no campo: luta camponesa e diferenciação do campesinato. En: *Igreja e a questão agraria.* Sao Paulo: Ed. Loyola.

Primera Conferencia Nacional Saúde e Direitos da Mulher. 1986. Brasilia.

Regalia, I. 1987. Partecipazione al sindacato. Forme, modelli, ipotesi. Milano: *Rivista Quaderni di Sociologia,* N° 9.

Sader, E. 1991. *Quando novos personagens entram em cena.* Sao Paulo: Brasiliense.

Saraceno, Ch. 1994. A dependência construída e interdepêndencia negada. Estruturas de gênero da cidadania. En: *Dilemas da cidadania.* Sao Paulo: UNESP.

Soares, V. 1993. As trabalhadoras, os sindicato e a CUT: incluir as mulheres nas diretorias. En: *CUT, espaço de mulheres e de homens*. Sao Paulo: CUT.

Souza Lobo, E. 1989. Uma nova identidade. En: *Mulheres, tempo e presença*. Rio de Janeiro: CEDI, N° 248.

_____ . 1991. *A classe operária tem dois sexos. Trabalho, dominação e resistência.* Sao Paulo: Brasiliense y SMC.

Souza Martins, J. 1981. *Os camponeses e a política no Brasil.* Petropolis: Vozes.

Touraine, Alain. 1992. *Critique de la modernité*. Paris: Fayard.

Vasco Ferreira, I. 1991. *Por uma imagem da mulher. A campanha da fraternidade de 1990 e as relações de gênero no Movimento de mulheres no oeste do Paraná.* Tesis de maestría, UFRJ, (mimeo).


CON CARIÑO
LA MUSICA
DE UN ABUELO

Autoras

Rosario Aguirre

Socióloga uruguaya. Profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de Uruguay (CIEDUR). Autora, entre otros, de: Les femmes en Amérique latine: actions collectives et quête d'une représentation politique, en: Marques-Pereira, B., y Carrier, A. coord., *La citoyenneté sociale des femmes au Brésil*, UNESCO, CELA-IS, Bruxelles: L'Harmattan, 1996; *Los desafíos después de Beijing en los países del Mercosur* (coautoría con M. Percovich), PROSUR, F.F. Ebert, Montevideo, 1996.

Jeanine Anderson

Antropóloga estadounidense/peruana. Catedrática de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha investigado diversos temas relativos a política social. Sus últimas publicaciones incluyen: Desigualdades, procedimientos y complejidad de los sistemas de género, en: Guzmán, V. y Hola, E., editoras, *El conocimiento como un hecho político*, Santiago, CEM, 1996; La política de la familia y el 'Otro' en el pensamiento social peruano, en: Anderson, J., editora, *Género y política social en el Perú*, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú (en preparación).

Paola Cappellin

Socióloga italiana. Profesora e investigadora del Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales, Universidad Federal de Río de Janeiro e integrante del Comité de Especialistas de CFEMEA. Sus últimas publicaciones incluyen: O movimento de trabalhadoras interpela a sociedade brasileira, en: Delpriore, E., ed., *A historia das mulheres no Brasil*, Ed. Contexto Brasil, 1997; Atrás das práticas: perfil das mulheres nos sindicatos brasileiros, *Estudios em Ciencias Sociais* N° 13, Rio de Janeiro, 1997; A valorizacion do trabalho femenino: a contextualização das ações afirmativas, *Estudos Feministas*, CIEC/UFRJ, 1996.

Elizabeth Jelin

Doctora en Sociología, argentina. Investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Investigadora del CONICET. Autora, entre otros, de: *Vida cotidiana y control institucional en la Argentina de los noventa*, Buenos Aires, 1996; *Construir la democracia: derechos humanos, justicia y sociedad en América Latina* (co-editora con Eric Hersberg), Caracas: Nueva Sociedad, 1996.

Eugenia Hola

Socióloga chilena, investigadora en el Centro de Estudios de la Mujer, CEM, Santiago. Sus áreas de trabajo son ciudadanía, políticas públicas, trabajo. Sus últimas publicaciones incluyen: *El conocimiento como un hecho político* (co-editora con Virginia Guzmán), Ediciones CEM, Santiago, 1996; *Mujer, poder y política*, Santiago, Ediciones CEM, 1994; *Los mecanismos del poder. Hombres y mujeres en la empresa moderna.* Santiago, Ediciones CEM, 1992.

Bérengère Marques-Pereira

Doctora en Ciencias Políticas, belga. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Libre de Bruselas; Directora del Centro de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Sociología (CILA-IS) de la misma universidad. Profesora invitada en el Instituto de Estudios Políticos de París. Sus últimas publicaciones incluyen: *La citoyenneté sociale des femmes au Brésil* (coord. con A. Carrier), Paris, L'Harmattan, 1996; *La citoyenneté sociale en Amérique latine* (coord. con I. Bizberg), Paris, L'Harmattan, 1995; *L'Amérique latine: vers la démocratie* (coord.), Bruxelles, Ed. Complexe, 1993.

Maxine Molyneux

Socióloga política, inglesa. Senior Lecturer del Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Londres. Sus más recientes publicaciones incluyen: *State, Gender and Institutional Change in Cuba's 'Special Period': The Federation de Mujeres Cubanas*, 1996, pp. 55, ILAS Research Paper Series, London; Analyzing Women's Movement, en: Pearson, Ruth y Jackson, C., ed., *Feminist Visions of Development: Gender Analysis and Policy*, Routledge 1997/8; Women's Rights and the International Context: Some Reflections on the Post-Communist States, en: Threllfall, M., ed., *Mapping Women's Movements*, 1996.

Virginia Vargas Valente

Socióloga peruana, con especialidad en Ciencias Políticas y activa militante feminista, fundadora del Centro de la Mujer Peruana "Flora Tristán". Ex Coordinadora de ONG de América Latina y el Caribe para el Foro de ONG de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995. Coordinadora Regional Post-Beijing y de la red DAWN. Sus últimas publicaciones incluyen: *El Aporte de la rebeldía de las mujeres*, 1989; *Una nueva lectura: Género en el Desarrollo* (compiladora), 1991; *Cómo cambiar el mundo sin perdernos*, 1992; Co-editora de *Género en el Desarrollo*, 1992, y de *El triángulo del empoderamiento.*

Nira Yuval-Davis

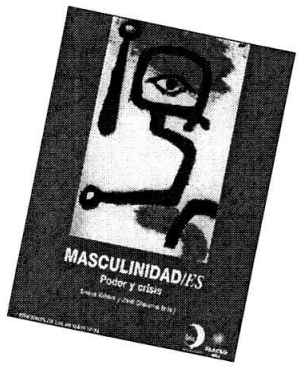
Investigadora inglesa/israelí. Professor y Líder de Cursos de Post-Grado en Estudios Etnicos y de Género en la Universidad de Greenwich, Londres. Ha escrito numerosos trabajos sobre mujeres, nacionalismo, racismo, fundamentalismo y ciudadanía en Gran Bretaña, Israel y

sociedades de inmigración masiva. Sus publicaciones más recientes incluyen: *Unsettling Settler Societies: Articulations of Gender, Ethnicity, Race and Class* (en co-edición con D. Stasiulus), Sage, 1995; *Gender and Nation*, Sage, 1997; y un número especial de *Feminist Review* titulado Women and Citizenship: Pushing the Boundaries, en el que fue editora invitada (otoño 1997).

Virginia Guzmán (Colaboración especial)

Sicóloga y Master en Sociología, chilena. Profesora del programa de Postítulo Género y Políticas Sociales del Programa de Estudios Interdisciplinario de Género, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Subdirectora e investigadora del Centro de Estudios de la Mujer, CEM, Santiago. Entre sus publicaciones se incluyen: *El conocimiento como un hecho político* (co-editora con Eugenia Hola), Ediciones CEM, Santiago, 1996; Beijing: las agendas global y regionales. Coordinadora de ONG de América Latina y el Caribe, Lima, noviembre 1996; La equidad de género en una nueva generación de políticas, en: *La dimensión de género en el quehacer del Estado* (co-autora), 1994.

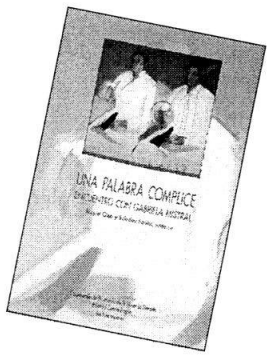
EDICIONES DE LAS MUJERES



MASCULINIDAD/ES. Poder y crisis

Teresa Valdés y José Olavarría (eds.)

Diversos estudios sobre la construcción social de las identidades masculinas. Escritos por autoras y autores de América Latina y del hemisferio norte que analizan e intentan descifrar el complejo universo de las identidades y prácticas masculinas dentro del contexto de los grandes cambios económicos, políticos y culturales de fin de siglo.
Una coedición con el Area de Estudios de Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO.
Escriben: Robert W. Connell (Australia), Ondina Fachel Leal (Brasil), Norma Fuller (Perú), David D. Gilmore (EE.UU.), Matthew C. Gutmann (EE.UU.), Michael Kaufman (Canadá), Michael S. Kimmel (EE.UU.), Josep-Vicent Marqués (España), Rafael Luis Ramírez (Puerto Rico), Mara Viveros y William Cañón (Colombia).



UNA PALABRA COMPLICE. ENCUENTRO CON GABRIELA MISTRAL

Raquel Olea y Soledad Fariña, editoras

Segunda edición corregida y aumentada a cargo de la Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada, Editorial Cuarto Propio e Isis Internacional.
Colección de reflexiones sobre las zonas ausentes en la imagen institucional de Gabriela Mistral, cuyo principal objetivo es situar en nuestro espacio cultural la expresión de aquellas mujeres que nos han precedido.
Escriben: Arturo Carrera y Teresa Arijón, Soledad Bianchi, Diamela Eltit, Patricio Marchant, Cecilia Vicuña, Adriana Valdés, Ana Pizarro, María Teresa Adriasola, Liliana Trevizán, Diana Bellesi, Eliana Ortega, Alberto Sandoval, Raquel Olea.

PERSPECTIVAS



Publicación informativa analítica trimestral (24 p.) sobre temas pertinentes al movimiento de mujeres y a las organizaciones de mujeres. Temáticas abordadas:

Nº 1. TRABAJO: ¿Dónde están las mujeres?
Aspectos críticos del trabajo femenino. Irma Arriagada.
Los retos de las mujeres ejecutivas. Martha Griselda Vásquez.
¿Qué quieren las empresarias? Encuesta Finam-Mori.

Nº 2. CIUDADANIA. Más allá del voto
Cómo encarar la ciudadanía. Mary G. Dietz.
¿Adiós a las matrioschkas? Kyra Núñez.
Ciudadanas de segunda.

Nº 3. FEMINISMOS
Un movimiento social y político.
Las rebeldes del 68.
Latinoamérica pasado y presente.

Nº 4. MUJERES DE MEDIOS
Había que demostrar que sí podíamos. Zulema Alanes Bravo.
Cómo involucrar a las periodistas.
La aventura de una red.

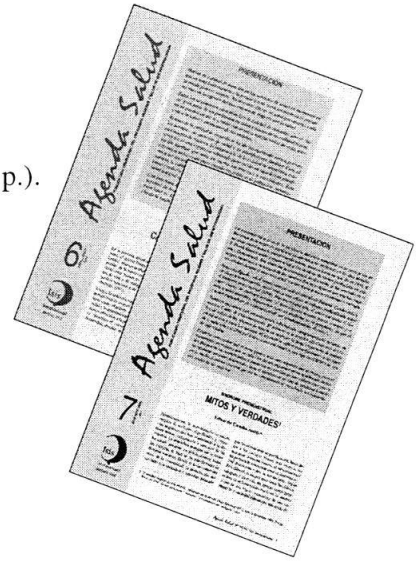
Nº 5. LAS TRAMPAS DEL LENGUAJE
Romper estereotipos. Patrizia Violi.
¿Es posible reformar la lengua? Mercedes Bengoechea.
Cambios necesarios. Eulàlia Lledó.

Nº 6. BARRERAS EDUCATIVAS
Un bien escaso. Nelly P. Stromquist.
El curriculum oculto: la coeducación sentimental. Rosario Altable Vicario.
Creando una nueva teoría y práctica. Denise Nadeau.

Nº 7. CAMPESINAS. Las segregadas de la tierra
Monederos separados. Patricia Bifani-Richard.
Cosechando desigualdades. Ximena Valdés.
Reformas que dañan. Guadalupe Hernández.

Nº 8. POBREZA. Con cara de mujer
El ajuste invisible.
Programa con aristas. María Jaffar.
Replanteamiento necesario. Yolanda Alba.

AGENDA SALUD



Publicación trimestral sobre la salud de las mujeres (8 p.). En ella se tratan temáticas como nutrición, relación trabajo/salud, calidad de los servicios, etc. Los temas aparecidos hasta el presente son:

Agenda Salud Nº 1
El desajuste del ajuste y la salud de las mujeres

Agenda Salud Nº 2
Niñas de hoy, mujeres de mañana

Agenda Salud Nº 3
La otra mirada de la salud mental

Agenda Salud Nº 4
Los riesgos del trabajo doméstico

Agenda Salud Nº 5
El peso del trabajo

Agenda Salud Nº 6
Calidad de atención

Agenda Salud Nº 7
Mitos y verdades: síndrome premenstrual

Agenda Salud Nº8
Reproducción asistida y clonación

Isis Internacional

Organización no gubernamental de carácter internacional, creada en 1974 como servicio de información y comunicación de las mujeres. Tiene estatus consultivo (Categoría II) ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de Naciones Unidas.

Su principal objetivo es el fortalecimiento y la plena participación de las mujeres en los procesos de desarrollo, a través de la formación de redes y canales de comunicación e información que faciliten el intercambio de ideas y experiencias a nivel nacional, regional e internacional.

Mantiene miles de contactos en el mundo, los que nutren con material informativo al Centro de Información y Documentación, que lo selecciona, organiza e ingresa en diversas Bases de Datos. Estas informaciones son difundidas en publicaciones periódicas y especializadas: *Ediciones de las Mujeres, Perspectivas, Agenda Salud, Boletín de la Red contra la Violencia, Directorios y Catálogos Bibliográficos.*

Coordina, además, programas de información para erradicar la Violencia en contra de la Mujer y forma parte de la Red Internacional de Centros de Documentación sobre Mujeres y Salud.

Centro de Estudios de la Mujer

Institución multidisciplinaria cuya acción está orientada a producir una retroalimentación continua y dinámica entre la sociedad civil, el Estado y la práctica investigativa.

Trabaja en forma interrelacionada en los siguientes ámbitos:

- Generación de conocimientos respecto de la situación de la mujer en Chile y las formas en que se produce y reproduce la discriminación.
- Programas de apoyo a la formulación de políticas públicas que incorporen la dimensión de género.
- Comunicación de nuevos conocimientos al público en general y a las mujeres en particular, a otros profesionales y a los responsables de políticas de modo de estimular un debate informado.
- Asesorías como forma de compartir los conocimientos acumulados y transformarlos en beneficios para las mujeres. Además brindan la oportunidad de hacer llegar esos conocimientos a las instancias de poder.
- Capacitación de género para generar espacios de toma de conciencia, de búsqueda de soluciones a los problemas y de perfeccionamiento y validación de metodologías educativas de género.

Equipo Isis Internacional Santiago

Coordinadoras Generales: Ximena Charnes y Ana María Gómez.

Coordinadoras de Programas:
Centro de Información y Documentación: María Soledad Weinstein.
Comunicaciones y Publicaciones: Ana María Portugal.
Programa Violencia en Contra de la Mujer: Ximena Charnes.
Programa Mujer y Salud: Ana María Portugal.
Comunicación electrónica: Isabel Duque.

Asistentes de Programas: María Isabel Carrasco, Sonia Chamorro, Carmen Torres, Alejandra Undurraga, Rosa Varas.

Apoyo computacional en Bases de Datos: Lila Palma, Katia Corbalán.

Administración: Patricia Gallardo, María Angélica Torrealba.

Apoyo administrativo: Cynthia Vergara, Juan Beiza.

Fundadoras de ISIS: Jane Cottingham, Marilee Karl.

Consejo Asesor: Alberto Cabezas, María Teresa Chadwick, Teresa Rodríguez, Regina Rodríguez, Germán Rojas y María Antonieta Saa.

Asociadas de ISIS Internacional

Anita Anand, India; Peggy Antrobus, Barbados; Marie Assaad, Egipto; Judith Astelarra, España; Suzanne Aurelius, Chile; Brigalia Bam, Sudáfrica; Nita Barrow, Barbados; Jessie Bernard, EE.UU.; Rekha Bezboruah, India; Kamla Bhasin, India; Adelia Borges, Brasil; Boston Women s Health Book Collective, EE.UU.; Elise Boulding, EE.UU.; Charlotte Bunch, EE.UU.; Ximena Bunster, Chile; Ah Fong Chung, Mauricio; Giuseppina Dante, Italia; Miranda Davies, Reino Unido; Corinne Kumar D'Souza, India; Elizabeth Eie, Noruega; Akke van Eijden, Holanda; Foo Gaik Sim, Malasia; Maria Girardet, Italia; Saralee Hamilton, EE.UU.; Karin Himmelstrand, Suecia; Devaki Jain, India; Kumari Jayawardena, Sri Lanka; Annette Kaiser, Suiza; Nighat Khan, Pakistán; Julieta Kirkwood*, Chile; Geertje Lycklama, Holanda; Mary John Manzanan, Filipinas; Giovanna Mérola, Venezuela; Robin Morgan, EE.UU.; Vivian Mota, República Dominicana; Magaly Pineda, República Dominicana; Ana María Portugal, Perú; Suzanna Prates**, Uruguay; Rhoda Reddock, Trinidad y Tobago; Luz Helena Sánchez, Colombia; Olga Amparo Sánchez, Colombia; Adriana Santa Cruz, Chile; Marie-Angélique Savane, Senegal; Else Skönsberg, Noruega; Cecilia Torres, Ecuador; Moema Viezzer, Brasil; María Villariba, Filipinas.

Agradecemos el apoyo de ACDI (Canadá); ASDI (Suecia); Christian Aid (Inglaterra); Evangelisches Missionswerk (Alemania); Fundación Heinrich Böll, e.V. (Alemania); Fundación Ford (EE.UU.); Gereformeerde Kerken (Holanda); John D. and Catherine T. Mac Arthur Foundation (EE.UU.); Ministerie van Buitenlandse Zaken (Holanda); OPS; UNIFEM.

Isis Internacional
Casilla 2067
Correo Central,
Santiago de Chile
Tel.: (56-2) 633 45 82
(56-2) 638 22 19
Fax: (56-2) 638 31 42
E-mail: isis@reuna.cl

* Fallecida, 1985
** Fallecida, 1988

EDICIONES DE LAS MUJERES

1984

Nº 1 II Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. (agotada)
Nº 2 Mujeres y medios de comunicación. Asia y el Pacífico.

1985

Nº 3 La salud de las mujeres. La experiencia de Brasil. (agotada)
Nº 4 Trabajadoras industriales en Asia.

1986

Nº 5 Movimiento feminista en América Latina y el Caribe. Balance y perspectivas. (agotada)
Nº 6 Mujeres campesinas. América Latina.

1987

Nº 7 Hasta que tengamos rostros. Las mujeres como consumidoras. (agotada)
Nº 8 Crecer juntas. Mujeres, feminismo y educación popular. América Latina y el Caribe. (agotada)

1988

Nº 9 Mujeres, crisis y movimiento. América Latina y el Caribe. (agotada)
Nº 10 Nuestra memoria, nuestro futuro. Mujeres e historia. América Latina y el Caribe. (agotada)

1989

Nº 11 Caminando. Luchas y estrategias de las mujeres. Tercer Mundo. (agotada)
Nº 12 Una palabra cómplice. Encuentro con Gabriela Mistral. (2ª ed. actualizada, 1996)

1990

Nº 13 Transiciones. Mujeres en los procesos democráticos.
Nº 14 El malestar silenciado. La otra salud mental. (agotada)

1991

Nº 15 La mujer ausente. Derechos humanos en el mundo. (volumen doble, 2ª ed. actualizada, 1996)

1992

Nº 16 Espejos y travesías. Antropología y mujer en los 90. (agotada)
Nº 17 Fin de siglo. Género y cambio civilizatorio. (agotada)

1993

Nº 18 Despejando horizontes. Mujeres en el medioambiente.
Nº 19 El espacio posible. Mujeres en el poder local.

1994

Nº 20 Familias siglo XXI.
Nº 21 De Nairobi a Beijing. Diagnósticos y propuestas.

1995

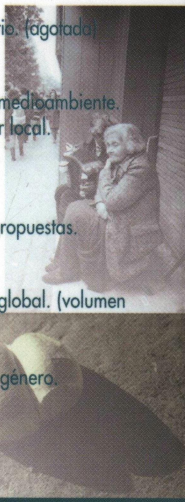
Nº 22 El trabajo de las mujeres en el tiempo global. (volumen doble)

1996

Nº 23 Por todos los medios. Comunicación y género.

1997

Nº 24 Masculinidades. Poder y crisis.



LA CIUDADANIA A DEBATE replantea la temática desde una perspectiva de género y presenta formas de razonamiento que permitan resignificar a las mujeres en tanto actoras sociales y su práctica socio-político-cultural. Las autoras ponen énfasis en la exigencia de repensar los procesos de participación social y de creación de cultura ciudadana para todos y para todas, en los ámbitos que requieren ser democratizados: desde los familiares a los políticos, desde los personales a los institucionales, desde los culturales a los económicos y tecnológicos, desde la reproducción y la sexualidad a los laborales.

